

ENTRE LAS CENIZAS



Licencia Reconocimiento -NoComercial-SinObraDerivada3.0

Se permite la copia, ya sea de uno o más artículos o del conjunto de la edición, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique el contenido de los textos, se respete su autoría y esta nota se mantenga.

Este libro puede ser descargado gratuitamente en www.surplusediciones.org y www.periodistasdeapie.org.mx/libros/

©2012, de la coordinación de este libro Marcela Turati, Daniela Rea.
© 2012, de los textos Alberto Nájjar, Daniela Pastrana, Daniela Rea Gómez, Elia Baltazar, John Gibler, Luis Guillermo Hernández, Lydiette Carrión, Marcela Turati, Thelma Gómez Durán, Vanessa Job.
©2012, del prólogo Cristina Rivera Garza.
©2012, de la edición, sur+ ediciones.

Cuidado de la edición: Patricia Salinas
Diseño de portada: Gabriela Díaz
Diseño de interiores: Pablo Rojas
Corrección: Juan Nivardy Carrillo Rodríguez y Patricia Salinas
Formación: Andrea Beltrán Arruti
Galeras: Gabriel Elías

sur+ ediciones
Porfirio Díaz 1105
Col. Figueroa 68070
Oaxaca de Juárez
Oaxaca

ISBN: 978-607-8147-11-3

Hecho e impreso en México
www.surplusediciones.org

ENTRE LAS CENIZAS

Historias de vida en tiempos de muerte

Elia Baltazar • Lydiette Carrión • Thelma Gómez Durán
John Gibler • Luis Guillermo Hernández • Vanessa Job
Alberto Nájjar • Daniela Pastrana • Daniela Rea Gómez
Marcela Turati

Prólogo de Cristina Rivera Garza

SUR+ EDICIONES • OAXACA

NOTA DE LAS EDITORAS

Al principio: el horror. La llamada guerra contra el crimen organizado declarada por el presidente Felipe Calderón comenzó a ahogarnos desde el inicio del sexenio. Los periódicos se convirtieron en contadores de muertos y nosotros, los periodistas, en corresponsales de guerra en nuestra tierra. En las redacciones se hablaba de “narcos” y “capos”, y el lenguaje “estilizado” del asesinato llegó para quedarse: “los enlonados”, “los entripados”, “los encajuelados”, “los encobijados”, “los disueltos”, “las narcofosas”, “las narcomantas”, y su máxima expresión, “el ejecutómetro”.

El horror se volvió una condición del país. Muertos, desaparecidos, masacres, huérfanos, viudas, desplazados, fosas comunes, cuerpos discapacitados por las heridas, seres inhabilitados por el odio, ciudades rotas, abandonadas. De ahí partimos. De un sexenio con permiso de matar, donde la vida perdió su valor, donde los muertos cotidianos eran culpables de su muerte.

En ese extraño, nebuloso campo de batalla, varios periodistas nos sentimos retados a escapar del horror, o por lo menos a no quedarnos paralizados ante él. A combatir, con investigación, datos, análisis y testimonios, el anonimato oficial de las víctimas. A recoger las historias de familiares, sobrevivientes y testigos que describían una realidad distinta a la narrada por los hacedores de la guerra en sus mantas o en sus boletines oficiales. Sentíamos esa urgencia de gritar que detrás de cada una de las noticias sobre los asesinatos, quedaban víctimas heridas y silenciadas que necesitaban solidaridad, ser escuchadas, atendidas.

Cuando nos sacudimos del aturdimiento inicial varios de nosotros escribimos crónicas o participamos en libros donde documentamos los impactos de la violencia en la sociedad. En las charlas y presentaciones de nuestro trabajo abundaba el dolor. Pero también entre el público surgía una inquietud: ¿qué podemos hacer? La pregunta no dejaba de resonar.

Entre periodistas nos cuestionábamos si podíamos escribir sobre la violencia sin abonar a la parálisis, a la desesperanza de la gente. Y cuáles son las historias de vida ocultas entre la muerte, cuáles las que más urge contar. Ante estas incertidumbres se abrió paso una respuesta: las que dan aliento.

Era verdad.

Este libro nace como un esfuerzo de ensayar o tal vez de construir un periodismo de esperanza, de exploración de lo posible, de construcción de paz. Un periodismo que provoque la indignación e invite a la acción. Que encuentre y cuente las historias de personas que, manejando su miedo, esbozan una respuesta a la pregunta que nos persigue: ¿qué podemos hacer?

Es un esfuerzo colectivo de periodistas hermanados por la indignación ante la pérdida de respeto por la vida humana durante el que ha sido llamado el sexenio de la muerte: Thelma Gómez, Alberto Nájar, Daniela Pastrana, John Gibler, Vanessa Job, Lydiette Carrión, Luis Guillermo Hernández, Elia Baltazar y las editoras. Lo hizo posible el financiamiento del Sindicato Noruego de Periodistas (Norwegian Union of Journalist), especialmente Eva Stabell, quien creyó a ciegas en este proyecto de la Red de Periodistas de a Pie.

Nuestro punto de partida fue que esta guerra no merece ser contada sólo desde la sangre, desde la brutalidad, desde el sinsentido de los asesinos uniformados y no uniformados. Merece ser contada desde la dignidad de los sobrevivientes, desde las costuras invisibles del amor que se asoman entre las ruinas, desde las personas sanadoras de almas, desde quienes se hicieron escuchar cuando salieron a las calles a gritar su verdad en público, desde las que se organizan con la inquietud de *hacer algo*.

Este esfuerzo implicó pararnos ante el horror desde un ángulo distinto para encontrar debajo de la tierra esas brasas que se niegan a apagarse, aprender a escarbar entre la destrucción para encontrar la reserva moral de este país que se plantó ante la guerra, prestar oído a los relatos de la gente que se sacudió la ceniza, retomó las riendas de su vida y con otros delinea un futuro distinto. Implicó acercarnos a la gente para encontrar: ¿de qué madera están hechas las mujeres que marchan por el país buscando a los hijos que les arrebataron o las que todos los días alimentan a migrantes desconocidos? ¿Por qué un padre sin darse tiempo para guardar el luto por

su hijo sale a arropar a todos quienes sufren como él? ¿Cómo una comunidad casi extinguida es capaz de desarmar la desesperanza?

El proceso de reporte no fue sencillo. Nos enfrentamos a nuestros propios idealismos y condicionamientos, a la práctica arraigada de mirar la realidad en blancos y negros, buenos y malos, a la simpleza de buscar héroes solitarios en lugar de colectivos organizados, a nuestra impaciencia por no ver resultados “más noticiosos”.

Aprendimos que el periodismo de esperanza exige entender procesos y que las soluciones esbozadas por quienes se oponen a la violencia son esfuerzos incipientes, sostenidos con pinzas, con actos de amor cotidiano, a contracorriente del vacío del Estado.

En ocasiones, ya no encontramos algunas experiencias que fuimos a documentar. Llegamos tarde. El terror las había alcanzado. Sin embargo, estamos convencidos de que cada vez que una experiencia se extingue otra germina.

Entendimos también que, a quienes habitamos este país, la guerra nos obligó a ser ciudadanos, a tomar postura. Nosotras y nosotros, como periodistas, decidimos ponernos junto a quienes la sufren, tratando de comprender algo sobre su fortaleza ante el dolor y sobre las claves que los mantienen trazando caminos hacia la paz, la justicia, la memoria y la verdad.

Hoy lo sabemos: la esperanza más que un puerto, es un horizonte. Un camino largo que se anda a pequeños pasos.

Ahora cuando hablamos en público del horror que hemos visto y del dolor que hemos tocado, y la gente pregunta qué podemos hacer, decimos que la respuesta se construye en

comunidad, al calor de una fogata. Entonces comenzamos a hablar de las rutas recorridas al lado de las y los protagonistas de este libro esperando que sus historias sirvan para construir algunas respuestas.

Marcela Turati y Daniela Rea

TODOS NOSOTROS, FOGATAS

PRÓLOGO

I. ENARGEIA

En *Memorial. An Excavation of the Iliad*, la poeta británica Alice Oswald se deshizo de unos siete octavos del texto original de Homero para rescatar así, fósiles en vivo, las muertes de aproximadamente 200 soldados, todos percidos en la guerra de Troya. Se trata, a decir de la poeta misma, de una re-escritura que intenta rescatar la *enargeia*, esa “luminosa, insoportable realidad” del poema homérico. Se trata, luego entonces, en primera instancia, de un saqueo. La poesía mira de reajo y, escarpelo en mano, extirpa del marasmo de datos y de anécdotas, el momento único e indivisible en que un ser humano pierde la vida. Eso es la guerra, después de todo; de esto se trata la guerra: de cómo seres humanos de carne y hueso pierden la vida de forma violenta. Armada, pues, con los instrumentos de la poesía, Oswald le arrebató

esa pérdida que es la muerte a la acumulación de palabras o de sangre que, con tanta frecuencia, conduce a la indiferencia o a la insensibilidad o a las lecturas de corrido. Si “la pena es negra”, si está “hecha de tierra”, si se “mete en las fisuras de los ojos/ y deposita su nudo en la garganta”, lo que este largo poema se lleva sobre el hombro, no a hurtadillas para que no se note, sino aparatosamente, para volverla más visible, es a la muerte en sí, a la muerte sola: la muerte oscura, anónima, violenta, de la guerra.

Ahí está, en la excavación poética de Oswald, en el duelo en el que nos invita a participar a través del tiempo y a lo largo del espacio, iridiscente para siempre, la muerte de Protesilaus: “...el hombre reconcentrado que se internó aprisa en la oscuridad/ con cuarenta barcos negros, dejando atrás su tierra”, el que “murió en el aire, mientras saltaba para llegar primero a la costa”. Y está también, en el gerundio de la eternidad, la muerte de Iphidamas, “el muchacho ambicioso/ A la edad de dieciocho, a la edad de la imprudencia”, el que incluso “...en su noche de bodas/ Parecía traer puesta la armadura”, el “[a] rrogante peón de campo que fue directo por Agamenón”, y que cayó “doblado como plomo y perdió”. Y está Coon, su hermano, el hermano de Iphidamas: “Cuando un hombre ve a su hermano caído sobre el suelo/ se vuelve loco, aparece corriendo como de la nada/ atacando sin ver, así es como murió Coon”. La cabeza separada de su cuerpo por la espada de Agamenón: “...y eso fue todo/ Dos hermanos asesinados en la misma mañana, por el mismo hombre/ Ésa fue su luz que aquí termina.” No podía faltar, entre tantas muertes anónimas, la muerte también de los héroes más conocidos. “Y Héctor murió como todos/ Era el líder de los troyanos/ Pero

la punta de una lanza dio con ese pedazo blanco/ Entre su clavícula y su garganta/ justo donde se encuentra el alma de un hombre”.

Uno tras otro, así van cayendo los 200 soldados de los cantos homéricos. Uno tras otro, en versos ceñidos, con frecuencia coronados por el eco de un coro, mueren otra vez. Y otra. Ahora bajo la luz de un sol contemporáneo, justo frente a nuestros ojos. Un memorial también es un ruego. ¿Era necesario que murieran de nueva cuenta? La respuesta es: sí. ¿Era necesario tallarse los ojos una vez más y dolerse? La respuesta es: sí. Cuando nos dolemos por la muerte del otro aceptamos, argumentaba Judith Butler en *Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence*, que la pérdida nos cambiará, con suerte para siempre. El duelo, el proceso psicológico y social a través del cual se reconoce pública y privadamente la pérdida del otro, es acaso la instancia más obvia de nuestra vulnerabilidad y, por ende, de nuestra condición humana. Por esta razón bien podría constituir una base ética para repensar nuestra responsabilidad colectiva y las teorías del poder que la atraviesan. Cuando no sólo unas cuantas vidas sean dignas de ser lloradas públicamente, cuando el obituario se convierta en una casa plural y alcance a amparar a los sin nombre y a los sin rostro, cuando, como Antígona, seamos capaces de enterrar al Otro, o lo que es lo mismo, de reconocer la vida vivida de ese Otro, aun a pesar y en contra del edicto de Creonte o de cualquier otra autoridad en turno, entonces el duelo público, volviéndonos más vulnerables, tendrá la posibilidad de volvernos más humanos. Por eso, aunque Protesilaus haya estado “bajo la tierra oscura ahora ya por miles de años”, es necesario acudir. Es preciso

acudir a su cita con la muerte y compartir, después, el duelo. Es necesario re-leer, por ejemplo, lo re-escrito por Oswald para actualizar la muerte que pasó y pueda así volver a pasar frente a nuestros ojos, sobre nuestras manos para que, eventualmente, ya no pase más. ¿Cuántas veces al día olvidamos que somos, por principio de cuenta y al final de todo, mortales? Es necesario, por ejemplo, leer *Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte*.

II. LOS ASUNTOS DE LA TIERRA

Troya no está lejos, se sabe. Troya está, de hecho, en todas partes, al acecho. Apostada a un lado de la respiración, la guerra nos embosca o nos aguarda. Y ahí, en efecto, donde irrumpe la desgracia o en los lugares hasta donde alcanzan sus esquivas, llega sin duda también, venda y grito a la vez, la palabra. Aunque con frecuencia ésta ha sido utilizada para mistificar la gesta del guerrero, colocando sobre las sienes de la lidia una corona de olivos que justifica los motivos del poderoso, la palabra también se ha aliado con la crítica que descrea o con el punto de vista del que resulta inerme.

Aunque en México durante gran parte del siglo XX la poesía estuvo más preocupada por la belleza y lo sagrado que por los asuntos terrestres de la plaza pública, hay y ha habido y sigue habiendo una poesía cabalmente política. Azuzada por la guerra calderonista que cuenta ya con algunas 80 mil muertes en su haber, la nueva poesía política que se escribe en México cuestiona los poderes fácticos y los poderes de la gramática planteándose preguntas que son a la vez angus-

tiantes e incómodas, urgentes, plurales. Son preguntas estética y políticamente relevantes. Están ahí en el poema “Los muertos”, de María Rivera, pero también en la excavación que Hugo García Manríquez hizo del Tratado de Libre Comercio en su *Anti-Humboldt*. Están en los *Hechos diversos*, de Mónica Nepote, y en *Querida fábrica*, de Dolores Dorantes. Están en “Di/sentimientos de la nación”, de Javier Raya y en *Antígona González*, de Sara Uribe. Están en muchos de los poemas incluidos en *País de sombra y fuego*, la antología que editó el poeta tapatío Jorge Esquinca. Todos ellos, toda esta energeia, subraya y excava y exhuma a los caídos, articulándose al lenguaje público del dolor, la resistencia, la dignidad.

Existe, en efecto, una larga tradición de escritura documental que ha registrado la experiencia de los sufrientes, a menudo con sus propias palabras. En México, gran parte de ese trabajo, de ese registro plural de la historia y del lenguaje estuvo y ha estado a cargo de sus cronistas. De Elena Poniatowska a Diego Osorno, de Carlos Monsiváis a Marcela Turati, de Juan Villoro a Magali Tercero, por mencionar a los muy conocidos; hay una larga lista de escritores que, siendo fundamentalmente escritores, son también, y también de manera fundamental, ciudadanos. Qué fortuna que los mejores entre ellos se den cita aquí, en este *Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte*.

III. RE-ESCRIBIR

La guerra calderonista (2006-2012), que ha sembrado al país de muerte y de duelo, ha motivado también y por lo mismo

a escritores de rango muy diverso a replantearse de manera dinámica y actual la relación de la escritura y la guerra, generando una refulgente gama de cronistas en México. Son ellos los que, excavando en la acumulación de datos y de sangre, logran rescatar esa “luminosa, insoportable realidad” de la guerra que mencionaba la poeta británica Alice Oswald. La palabra siempre es plural, pero tal vez pocos géneros como la crónica nos recuerden esa básica verdad con tanta fuerza. La palabra del cronista no puede dejar de ser la palabra de otro: una tensión en la que se dan cita, al menos, otros dos. Una expectativa. Algo que late. La relación de intercambio e implicación sobre la cual se basan todas las otras relaciones del mundo. La palabra, ahí, en ese vaivén entre enunciante y oyente adquiere, al menos, dos cabezas, tantos ojos, todas las manos. Usada y en uso, contaminada de todo, la palabra que se comparte —saliva, mirada, eco— toca las orillas de al menos dos experiencias, de al menos dos prácticas de significación, para producir, en el mejor de los casos, la respuesta total de la que hablaba Rukeyser¹. Este lado de

1. Muriel Rukeyser —traductora alguna vez de Octavio Paz, por cierto— estaba convencida de que el verdadero poema conminaba una “respuesta total” por parte del lector. En *The Life of Poetry*, un libro que estuvo fuera de circulación por más de 20 años antes de volver a ser editado en 1996, Rukeyser afirmaba: “Un poema invita. Un poema requiere. Pero ¿a qué invita un poema? Un poema te invita a sentir. Más que eso: te invita a responder. Aún mejor: un poema invita una respuesta total. Esta respuesta es total, en efecto, pero se formula a través de las emociones. Un buen poema atraparás tu imaginación intelectual —esto quiere decir

la palabra ha sido subrayado, a cabalidad, por muchos cronistas —practicantes de un género híbrido por naturaleza que se sostiene de la incorporación estéticamente relevante y políticamente útil de la experiencia de los otros. Son ellos los que, libreta o grabadora en mano, se adentran en las entrañas de un país en guerra no sólo para mostrar la saña y el extravío, la corrupción y la crueldad, sino también, acaso sobre todo, esas múltiples estrategias cotidianas que han utilizado hombres y mujeres para sobrevivir con dignidad en circunstancias extremas. Son ellos los que, re-leyendo y re-escribiendo los textos de muchos otros, los lenguajes de muchos otros, han logrado extraer el fósil vivo del empeño y la confianza, las tradiciones y el ingenio, el sentido de comunidad y la fe que, entre otros tantos elementos, han salvaguardado la existencia del país. Algunos de ellos, sin duda los mejores, están aquí, en *Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte*.

que cuando lo atrapes, lo atraparás intelectualmente también— pero el camino es a través de la emoción, a través de eso que llamamos sentimiento”. Lejos del gesto imperialista de intentar suplantar la voz de los otros con la voz propia, Rukeyser se dio a la tarea de documentar las luchas y sufrimientos de sectores de la clase trabajadora norteamericana incorporando sus voces tal y como éstas aparecieron en documentos oficiales o en entrevistas orales o en registros del periódico. Rechazando de entrada el papel del poeta gurú que guía visionariamente a los desposeídos, Rukeyser investigó y entrevistó a los directamente involucrados en las luchas y tragedias cotidianas del capitalismo que les tocó vivir, incorporando luego su testimonio en textos por fuerza interrumpidos, trastocados, intervenidos.

IV. ¿PERO CÓMO SE HACE EN REALIDAD UNA FOGATA?

Es fácil caer abatidos en tiempos de guerra. En el afán crítico que todo lo arrasa, tratando de identificar causas con presteza y enfocarse con similar urgencia en las soluciones del caso, es a veces fácil pasar por alto la amalgama de acciones cotidianas que mantienen a una comunidad en pie. En México, especialmente ahora, es fácil olvidar las muy largas y muy vivas tradiciones de resistencia que marcan a este país desde su mismo nacimiento. En efecto, de acuerdo con algunos historiadores, la conquista de México coincidió con una ola de sublevaciones populares contra el poderío azteca, cada vez más distante de sus gobernados. Si las crónicas indígenas de la época son dignas de confianza, habrá que recordar que no sólo los españoles le llamaron “perro” a Moctezuma, y que fueron sus propios congéneres quienes le arrojaron las piedras que lo acabarían. Así mismo, de entre todas las movilizaciones que resultaron en las independencias de Latinoamérica, sólo la mexicana se convirtió, al menos entre 1810 y 1815, bajo el liderazgo de Hidalgo y de Morelos, en un verdadero intento de revolución estructural. Basta leer ese maravilloso documento que es *Los sentimientos de la nación* (somos una nación en cuyas letras iniciales se desliza, en efecto, la palabra sentimiento) para darse cuenta de lo que reside en la médula misma de este país: igualdad entre las razas, distribución de la tierra, devoción a la virgen de Guadalupe. Como más tarde lo argumentaba Andrés Molina Enríquez en *Los grandes problemas nacionales*, ese diagnóstico positivista que escribió un poco antes del surgimiento de los muchos movimientos armados y civiles a los que se les denomina como la Revo-

lución Mexicana de 1910, la raíz de los males y la razón de la acción comunitaria son las mismas: la tierra. La propiedad de la tierra. La desigualdad social que provoca la concentración de la tierra, y su riqueza, en pocas manos.

No es extraño de ningún modo, pues, que una buena parte de las crónicas que animan este volumen hagan caso omiso de la linealidad del tiempo y citen, en la palabra y en la acción del presente, prácticas de organización y de creencia que han aparecido una y otra vez, transformadas siempre, actualizadas de alguna forma, en la historia de México. Porque, entre otras tantas cosas, lo que este *Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte* conforma es una historia viva del pasado reciente mexicano desde ese abajo múltiple, protéico, sináptico que está, en realidad, en todos los ámbitos del espacio social.

V. UNO SIEMPRE CUIDA SU CASA

“Las fogatas nos sirvieron para cuidarnos y conocernos”, dice un participante de las recientes movilizaciones en Michoacán. Pero lo podría decir, sin problema alguno, el lector de este libro también. Vueltas leño y lumbre, calor y resguardo, cosa que ilumina y crepita, las crónicas de este libro animan a la cercanía y a la complicidad. Es importante estar al tanto de los periodistas desaparecidos, de la rapacidad de los narcotraficantes contra las comunidades indígenas, de la saña con que son tratados los migrantes centroamericanos en un tren que no por cualquier cosa le apodan “la bestia”, en su paso por territorio mexicano, del dolor que pesa en los

corazones de los padres y madres de familia que han perdido hijos adolescentes en Ciudad Juárez, de la violencia que envuelve las vidas de tantos jóvenes en las pandillas urbanas de la Sultana del Norte, de la depresión que ataca, y ataca sin cuartel, a comunidades enteras sin la posibilidad de recurrir a ningún tipo de cuidado médico, de las venganzas que han tasajeado incluso a los que denuncian la violencia extrema por internet. Es importante, por supuesto, estar al tanto de todo esto. Pero es igualmente relevante, estética y políticamente, poner atención a lo que Alice Oswald llamó *enargeia*, esa “luminosa, insoportable realidad” del esfuerzo de todos los días y la resistencia cotidiana y la sobrevivencia más íntima. Es importante producirla, esa *enargeia*. De ahí estas fogatas de palabras, a través de las que nos conocemos y nos protegemos. De ahí esto: aquí. Estos son los casos. Las tradiciones ancestrales a las que recurren los miembros de una comunidad indígena que busca formas eficaces de autogobierno para resguardar tanto la seguridad pública como el derecho a sus bosques comunales. La reciedumbre de esas “locas que corren detrás de un tren” para alimentar a los migrantes que arriesgan sus vidas para atravesar nuestro país, demostrando así que el corazón mismo de lo doméstico, como lo es el cocinar, no está alejado de ninguna manera de lo político, como lo es la solidaridad con el desvalido. Los padres y maestros que, habiendo perdido a sus hijos y a los hijos de otros en una guerra que se ha ensañado especialmente contra los jóvenes, organizan actividades deportivas en Ciudad Juárez, justo en esa colonia que la historia de la infamia nacional cuenta como una masacre fundacional: Salvárcar. Los expandilleros que, conociendo el privilegio de la edad adulta,

se vuelven hacia los suyos para mover la energía adolescente de los estratos de la violencia hacia los vericuetos del arte y de la música. Las mujeres que, aprovechándose de una terapia hecha de flores, se dan a la tarea de sanar eso que los antiguos llamaban el alma y nosotros sabemos que quiere decir el alma y el cuerpo en estos días. Los jóvenes y los no tan jóvenes que, sirviéndose de su acceso a conexiones digitales, han organizado también la resistencia contra el silencio de la guerra a través del uso estratégico del blog y del twitter. Todos ellos y todos ustedes y todos nosotros. Fogatas, sí. Y todos aquí.

Qué raro, pero qué cierto, es sentirse ahora, después de leer este libro, tan orgullosa de un país tan malherido. Qué gusto llenarse la boca con las palabras *estoy con ustedes*. Ustedes me son. Somotros, que diría Rimbaud. Gracias por compilarlo; gracias por escribirlo. Si un libro alguna vez es capaz de salvar la vida de alguien, ése, sin duda, será este libro. “Uno siempre cuida su casa”, dice otro participante de otro movimiento popular en el México de hoy. En efecto. Uno siempre. O más.

Cristina Rivera Garza

*A las y los ausentes, porque su memoria nos traza el camino.
A quienes se guían por esos trazos para construir esperanza.*

EL PUEBLO QUE ESPANTÓ AL MIEDO

Thelma Gómez Durán

Thelma Gómez Durán es periodista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Comenzó su labor periodística en el área cultural de Notimex. Ha sido reportera y colaboradora de varios diarios y revistas de México, donde ha escrito sobre temas ambientales, ciencia, artes, derechos humanos y movimientos sociales. Es coautora del libro Migraciones vemos... infancias no sabemos (Ririki). En 2008 obtuvo dos menciones honoríficas en el Premio de Reportaje sobre Biodiversidad. Con un texto sobre el hondureño Julián Sánchez Benítez, participó en el proyecto colectivo 72 migrantes (Almadía, Fronterapress), impulsado por la periodista Alma Guillermprieto y dedicado a los migrantes asesinados en Tamaulipas en 2010. En 2011 obtuvo el segundo lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, con un reportaje sobre Cherán.

Ese viernes aún no amanecía. Rosario se envolvió con su rebozo, se reunió con otras mujeres y plantó su cuerpo pequeño, robusto, en medio del camino que lleva al bosque, un bosque que se convertía en desierto por culpa de los hombres que a diario pasaban frente a sus casas con camiones llenos de árboles masacrados. Rosario y sus compañeras esperaron el primer camión. El hombre que conducía ni siquiera pisó el freno al mirarlas. Ellas lo detuvieron a pedradas, con las piedras que encontraron al lado del camino. Un muchacho tocó las campanas de la iglesia centenaria conocida como El Calvario. Lo que se escuchó no era el sonido fúnebre que anuncia la muerte de un vecino, tampoco el repiqueteo lento que llama a misa. Esa mañana, los habitantes de la comunidad indígena de Cherán oyeron el toque desesperado que alerta cuando existe un peligro. Era el mismo que una semana antes escucharon cuando se

quemó una casa y muchos salieron para apagar el fuego que se les adelantó y mató a dos niños.

También se escuchó el estruendo de uno, dos, tres cohetones.

La gente despertó y comprendió que algo andaba mal en su pueblo. Ese día, decidieron recuperar el sentido de la palabra Cherán, que en purépecha es un verbo y significa “asustar”. El viernes 15 de abril de 2011, esta comunidad comenzó a espantar al miedo.

* * *

En un cuarto habitado por una mesa, un Jesucristo y la Biblia, Rosario recuerda lo que vivió el día en que Cherán empezó su lucha por recuperar la paz robada por quienes, sin disimulo, saqueaban sus bosques, extorsionaban, asesinaban y desaparecían a su gente desde, por lo menos, tres años atrás.

—Éramos como quince señoras. Faltaba poco para las cinco de la mañana. Nosotras, nerviosas, empezamos a atajar los carros que bajaban. Quién sabe de dónde salieron, pero llegaron puros jovencitos a apoyarnos. Cuando se escucharon las campanadas se juntó más y más gente. Unos tiraban piedras y otros las arribaban. Lo bueno fue que el pueblo respondió. No nos dejaron solas.

Rosario habla quedito. Como muchos de sus vecinos, recibe al visitante con una invitación que, en ocasiones, suena como orden: “¡síntese a comer!” La miro y me pregunto qué fue lo que ella y sus vecinas vivieron para que ese viernes de abril explotaran, para que su voz de arrullo se convirtiera en un grito de exigencia, para que decidieran “levantarse”. ¿Qué vivieron para aventurarse a enfrentar a los talamontes, a expulsar a la policía, al presidente mu-

nicipal y a los partidos políticos? ¿Qué los llevó a prender el fuego y fraguar una nueva forma de gobierno? ¿Qué fue lo que pasó para que se rebelaran en una tierra controlada por narcotraficantes?

* * *

En el mapa de México, el municipio indígena de Cherán está en la meseta purépecha de Michoacán, el estado donde nació y se extendió como hiedra La Familia, grupo dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y otros delitos. El estado donde Felipe Calderón —días después de llegar a la presidencia el 1 de diciembre de 2006— empezó su “guerra contra el narcotráfico” que en menos de seis años dejó más de 60 mil muertos.

A Cherán se le encuentra entre las ciudades de Uruapan y Morelia. La primera inauguró en septiembre de 2006 —con cinco cabezas humanas arrojadas a una pista de baile— las escenas de horror y violencia que, desde entonces, golpearon a México. La segunda, capital del estado, se estremeció en septiembre de 2008 con el estallido de dos granadas en su centro histórico, justo el día de la Independencia.

Para llegar a Cherán es preciso adentrarse a una región de bosques y lagos, cruzar pequeños pueblos indígenas habitados por campesinos y carpinteros. Desde el 15 de abril de 2011, el visitante sabe que está en Cherán cuando se topa con una barricada construida con costales de arena, vigilada por hombres armados. Un letrero da la bienvenida: “Prohibido introducir bebidas embriagantes, portar o difundir propaganda de partidos políticos, utilizar vehículos con cristales polarizados...”

Es un pueblo grande, con calles angostas y casas de dos pisos. Sus 13 mil habitantes viven del campo, la albañilería, la fabricación de muebles y juguetes de madera, la venta de blusas bordadas, pero sobre todo, del dinero que envían los 7 mil migrantes que viven en Estados Unidos. Aquí, las mujeres son quienes conservan la vestimenta purépecha: rebozo de franjas azules y negras, blusas bordadas y arracadas de oro, un símbolo de linaje indígena.

En esta comunidad, el miedo comenzó a crecer a finales del 2007, cuando el priista Roberto Bautista Chapina —nacido aquí, pero criado en Uruapan— ganó las elecciones para presidente municipal. En este lugar cuentan que llegó a la alcaldía porque hizo tratos con los líderes de la tala ilegal que también controlan la siembra, producción y venta de drogas en la región. El pago por su triunfo político, dicen, fueron los árboles del cerro San Miguel: 20 mil hectáreas de bosque que desaparecieron en dos años; casi el 70% de los bosques del pueblo.

A Roberto Bautista también le achacan la muerte del maestro Leopoldo Juárez, su principal crítico y líder local del PRD. Juárez inauguró la lista de 15 asesinados y cinco desaparecidos que Cherán sumó entre 2008 y julio del 2011. Años en los que el país multiplicó el número de muertos, desaparecidos, masacres, fosas clandestinas y desplazados.

Es cierto que la llegada de Bautista aceleró la tala ilegal y desató la violencia en Cherán, pero las cosas no marchaban bien desde años atrás. Antes de Bautista ya existían diferencias por la tala clandestina y porque aquellos que dirigían los bienes comunales se afiliaron a partidos políticos, no rendían cuentas sobre el aserradero y la resinera comunal. Para

muchos ya no era un secreto que en las zonas altas de los montes existían cultivos de marihuana y laboratorios de drogas sintéticas.

* * *

La preocupación por lo que pasaba en Cherán creció en 2008. En las esquinas se veía a jóvenes consumiendo drogas, “y eso antes no se miraba aquí”, dice María, mujer a la que le faltan dientes, pero le sobra energía cuando hace tortillas. Cuando anocheía, sólo algunos cuantos se atrevían a caminar por el pueblo. Sólo en el interior de las casas, se comentaban las noticias: al dueño de los abarrotes Estrada, lo secuestraron. Al comunero Tirzo Madrigal, lo desaparecieron. A las mujeres que venden en el tianguis ya les pidieron “la cuota”, dizque para darles seguridad. A la par, la gente preguntaba: ¿quiénes son esos que se pasean, con música a todo volumen, en camionetas y autos de lujo?

—Cuando reclamábamos al presidente municipal, nos decía: “déjenlos, no se metan en problemas. Ellos andan bien armados”. Varias veces fuimos a denunciar a Morelia, pero nadie nos hacía caso —cuenta María.

Los pobladores añoraban los tiempos en que no se robaban nada, que no se oía de asesinatos ni desapariciones. Tiempos en los que subían al bosque a recolectar leña, resina, hongos y plantas para curarse o hacer té.

—Las mujeres decíamos: “¿cómo le vamos a hacer? No podemos seguir así” —recuerda Rosario.

A ellas se les ocurrió escribir un mensaje. Con ayuda de sus hijos, hicieron unos 300 volantes. El 13 de abril, las esquinas de Cherán amanecieron con papelitos regados.

“Al pueblo de Cherán se hace una invitación para que reflexiones de las cosas que están sucediendo, y que las autoridades no hacen nada, no se preocupan por defender los bosques, por lo que se te pide: organízate en tu calle, colonia o barrio, para defender el ojo de agua de la ‘cofradía’ ya que es uno de los manantiales que abastece una parte de Cherán. Este escrito no pertenece a ningún partido político, se hace porque da tristeza de cómo están quedando los cerros, sabemos que los árboles son los que retienen el agua de las lluvias. Ya Basta”.

Meses antes, algunos hombres intentaron detener a los talamontes: hicieron zanjas para cerrar el paso al bosque y convocaron a organizarse para enfrentarlos. Pocos respondieron. El desánimo creció cuando hombres armados entraron al pueblo y se llevaron a Rafael García y Armando Jerónimo, integrantes del comisariado de bienes comunales.

Las mujeres decidieron que ellas lo intentarían. “Pensamos que por ser mujeres, no nos harían nada”, dice Rosario. Por las dudas, compraron cohetones. Acordaron que el domingo subirían al monte. Los planes se adelantaron cuando vieron que ya no existían los árboles centenarios que rodeaban el manantial de La Cofradía.

—Los manantiales son sagrados, porque representan vida. Nosotros los cuidábamos, los protegíamos. Y esos hombres que bajaban noche y día con sus carros bien cargados de troncos, que no respetaban nada, destruyeron esa parte sagrada. Dijimos eso sí ya no —recuerda Rosario.

* * *

A José le gustan los pantalones pegados y las camisetas negras. Tiene 21 años. Cuando ese viernes de abril escuchó

el repiqueteo desesperado de las campanas corrió hacia El Calvario; pensó que se quemaba una casa.

—Miré a las señoras y a puros chavalos enfrentando a los talamontes. No lo pensé dos veces, me uní. Agarramos a uno, después a otros dos. En total agarramos a cinco y quemamos sus camionetas... Yo les había agarrado coraje, porque ahí donde vivo los veía pasar diario con los carros llenos de madera. Si te les ponías, te amenazaban.

José recuerda que antes de que dieran las diez de la mañana, desde una azotea, los jóvenes miraron cómo entraban al pueblo varias camionetas con hombres encapuchados y armados, escoltados por los policías municipales.

—Venían a rescatar a los talamontes. Traían sus cuernotes de chivo. Con piedras y cohetes los atajamos antes de que avanzaran. No lograron subir porque aventamos un cohete y le dio a uno de ellos. Nosotros pensamos que murió. Antes de irse volvieron a disparar y le dieron a uno de los nuestros —recuerda José.

Ernesto, de 28 años, perdió la vista del ojo derecho y la movilidad de su brazo.

* * *

En la plaza de El Calvario, los habitantes se reunieron alrededor de los cinco talamontes.

—¡Mátelos, mátelos!

—No. En Cherán no somos asesinos —gritó una mujer.

—¿Quién los manda? ¿Quién es su jefe?

Los detenidos hablaron. Sus palabras confirmaron algunas sospechas. Dijeron que por cada carro de madera pagaban “una cuota” de mil pesos. Que el líder era Cuitláhuac Her-

nández, El Güero, hombre originario de Rancho Morelos. El mismo que comenzó su historia negra robando ganado, que se ganó la simpatía de varios porque asaltaba camiones y repartía el botín entre los habitantes de los empobrecidos ranchos de la meseta purépecha. En unos cuantos años, la fama de Cuitláhuac Hernández creció al adherirse a La Familia. Al dividirse este grupo y formarse la organización Los Caballeros Templarios, él se unió a ellos y tomó más fuerza.

Los talamontes detenidos aseguraron que con El Güero trabajaban hombres de San Lorenzo, Santa Cruz Tanaco, Capácuaro, Rancho Casimiro, Rancho Cerecito y Rancho Morelos. También algunos habitantes de Cherán. Explicaron la ruta del tráfico ilegal de madera en la región: los árboles llegan a los aserraderos de Tanaco y San Lorenzo. Ahí se convierten en tablones y salen para ser vendidos en Guadalajara o San Luis Potosí.

La confesión de los talamontes llevó a la gente a desconocer al alcalde, a correr a los policías y llamar al Ejército. Los soldados les respondieron que no tenían una orden para ir y cuando la tuvieron se instalaron a las afueras del pueblo. No duraron ni una semana. Se fueron después de que los cheranenses entregaron a los cinco hombres que tuvieron retenidos en El Calvario. La gente los entregó a funcionarios estatales porque un grupo armado secuestró a cinco nativos de Cherán que viajaban a Zamora. Amenazaron con matarlos si el pueblo no entregaba a los talamontes.

* * *

“¿Qué hacemos? Aquellos van a regresar”, decían las mujeres la tarde del viernes 15. Algunos propusieron desempolvar el

método de defensa que hace décadas utilizaron sus abuelos: atrincherarse. Construyeron barricadas en las entradas del pueblo. Los hombres montaron guardia. Las mujeres prepararon comida, café y té. Los jóvenes juntaron piedras, llenaron botellas con gasolina y vigilaron desde las azoteas más altas.

Por la noche, se prendió la primera fogata en El Calvario. A la siguiente noche, en esquinas cercanas, se prendieron dos más y luego otras y otras. En los cuatro barrios, en todos los cruces de dos calles, se prendió el fuego. Ciento noventa y cuatro fogatas iluminaron las noches de Cherán durante nueve meses. En cuanto se metía el sol, la gente prendía la madera, preparaba comida y se sentaba alrededor de los leños ardientes para compartir tortillas, pan, plática y anhelos.

Para los purépechas reunirse alrededor del fuego es parte de la vida misma. En sus casas, la fogata ocupa el centro de la cocina. Es alrededor de ella que la familia comparte alegrías y tristezas. Es frente al dios fuego, el Tata Juriata, que se discuten los problemas y se buscan soluciones.

En Cherán, los leños se sacaron de la cocina para prenderse en las calles. Entre cenizas y humo se reencontró la comunidad. Las fogatas se convirtieron en símbolo de resistencia, de unión y en la base de organización de la comunidad.

—Las fogatas sirvieron para cuidarnos y conocernos. Ya hasta parecíamos una sola familia de tanto que estábamos ahí —recuerda Rosario.

Al calor de la fogata, la gente de Cherán desempolvó formas de organización comunitaria que fueron arrinconadas cuando los partidos políticos aumentaron su presencia. Se revivió el “rondín comunitario” que dejó de existir a finales de los años ochenta, cuenta David, un abogado veinteañero.

Para formar el rondín, cada barrio eligió a 25 hombres nacidos en Cherán y mayores de 16 años. Desde abril de 2011 se les mira trepados, cargando su R-15 o AK-47 —que pertenecían a la Policía Municipal o que la gente donó— en la parte trasera de las camionetas que también eran de la Policía Municipal. Son los encargados de la seguridad del pueblo, de recorrer las calles y hacer guardias en las barricadas.

* * *

La primera vez que visité Cherán fue un domingo de junio de 2011. Llegué en la caravana que organizó el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad para llevar víveres al pueblo que, para entonces, llevaba dos meses atrincherado. No entraban camiones repartidores de productos. Las escuelas estaban cerradas y sólo unos cuantos pobladores se atrevían a ir más allá de los límites del pueblo. Tenían razones para no salir.

A las pocas semanas de haberse atrincherado, encontraron volantes en los que se ofrecían 10 mil pesos a quien entregara a un cheranense a La Familia. Después recibieron una amenaza parecida, pero firmada por Los Zetas.

Aquel domingo que Cherán recibió a la caravana, llovía con discreción. Las mujeres prepararon la comida que sirven cuando hay fiesta: corundas y churipo. Los niños, con la mitad de la cara cubierta con un paliacate, recibieron a los fuereños con carteles que decían: “Justicia para los bosques”, “Justicia para los asesinados y desaparecidos”, “Queremos vivir sin angustias y temores”.

Ese día conocí a Antonia, historiadora de 33 años, pantalones de mezclilla, tenis y rebozo. La encontré haciendo

tortillas en la fogata donde todas las noches se reunía con sus vecinos. “Desde el 15 de abril estamos rescatando la Jarojpikua”, me dijo. En purépecha, Jarojpikua significa “ayudarse unos a otros”.

Gracias a una beca para estudiantes indígenas, Antonia estudió la maestría en España y Estados Unidos. Conocer otras tierras no la alejó de Cherán.

—Mi familia me enseñó a tener un fuerte sentido de comunidad, un compromiso con mi pueblo. Mi pueblo es mi casa. Y uno siempre cuida su casa.

Lo mismo le inculcaron a Salvador, a David, a Guadalupe, a Pedro, a Ignacio, a Clara... Son abogados, biólogos, arquitectos, ingenieros, maestros. Como Antonia, se sentaron alrededor de las fogatas para fraguar el futuro de su pueblo con padres, abuelos, hermanos y vecinos.

* * *

En agosto de 2011, cuando el país ya había olvidado que Cherán seguía atrincherado, sus pobladores anunciaron que no participarían en la elección para presidente municipal y gobernador.

—En las fogatas, comentábamos que los partidos no hacían más que dividir, que los políticos sólo llegaban a servir a los suyos; que el gobierno ni caso nos hacía, nada más nos estaba cansando, no les importaban nuestras demandas de seguridad y justicia —recuerda Antonia.

El 24 de agosto de ese año, la gente se reunió en la plaza principal. Por mayoría de votos, acordaron elegir a sus autoridades como lo hacían sus abuelos. En otros tiempos —recuerda María— cada barrio elegía a un habitante

para ser presidente municipal. Después, en una asamblea se escogía a quien sería el candidato principal. Los partidos sólo prestaban su registro; las votaciones en las urnas eran sólo un trámite.

La Coordinación General del Movimiento de Lucha de la Comunidad Indígena de Cherán —que se formó días después del 15 de abril del 2011— envió un documento al Instituto Electoral de Michoacán; exigían el respeto a su derecho de elegir a sus autoridades por usos y costumbres.

—Cuando la gente dijo que no quería elección, se dieron varias bajas en el movimiento. Se salieron personas que ya estaban acostumbradas a vivir de la política —recuerda María.

—Varios que lucharon contra los talamontes, se convirtieron en nuestro peor enemigo, hicieron todo porque sí se votara en Cherán —dice Francisco, un hombre que perteneció al PRD y se decepcionó del partido cuando Leonel Godoy llegó a la gubernatura en 2008 y no atendió su solicitud de seguridad.

Antonio Tehandón fue uno de los que dejó el movimiento. Se postuló como el único candidato para alcalde por el PRI, PRD, Nueva Alianza, Convergencia y Verde Ecologista. Al Instituto Electoral de Michoacán llevó las firmas de 581 habitantes que sí querían elecciones.

El grupo que deseaba un gobierno comunitario comenzó una nueva lucha. Sus aliados fueron cuatro jóvenes abogados que decidieron jugársela con este pueblo. Dos de ellos nacieron en Cherán: Salvador Torres y David Romero; a ellos se unieron Orlando Aragón y Érika Bárcenas.

Abogados y comuneros exigieron que se materializara lo que indica el artículo 2 de la Constitución sobre la libre de-

terminación de los pueblos. Fueron los primeros en usar las reformas del artículo 1, que obligan a respetar los tratados internacionales sobre derechos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los plasmados en la Declaración de la ONU.

Con esos argumentos y las firmas de más de dos mil habitantes, así como el acompañamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, los abogados llegaron hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ningún periódico nacional lo informó, pero el 2 de noviembre de 2011, por mayoría de votos (sólo uno en contra), los magistrados determinaron que Cherán tenía derecho a no participar en las elecciones y, además, podía elegir a sus autoridades con el sistema de usos y costumbres.

No fue tan fácil liberarse de los partidos.

Los cheranenses tuvieron que salir a las calles para exigir al Instituto Electoral de Michoacán y al Congreso del Estado respeto a la decisión del Tribunal. Eso sucedió el 13 de noviembre, día en que Michoacán elegía a gobernador y presidentes municipales. Ese domingo, en la comunidad no se instalaron urnas. Rosario, Antonia, José, Carmen y cientos de habitantes marcharon por las calles del pueblo y atiborraron la plaza con mantas que decían: “Nuestros sueños no caben en las urnas”, “No somos un voto, somos indígenas y tenemos dignidad”. Los niños aprendieron a gritar: “Si Zapata viviera, qué chinga les pusiera”, “Arriba, abajo, partidos al carajo”.

El siguiente paso lo dieron el 18 de diciembre, cuando el Instituto Electoral de Michoacán realizó una consulta para comprobar que la mayoría quería desterrar a los partidos. El procedimiento fue sencillo. En cada uno de los cuatro

barrios se realizó una asamblea y se dijo: “levanten la mano quien esté a favor de elegir a las autoridades por el sistema de usos y costumbres”.

En el barrio cuarto, Camilo fue el único que no levantó la mano. Este comerciante de 30 años, que al principio del movimiento anduvo en las barricadas, fue de los pocos que se atrevió a mostrar su desacuerdo con el nuevo rumbo que tomaba su comunidad. Otras siete personas más lo hicieron en los barrios primero y segundo.

Ese día, en los cuatro barrios, 4 mil 846 personas votaron por que en Cherán ya no se realizaran elecciones con el sistema de partidos.

* * *

Un mes después, el 22 de enero de 2012, Cherán ayudó a recordar al país otra forma de elegir autoridades. No existieron largas y costosas campañas políticas. El pueblo no se ensució con propaganda. Sus bardas no se pintaron con promesas vacías ni asistieron a mítines para recibir una despensa, una gorra o una camiseta.

La elección fue así: cada uno de los cuatro barrios realizó su asamblea en el patio de una escuela. Tres cohetes sonaron para avisar que iniciaba la elección de los 12 hombres, tres por cada barrio, que formarían el consejo mayor. Los vecinos proponían a su candidato.

En el barrio tercero se escuchó esto:

—Propongo al comunero José, porque ha demostrado que está con su pueblo, es responsable y nunca ha tenido problemas en su familia —dijo Josefa.

—Propongo al señor Héctor, porque ha participado en las comisiones, nació en Cherán y tiene un modo honesto de vida —aseguró Sergio.

Seis hombres fueron propuestos. Uno agradeció el honor, pero explicó que no podía participar por problemas familiares. Otro no se presentó; un día antes se cayó del caballo y fue a dar al hospital. Los cuatro restantes se colocaron frente a la gente y hablaron:

—Nunca he sido político. No hablo mucho, pero les digo: antes que mi familia está mi pueblo —dijo Héctor, militar jubilado.

—No hay necesidad de que prometamos lo que no podemos cumplir. Sólo se necesita querer al pueblo, querer a nuestra gente, querer nuestra cultura para representarla —explicó José, maestro de secundaria.

Y comenzó la votación. Cada uno de los candidatos se paró sobre una silla de aluminio. Frente a él se formaron todos aquellos que le daban su voto. Los tres candidatos con las filas más largas fueron los elegidos.

Cuando terminó la votación, Orlando Aragón, abogado que realiza un doctorado en ciencias antropológicas, me dijo:

—El movimiento de Cherán se tiene que leer en clave política y no sólo cultural. Ellos están demostrando que la política puede ser el arte de lograr lo imposible.

Y mientras los habitantes de Cherán andaban en esas artes imposibles, en otras comunidades de Michoacán —sobre todo las indígenas— el narcotráfico seguía sin bajar la guardia y tomaba más fuerza en el control de negocios como la siembra del aguacate, “el oro verde” como lo conocen en el estado.

El 5 de febrero de 2012, Cherán estrenó su nuevo gobierno. En él se eliminó la figura de presidente municipal. Su lugar fue ocupado por los 12 K'eris, palabra que en purépecha significa

“los grandes”. Cuando tomaron protesta, escucharon los principios a respetar:

Servir y no servirse.

Representar y no suplantar.

Construir y no destruir.

Obedecer y no mandar.

Convencer y no vencer.

Los 12 K'eri son los únicos que forman el gobierno comunal. Juan y Salvador se ponen en cuclillas para explicarme la estructura de su gobierno. Con su dedo trazan en la tierra un círculo grande que representa el Consejo Mayor de los 12 K'eri. A su alrededor dibujan seis círculos, son los consejos: el de Asuntos Civiles, el de Desarrollo Social, el de Administración, el de Bienes Comunales, el de Barrios y el de Procuración y Conciliación de Justicia. Cada uno de ellos tiene cuatro o cinco comisiones. En total son 308 habitantes los que participan en forma directa en el experimento político de Cherán, cien de ellos forman el rondín comunitario. Todos fueron elegidos en las fogatas.

—Cuando hablábamos en las fogatas decíamos que no podíamos tener a un solo individuo al frente de las comisiones. Tenían que ser varios, porque es más fácil corromper a una sola persona que a tres, cuatro o doce —dice Salvador.

—Las comisiones no son un invento, las tomamos de la organización purépecha. En nuestra cultura siempre han existido las comisiones para las fiestas, para los bienes comunales. Es una estructura que responde a las necesidades y las condiciones de la comunidad —dice David, el abogado.

* * *

Escribo esta historia días después de que se cumplió el primer año de que este pueblo se levantó. Camino por sus calles y encuentro grafitis con el rostro de Emiliano Zapata. José, el muchacho de pantalones rotos y ajustados, me cuenta que la comisión de jóvenes los pintó. Ahora, organizan conciertos, jornadas culturales y dan vida a Radio Fogata, estación comunitaria que transmite pirekuas —sones tradicionales purépechas— música latinoamericana de los 70, hip-hop y ska. También se oyen las canciones inspiradas en la lucha de Cherán, escritas por trovadores, músicos de hip-hop y roqueros.

Recorro el edificio que en otros tiempos fue el Palacio Municipal y hoy se llama Casa Comunal Cherán K'eri. En una oficina encuentro a tres maestros del Consejo de Asuntos Civiles. A ellos les toca atender los asuntos relacionados con las escuelas, las festividades y las actividades deportivas.

—Ha sido muy difícil que reconozcan nuestra nueva estructura de gobierno. Al principio, nos decían que para todos los trámites necesitaban a un presidente municipal, a un síndico o a un regidor. Y eso ya no existe en Cherán —explica Salvador.

En la oficina de enfrente encuentro a un comerciante, un estudiante de administración, a un licenciado en comercio exterior y a un profesor. Forman el Consejo de Desarrollo Social. Me cuentan cómo encontraron el Palacio Municipal.

—Los que estaban antes se llevaron todo. No había archivos. Las computadoras las dejaron sin memoria o sin disco duro —dice Francisco. Él explica que de las 308 personas que participan en el nuevo gobierno, sólo unas cuantas —las que se dedican todo el día, tienen más necesidad o no tienen otros ingresos— reciben compensación económica.

—Se decidió que el sueldo que recibía un regidor (alrededor de 20 mil pesos) se dividiría entre diez o más personas, porque no hay dinero —dice Salvador.

Y no hay dinero porque el gobierno anterior les heredó un montón de deudas. Tan sólo la Comisión Nacional del Agua reclama un pago de 8 millones de pesos, por el funcionamiento de la planta tratadora de agua. Por eso, el gobierno comunitario de Cherán solicitó una auditoría a la administración del ex presidente municipal Roberto Bautista. Hasta ahora no tienen respuesta. Y mientras, el ex alcalde y su familia viven en Uruapan.

Un médico, un pasante de derecho, un transportista y un albañil son los hombres que están en la Comisión de Procuración y Conciliación de Justicia. De ella depende el rondín comunitario.

—En las asambleas se dijo que rescatáramos la forma de hacer justicia de antes. Aquí tratamos que no se vaya la gente a la cárcel. Si alguien roba, tiene que pagar al afectado, pedir una disculpa pública y hacer trabajo comunitario con la comisión de limpieza —explica el médico Saúl.

En la oficina que antes era el despacho del presidente municipal están seis de los 12 K'eris. A todos se les mira cansados.

Uno de ellos está sumido en una conversación telefónica con un funcionario del gobierno de Michoacán. Le pide que envíe un helicóptero para vigilar los cerros de la parte norte de Cherán, porque se miraron a varias camionetas subir al bosque.

—Los talamontes siguen llevándose la madera del otro lado del cerro. Y siguen los grupos que controlan el narco, las extorsiones y los secuestros en la región. El Güero sigue en la zona —dice el K'eri José.

* * *

El 18 de abril de 2012, los habitantes de Cherán recibieron un golpe que los sacudió y recordó, una vez más, que los hombres contra los que se levantaron están acechándolos.

Ese día los cohetes y el repiqueteo desesperado de las campanas anunciaron malas noticias. Un grupo de comuneros fue emboscado en el cerro, mientras realizaba trabajos de reforestación, como parte de un programa gubernamental de empleo temporal. Dos hombres murieron y dos más quedaron heridos. Semanas antes, once pobladores fueron secuestrados por talamontes en la carretera, cuando iban a Zamora. Horas después fueron liberados.

Los K'eris exigieron al gobierno federal y estatal que garantizaran la seguridad en los alrededores de Cherán. Como siempre, sólo recibieron promesas. Les dijeron que se realizarían operativos para dismantelar a los grupos de talamontes y de narcotraficantes.

—En Cherán podemos presumir que vivimos en uno de los territorios más seguros del país. El problema es que cuando salimos de nuestro pueblo somos vulnerables —dice Antonia.

—Estamos bien aquí adentro, pero en lo económico estamos batallando, porque muchas personas salían a vender sus cosas a otros pueblos y ahora no lo hacen por miedo. Emocionalmente uno anda bajo de pilas —dice un maestro de la Comisión de Asuntos Civiles.

En la plaza, dos hombres de unos 70 años con camisas planchadas y listos para ir a una fiesta confiesan que ellos quieren que regrese el sistema de partidos a Cherán.

—El gobierno estatal no nos va a apoyar porque no votamos. El gobernador va a decir: “para qué los ayudo, si ellos no quisieron votar”.

El comunero Santiago dice:

—Nos sentimos aislados y con miedo a salir, pero en otras comunidades también viven con miedo, pero no se atreven a decirlo, no se atreven a decir que el crimen organizado está ahí. Nosotros nos atrevimos a denunciar. Hoy quizá tenemos temor, sabemos que se pueden perder vidas, pero vamos a seguir hasta dejarles a nuestros hijos y nietos algo más seguro —dice el K'eri José.

Las chispas de los leños que se prendieron en Cherán la noche del 15 de abril volaron y llegaron a otras tierras. La comunidad indígena de Sevina se atrincheró, desconoció al presidente municipal de Nahuatzen, su cabecera municipal, y formó sus rondines comunitarios. Otras pueblos indígenas de Michoacán, como Turícuaro y Corupo, también se atrincheraron. Y en Zitácuaro, ya organizaron su rondín.

* * *

Los comuneros que participan en el gobierno comunitario no están dispuestos a claudicar. Y como muestra hablan de los proyectos que tienen en marcha. Quieren revivir el aserradero y la resinera comunal, para ello visitaron comunidades de Puebla y Oaxaca para conocer cómo otros pueblos indígenas lograron un aprovechamiento sustentable de sus bosques. Tienen planes de crear escuelas comunitarias en donde los niños aprendan purépecha e inglés. Preparan la rehabilitación y reapertura de un restaurante ecoturístico y comedores comunitarios. Alistan la creación de una planta recicladora de basura. Organizan rifas para comprar una ambulancia y torneos de basquetbol, deporte popular en Cherán.

Quienes tampoco están dispuestas a claudicar son Alma, Zelnaida, Rosa, Angélica y Alicia. Son las esposas de los asesinados y los desaparecidos. Entre ellas también está la esposa de Ernesto, el muchacho que resultó herido el viernes 15 de abril. Es común mirarlas juntas haciendo corundas, asistiendo a las asambleas, exigiendo que no se olviden de los asesinados y desaparecidos.

—A veces sueño que mi esposo regresa. Pienso que está vivo, que si él estuviera aquí, también estaría apoyando al nuevo gobierno —dice Alma. Su hijo mayor participa en la Comisión de Procuración y Conciliación de Justicia.

La que también participa en el gobierno comunitario es Rosario. Ella está en la Comisión de Bienes Comunales.

—Cuando ahora me dicen que si tengo miedo, les digo que no. Si uno tiene miedo nunca va salir de esto. Ahí está Paracho, ahí llegan y matan, secuestran. La gente no puede salir de noche. Si una muchacha les gusta a esos hombres, se la llevan y luego no se sabe nada de ella. Yo siento un orgullo tan grande de que en Cherán ya no nos dejamos. Y no nos vamos a dejar. ¿Usted cómo ve? ¿Está mal lo que estamos haciendo?

* * *

(El 14 de agosto del 2012, días después de haber iniciado un operativo de seguridad en la meseta purépecha, elementos del Ejército mexicano encontraron el cuerpo de Cuitláhuac Hernández, El Güero, y el de un muchacho de 25 años con varios disparos, en el interior de una camioneta lincoln incendiada).

*Los nombres de algunas personas que aparecen en esta historia fueron cambiados a petición de ellas mismas.

VIDA EN LA RUTA
DE LA MUERTE

Alberto Nájar

Alberto Nájjar es productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración internacional y trata de personas. Durante 10 años hizo reportajes de investigación en el suplemento Masiosare de La Jornada. También fue reportero de asuntos especiales en los diarios Milenio y El Centro. Coautor del libro Horas infaustas: la tragedia del News Divine (Ririki), y fue seleccionado en la antología Grandes Crónicas Periodísticas (Comunicarte). Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y diplomado en periodismo económico por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Obtuvo el primer Premio Nacional de Periodismo a la mejor correspondencia extranjera otorgado por el Club de Periodistas de México, así como el primer Premio de Periodismo Parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la categoría de reportaje.

SUR. VERACRUZ. LAS PATRONAS.

Al abrir la puerta de su casa la sorprendió una joven arrodillada. “Por lo que más quiera, madre, ayúdenos”, suplicó.

Era casi medianoche. Las calles de La Patrona, un barrio de la cabecera municipal de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, estaban apenas iluminadas.

La joven hondureña había llegado en un tren de carga junto con cientos de personas indocumentadas, todas de Centroamérica. Su novio fue acuchillado cuando la defendió de un intento de violación.

Una situación muy frecuente en México, donde los trenes de carga se han convertido, desde hace más de una década, en casi el único transporte para cientos de miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos.

El camino siempre fue peligroso, pero desde 2006 cuando el gobierno mexicano emprendió la guerra contra el narcotráfico, se convirtió en una ruta de muerte.

La pareja de hondureños lo supo de forma cruda, y cuando el tren se detuvo en Las Patronas la mujer bajó desesperada en busca de ayuda.

Alguien le dijo que Norma Romero Vázquez podría ayudarla, y sin pensarlo corrió hasta su casa. Allí estaba, la mujer de rodillas mientras su pareja perdía sangre sobre el techo de un vagón.

“Sí te voy a ayudar, pero levántate primero”, le dijo Norma. Diez minutos después las dos mujeres llegaron a las vías donde el tren se había detenido. De las casas cercanas llegaba un poco de luz. En la penumbra, decenas de personas la rodearon. “Ayúdanos, madre”, repetían.

Han pasado más de 15 años pero Norma recuerda claramente el encuentro. Al llegar a las vías, cuenta, “me cubrió un frío intenso desde la cabeza a los pies. Sentí mucho miedo, y pensé: Señor, si tú me pusiste aquí, eres el único que me va a ayudar. Y se me quitó el frío”.

Norma dijo que sólo podría ayudar al herido. “Está bien”, respondieron quienes alcanzaron a escucharla. “Si le ayudas a él nos ayudas a todos”.

Del techo del vagón bajaron al enfermo, un joven inconsciente de piel negra con mueca de dolor. Lo tomaron de las piernas, juntos los talones, mientras otros lo recibían con los brazos abiertos.

Se parecía a Cristo que descendía de cabeza, recuerda aún emocionada Norma.

La escena marcó su vida. Hacía tiempo que su fe católica estaba en crisis, desconcertada por la vida relajada del sacerdote encargado de la parroquia de Amatlán y la doble moral de sus colaboradoras y algunas monjas.

“Por eso cuando vi que bajaban al muchacho como si estuviera crucificado dije: Señor, ahí estás tú”, dice la robusta mujer blanca con pecas y pelo castaño.

Norma y sus hermanas pasaron el resto de la noche al cuidado del herido. Ningún médico quiso atenderlo, temerosos de involucrarse en problemas legales. Las mujeres pusieron sal en las heridas del muchacho y rezaron el resto de la madrugada hasta que reaccionó.

Se quedó con ellas durante varias semanas al lado de su novia, y cuando recuperó fuerzas volvió al tren. A veces la pareja envía cartas desde Estados Unidos.

Esa noche de 1997 Norma reactivó el motor espiritual que había extraviado. Lo encontró justo a unos pasos de ella, en su madre Lucila Vázquez, quien desde hacía varios meses cocinaba unos kilos de arroz y frijol para los migrantes.

A partir de ese momento la robusta mujer se acercó a la cocina de su madre, y luego llegó otra hermana, después una prima...

Las mujeres corrían diariamente a las vías en cuanto escuchaban el silbato del tren, cargadas de cajas con bolsitas de comida y agua.

Los migrantes empezaron a llamarles Las Patronas, no sólo por el nombre del barrio sino como una forma de respeto. En México y Centroamérica se llama patrona a una mujer con autoridad, pero que también cuida y vela por sus hijos. Y es quizá la mejor definición para Norma y sus compañeras.

El grupo ahora está formado por 14 mujeres, familiares y vecinas del barrio que todos los días sin descanso cumplen con su “servicio”, como llaman a la tarea de preparar y entregar comida y agua.

Quince años después aprendieron las costumbres y vericuetos de La Bestia, como muchos llaman al ferrocarril de carga que viaja desde el sureste mexicano. Saben a qué hora pasan los convoyes, cuándo trae migrantes en el lomo y hasta aprendieron las señales de los maquinistas, quienes activan o apagan el silbato o las luces para advertir de algún herido, o de la presencia de delincuentes entre los migrantes.

Como las personas indocumentadas a quienes alimentan, Las Patronas ataron su vida al tren.

Con cada bolsa de comida y las botellas de agua alivian el dolor de un largo viaje donde los migrantes enfrentan, en cada kilómetro el riesgo de secuestros, accidentes, asaltos, extorsiones, golpes, enfermedades, abusos sexuales, calor, frío, soledad.

Informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que anualmente se cometen unos 20 mil secuestros en la ruta migratoria que cruza México. La cantidad podría ser mayor, pues la mayoría de los casos no se denuncian.

Las cifras dan igual a las 400 mil personas que oficialmente ingresan sin documentos migratorios cada año al país. Sólo saben que su camino será peligroso. Que al cruzar la frontera de México emprenden la ruta de la muerte.

LAS RAZONES DEL ÉXODO

La Patrona siempre ha visto pasar el tren.

Los más viejos recuerdan los largos convoyes cargados con azúcar, combustible, granos o cemento, que se alternaban con otros más cortos, de pasajeros.

Era raro ver que alguien viajara de “trampa” o “mosca”, como se dice a quienes se mueven en trenes de carga, y resultaba aún más difícil que esas personas fueran centroamericanas.

El panorama cambió en 1997, cuando el huracán Mitch devastó a Honduras y parte de Guatemala. Para Centroamérica el desastre natural agudizó la profunda crisis económica y social que dejaron dictaduras militares y guerras civiles.

Una herencia de desempleo y violencia, con miles de jóvenes enrolados en pandillas de la Mara Salvatrucha o la Mara 18, enfrentadas a muerte desde su nacimiento en Los Ángeles, California. La respuesta de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala fue una política de mano dura que devino en represión a los jóvenes.

El huracán acabó con las poquitas señales de esperanza en la región. Cercadas por la violencia, deshecha la posibilidad de encontrar empleo, cientos de miles de personas emprendieron camino al norte.

A La Patrona empezaron a llegar trenes con 10, 20 personas en los vagones, luego otros con 50 y un día aparecieron convoyes con cientos. Pronto dejaron de ser la excepción.

Muchos de los pasajeros de La Bestia nunca habían salido de sus comunidades, otros tenían alguna experiencia en países vecinos. Pero todos son parte del mismo entorno. Comparten modismos de lenguaje, comida, costumbres. Salvadoreños, guatemaltecos y hondureños son ciudadanos de la misma región. Pero al pisar territorio mexicano se convierten en extranjeros vulnerables a todos los abusos.

ARROZ Y FRIJOLES

El arroz se cocina en una enorme cacerola de casi un metro de diámetro sobre dos ladrillos que resguardan un fuego encendido con trozos de madera. Los frijoles se cuecen igual, sólo que dentro de una olla de 20 litros sobre otra fogata.

Desde hace más de una década Las Patronas preparan así la comida que ofrecen a los migrantes.

En el solar de la casa familiar, a unos 25 metros de las vías del tren, las mujeres llegan todos los días muy temprano a cocinar, lavar botellas usadas de pet para rellenarlas con agua, cortar trozos de pan que meten en bolsas de plástico.

Algunas buscan en una tienda departamental de Córdoba el pan que no logra venderse, mientras que otras recorren las escuelas de la zona para recoger las botellas usadas que les recolectan maestros y alumnos.

Y así todos los días. El arroz y los frijoles se empiezan a preparar a las 10 de la mañana: mientras una de ellas enciende el fuego, dos más limpian 15 kilos de arroz y 20 de frijol.

Esta vez la encargada de cocinar es Daniela Romero, sobrina de Norma y una de las más jóvenes del grupo. Con paciencia espera a que el fuego sea tan intenso que no se apague al colocar la cacerola. Luego calienta dos litros de aceite y suelta el arroz.

Es la parte fácil, cuenta. Lo más complicado es mover y mover el grano con una pala de madera, y después calcular la cantidad necesaria de agua y sal para que la comida tenga un buen sabor porque, como dice Norma, “los muchachos deben comer como cualquiera de nosotras”.

Preparar arroz y frijoles es sólo la primera parte del servicio. Norma y otras Patronas también lavan los envases en una pileta, los llenan con agua y los amarran en pares con un trozo de hilo.

Cuando llega el pan, y a veces algunos kilos de tortilla que les regalan, las mujeres se reúnen para llenar las bolsas con comida. Y luego aguardan a que pase el primer tren.

En la espera Daniela cuenta que su hijo está a punto de terminar el curso escolar que no fue tan sencillo por la actitud de la maestra. Luego hablan sobre un negocio para arreglar el cabello que se abrió en Córdoba.

Parece una reunión común de mujeres en algún barrio mexicano.

Las Patronas, que han salvado muchas vidas con sus guisos y a quienes muchos en México y en el mundo consideran heroínas, son mujeres sencillas que destinan parte de su tiempo para ayudar a otros.

Sus recursos son tan limitados como los de millones de mexicanos. La diferencia es que ellas los comparten con desconocidos.

Un gesto de solidaridad y fe, dice Norma, pues gracias a Dios cumplen a diario con su servicio.

“Cada vez que entrego comida siento mucha alegría en el corazón”, dice Daniela Romero. “Es una satisfacción grande que alguien podrá comer aunque sea un poquito en ese tren”.

¿Pero es sólo la mano de Dios la que entrega bolsitas de comida y botellas de agua en los trenes? Ciertamente no, porque durante décadas Las Patronas han enfrentado problemas muy terrenales.

En la década de los 90, por ejemplo, la Ley General de Población de México prohibía ayudar a las personas indocumentadas. La legislación, escrita en forma muy general, permitía a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) decidir cuándo un gesto de solidaridad era o no un delito.

Los abusos eran cotidianos. “Los de Migración reclamaban que entregábamos comida”, recuerda Norma. “Otras veces llegaban las patrullas a llevarse a los muchachos de las vías, y nosotras salíamos corriendo para que no los golpearan”.

En 2010 se modificó la ley. Desde entonces, en teoría, entrar a México sin documentos migratorios no es delito. Pero las letras en el papel no cambiaron la persecución a los centroamericanos.

EL HOGAR DE LAS PATRONAS

Guadalupe González Herrera apenas contiene las lágrimas cuando habla de su familia.

Es un tema difícil. Ayudar a los migrantes es una tarea que a Las Patronas les deja reconocimiento internacional, bendiciones de migrantes y halagos de organizaciones civiles.

Pero en el hogar de las 14 mujeres, el servicio también genera problemas. Los maridos de algunas no entienden por qué sus compañeras dedican tanto tiempo a atender a desconocidos, que para colmo, dicen, son extranjeros.

Incomprensión. Es uno de los mayores problemas de las Patronas. Así ha sido siempre. Cuando empezaron a repartir

comida en las vías, los vecinos del barrio les decían “las locas que andan corriendo atrás del tren”.

De la burla pasaron al reclamo. Varias veces los vecinos denunciaron a los migrantes ante la policía, y recientemente exigen que las Patronas coloquen botes de basura en las vías para depositar los desechos que dejan los hambrientos que pasan en los trenes.

Pero los vecinos son el menor de sus problemas. Hasta ahora, las mujeres han escapado del acecho de bandas de tratantes de personas que operan en Veracruz.

Esos “compañeros”, como les llama Norma, no se han aparecido en el barrio. Pero están cerca, y para cuidarse las Patronas aplican una estrategia básica de seguridad: se comunican permanentemente con activistas de derechos humanos, evitan hablar del tema ante los periodistas y sobre todo confían en el instinto.

A lo largo de los años aprendieron a reconocer las señales de peligro. Una vez, por ejemplo, llegó a su casa una hondureña que decía haber sido asaltada en un tren. Pero a diferencia de otras personas indocumentadas, ella vestía ropa limpia, calzaba zapatillas nuevas y traía un bolso de mano. “Y eso no cuadraba con los migrantes”, cuenta Norma. La muchacha sólo pasó una noche con las Patronas.

¿Es suficiente el olfato para escapar del peligro? No, responde Julia Ramírez. La mayor protección es la confianza, dice, “que si haces bien no te puede ir mal”.

Una confianza que parece funcionar en la guerra contra el narcotráfico que vive México desde fines de 2006, donde los migrantes y quienes les ayudan son los más vulnerables.

La confianza en su servicio les ha librado de peligros. Norma recuerda que una vez bajó del tren un joven silencioso, de aspecto duro y hostil que a pesar del calor se abotonaba la camisa hasta el cuello.

Resultó ser un expandillero mara que huía de una sentencia de muerte en Honduras. Con la camisa de manga larga se cubría los tatuajes para evitar que sus compañeros de viaje lo arrojaran a las vías.

Estaba solo. Por completo. Cuando Norma habló con él “se puso a llorar. Decía: madrecita, yo no quería hacer esas cosas, pero no tuve de otra”.

Un involuntario gesto de tristeza aparece en la cara redonda y pecosa de la mujer. “Me di cuenta que una persona que parece tan mala, que a lo mejor hizo algo horrible, es como nosotros”.

NORTE. COAHUILA: ENTRE LA MIGRA Y LOS ZETAS

Se llama La Migra. Es una perra color miel, de raza indefinida que casi todo el día duerme en el patio del albergue Belén Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila.

La perra recibe con indiferencia las caricias de las personas indocumentadas, y sólo parece moverse para buscar agua, comida o escapar del sol.

Su tranquilidad es engañosa, cuenta Juan José, uno de los voluntarios del albergue.

“Cuando alguien llega con malas intenciones o un delincuente quiere entrar al albergue empieza a gruñir y ladrar”, dice. “Los huele antes que nosotros”.

De ahí su nombre. La Migra ha resultado más efectiva que las medidas cautelares que el gobierno de Coahuila se comprometió a brindar después de un robo de computadoras y documentos que sufrió el albergue en 2009.

Por esos días el albergue sufría un intenso hostigamiento de bandas de traficantes de personas, y el robo fue una señal del peligro inminente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió medidas cautelares al gobierno mexicano para proteger el albergue y especialmente al sacerdote jesuita Pedro Pantoja Arellano, cofundador de la posada.

El gobierno de Coahuila envió entonces una unidad policiaca para vigilar el albergue, dentro de una colonia popular al norte de Saltillo. Los primeros días los policías cumplieron con su tarea, pero al paso del tiempo el vehículo empezó a ausentarse y ahora aparece sólo esporádicamente. Por eso La Migra y su desconfianza se volvieron fundamentales para la seguridad de los migrantes.

La historia ilustra la vida cotidiana en Belén Posada del Migrante, uno de los albergues más grandes del país y, para muchos, la última esperanza para sobrevivir a la ruta de la muerte.

La posada forma parte de una red de casas de migrantes apoyadas por la Iglesia Católica. Gracias al trabajo de sacerdotes, religiosas y voluntarios laicos ha sido posible conocer el infierno que padecen las personas indocumentadas, especialmente centroamericanas, que cruzan México.

Los albergues son pedacitos de esperanza en una ruta de miles de kilómetros que inicia en el sureste, y que para los sobrevivientes concluye en alguna ciudad vecina a Estados Unidos.

Es un viaje que inicia en la frontera entre Guatemala y México, especialmente en Tecún Umán, pueblo de unos 35 mil habitantes, donde las personas indocumentadas esperan la oportunidad de cruzar el Río Suchiate, que separa ambos países.

Tecún Umán está lleno de calles terregosas con decenas de prostíbulos, centros de esclavitud sexual, donde muchas víctimas son niñas, adolescentes y mujeres migrantes atrapadas en su viaje al norte.

Aquí nació en 1995 la Casa del Migrante de la orden católica scalabriniana, que dirige el sacerdote Flor María Rigoni, y casi en la misma fecha se creó la Casa de la Mujer, a cargo de las Misioneras Oblatas del Santísimo Redentor, un grupo de religiosas que rescatan víctimas de la esclavitud sexual.

Unos kilómetros al norte, en territorio mexicano, el tren solía detenerse en Tapachula, Chiapas, una calurosa ciudad que durante más de un siglo fue el principal centro de comercio de café en el país.

Fue también la estación de donde partía el ferrocarril, pero desde 2006, tras el huracán Stan que devastó parte de las vías, el servicio está suspendido. Es parte de la ruta migratoria al norte y también la puerta de salida para quienes son deportados o se ven obligados a volver por sufrir un accidente.

Por eso en Tapachula existe el refugio más singular de América Latina: el albergue Jesús el Buen Pastor que fundó Olga Sánchez, la única persona en México dedicada por completo a cuidar los cuerpos mutilados por La Bestia.

En los patios y habitaciones de la casa descansan niños, adolescentes, mujeres y hombres que perdieron algún brazo, pierna o mano en su camino.

Olga sabe del dolor. Cuando era pequeña perdió algunos dedos, y desde la adolescencia una fuerte afectación del estómago hizo del sufrimiento un compañero cotidiano.

A unos 250 kilómetros al norte de Tapachula, en el municipio de Arriaga, Chiapas, empieza el camino de La Bestia. Existen varios retenes militares y del Instituto Nacional de Migración, y para librarlos, las personas indocumentadas suelen caminar por brechas donde frecuentemente son asaltadas.

Cotidianas historias de miedo que se escuchan en el albergue Casa del Migrante Hogar de la Misericordia de Arriaga, dirigido por el sacerdote Heyman Vázquez, quien en 2011 fue detenido durante 12 horas por militares a quienes sorprendió interrogando migrantes, sin tener autoridad para hacerlo.

La siguiente estación del ferrocarril es Ixtepec, Oaxaca, donde existe uno de los refugios más conocidos en el camino de La Bestia, Hermanos en el Camino, fundado en 2007 por el sacerdote Alejandro Solalinde.

El religioso vive amenazado de muerte por su trabajo en defensa de los migrantes, a tal punto que ha tenido que salir del país para salvar su vida.

Hasta ahora las autoridades no han identificado a los autores de las amenazas, aunque el sacerdote acusa al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a traficantes de personas vinculados al cártel de Los Zetas, uno de los más peligrosos de México y Centroamérica.

De Ixtepec el tren sigue su ruta hacia Veracruz, donde los pasajeros de La Bestia están literalmente a la intemperie.

Hace unos años funcionaban albergues en Tierra Blanca y Orizaba, dos poblaciones donde se detiene el ferrocarril, pero protestas de vecinos —incitados por traficantes de personas— obligaron su cierre.

En esa región del sureste mexicano el único refugio es el albergue La 72 de Tenosique, Tabasco. Su director, Fray Tomás González, varias veces ha sido amenazado de muerte.

En su camino al norte el tren se encuentra con Las Patronas y sus bolsitas de comida y agua, y sigue un largo trayecto donde prácticamente nadie protege a su cargamento humano.

En Apizaco, Tlaxcala, el ferrocarril hace una parada que aprovechan bandas de plagiarios y tratantes de personas para cazar a sus presas.

Apenas el convoy se detiene decenas de delincuentes, protegidos por Los Zetas y autoridades locales, atrapan hombres y mujeres y los encierran en casas de seguridad, casi siempre a unos pasos de la vía férrea.

Los hombres son obligados a entregar un número telefónico de sus familiares en Estados Unidos o Centroamérica, al que llaman los secuestradores para exigir rescate.

Con las mujeres es distinto. Los tratantes eligen a quienes nutren sus redes de esclavitud sexual; otras son alquiladas como empleadas domésticas y el resto paga un rescate por su liberación.

Es una industria añeja. Tlaxcala es, según organizaciones mexicanas e internacionales, el mayor centro de acopio de esclavas en América Latina.

Quienes sobreviven a Apizaco llegan a la colonia Lechería, en Tultitlán, Estado de México, un municipio ve-

cino a la capital del país, donde hasta hace poco funcionaba el único albergue para migrantes en el centro de la República.

El sacerdote Hugo Raudel Montoya perdió una batalla de varios años contra vecinos y policías municipales que se oponían a compartir su espacio con indocumentados.

La Diócesis de Cuautitlán prometió reabrir el albergue en el municipio contiguo de Huehuetoca. Pero el proyecto está en el aire porque allí también hay oposición a tener a extranjeros como vecinos.

Desde el Estado de México la siguiente parada del tren es Saltillo, Coahuila, un largo trecho de casi medio país donde los pasajeros de La Bestia suelen encontrar sorpresas: extorsión de policías locales en Querétaro, agresión de vecinos en Guanajuato, ataques de guardias privados del tren en San Luis Potosí, nuevos secuestros.

Cuando llegan a la Posada Belén del sacerdote Pantoja ya llevan semanas y miles de kilómetros de recorrido. Los zapatos rotos, la ropa sucia o los moretones en las piernas son muestras de ese largo viaje.

Pero sobrevivir a medio México no sólo se nota en el cuerpo. El infierno de La Bestia está dentro, en el alma rota de muchos migrantes.

CÉSAR CHÁVEZ

El sacerdote Pedro Pantoja conoció el purgatorio de la migración en 1962, cuando vivió tres meses en un campo agrícola de California.

Miles de campesinos mexicanos trabajaban bajo el sol implacable del llamado Valle de la Muerte, sin apenas beber agua, con comida escasa y presos cotidianos de la insalubridad y enfermedades.

Por esos días el mítico César Chávez, activista social y defensor de derechos de las minorías, iniciaba una revolución en los campos de hortalizas y frutas en el oeste de Estados Unidos.

Pantoja compartió un mes esa batalla que cambió para siempre la vida de los jornaleros y otros trabajadores, la base de la economía estadounidense.

Supo entonces que los migrantes serían fundamentales en su misión sacerdotal, pero hasta 1994 tuvo oportunidad de concretarla. Ese año la empresa Altos Hornos de México, una de las mayores compañías acereras del país, se fue a pique y dejó a miles de trabajadores desempleados. Muchos intentaron viajar a Estados Unidos para escapar de la crisis, pero se encontraron con que el presidente demócrata William Clinton empezaba a cerrar la puerta de su país.

Con la operación Río Grande primero, en Texas, y la Operación Guardián después, en California, el gobierno estadounidense construyó una barrera física y virtual en su frontera sur, que desde entonces ha empujado al río migratorio por caminos cada vez más peligrosos.

Ese 1994 los despedidos de las mineras fueron las primeras víctimas. Miles se quedaron en la frontera sin dinero, comida o refugio. Pantoja estaba en Eagle Pass, Texas, y rápidamente consiguió permiso para instalar en Ciudad Acuña, Coahuila, un albergue para los varados.

La casa fue el cimiento del proyecto Frontera y Dignidad, una iniciativa social que pretendía no sólo auxiliar a

los migrantes sino crear condiciones para que la vida fuera equilibrada y justa.

Ésa fue “la base de todo el trabajo migratorio”, recuerda el sacerdote.

Una semilla de justicia en una zona donde la miseria, abusos laborales y violencia son comunes, pero que se volvió peor a partir de 2000, cuando llegó el éxodo de centroamericanos que huían de la devastación en su tierra.

En el cauce de ese río humano está Coahuila. Su capital, Saltillo, donde el tren suele detenerse, se convirtió en una nueva estación migratoria. “Una ruta maldita, sumamente dolorosa”, lamenta Pantoja, y que al paso de los años se ha vuelto peor.

Al principio los guardias de los trenes, todos miembros de empresas privadas de seguridad, arrojaban a los polizontes desde el techo de los vagones, el convoy aún en movimiento.

Como no lograron detener el flujo decidieron atacar. En 2000 asesinaron a los adolescentes hondureños Delmer Alexander Pacheco y David, de apellido desconocido. Un año después mataron a pedradas al hondureño Ismael de la Cruz.

Para el jesuita ése fue el parteaguas en su misión. Supo entonces que el camino para los migrantes sería aún más difícil.

GUERRA ABIERTA

Migración sin papeles y violencia son una vieja mezcla, pero en el caso de México ha llegado a niveles extremos. El país, asegura Jorge Bustamante, exrelator especial sobre los dere-

chos de las personas migrantes de la ONU, es “el campeón mundial” en abusos.

Ya lo presentían en la Diócesis de Saltillo, que concentró su trabajo con migrantes no en la frontera, sino en la capital de Coahuila.

En su oficina, frente a una serie de pantallas de televisión con los que monitorean la actividad de la posada, Pedro Pantoja recuerda los primeros días. “Vimos que era urgente establecer un albergue, ya no tanto para que los migrantes coman, duerman, descansen, sino para que no los mataran”, recuerda.

No fue un proceso fácil. La diócesis prestó una casa que funcionaba como bodega, mientras él y varios sacerdotes conseguían comida. “Tuvimos que comenzar con una pobreza extrema, sin ayuda, sin comida porque la urgencia era, sobre todo, la vida de los migrantes”.

El dinero era sólo parte del problema. En Saltillo los migrantes tampoco son bien vistos por la comunidad. Los policías locales suelen detenerlos sin motivo. Después unos vecinos realizaron protestas para exigir el cierre del albergue.

Pantoja dice que fueron ataques “intencionales” organizados por personas ajenas a la comunidad, pues la diócesis había hecho una labor intensa entre los fieles para que aceptaran el refugio.

El trabajo rindió frutos, presume el sacerdote, pues se formó una red de solidaridad que ha sido fundamental para mantener con vida a la posada.

Pero quizá la clave de su sobrevivencia es que Pantoja y su equipo supieron que ayudar a los indocumentados significa más que ofrecer comida, agua y una cama para dormir.

“Sabíamos que para interpretar, comprender el camino de la migración, no bastaba una casa. Teníamos una visión muy amplia de que la migración tiene muchas vertientes”, cuenta mientras observa de reojo las pantallas de televisión.

El tiempo, y la guerra contra el narcotráfico, le dieron la razón.

LA PUERTA DEL INFIERNO

Años después del nacimiento del albergue Belén, el papel de los migrantes ha cambiado. Antes eran personas en tránsito a Estados Unidos que pasaban desapercibidas para la mayoría de los mexicanos. Ahora se han convertido en mercancía para los cárteles de narcotráfico, especialmente Los Zetas.

El grupo criminal, creado por exsoldados de élite, vivía fundamentalmente del tráfico de droga pero al romper su alianza con el Cártel del Golfo se vio obligado a buscar nuevas fuentes de ingreso. Y los migrantes fueron la presa fácil.

En poco tiempo controlaron a todas las bandas de traficantes de personas en Tamaulipas, su principal centro de operación, y se trasladaron después a todo el noreste y sureste mexicano.

La delincuencia organizada encontró dinero en el secuestro y en la venta de mujeres como esclavas sexuales, pero también carne de cañón para sus trincheras en la guerra contra otros cárteles.

“Buscan víctimas más vulnerables, y entonces se avientan sobre la migración. No les cuesta nada. No tienen que

enfrentarse con el ejército, la policía federal, vienen racimos de gente humana, es una ganancia a la mano”, dice Pantoja.

Los Zetas no sólo controlaron el tráfico humano, también aplicaron su estrategia de terror y crueldad que aprendieron con grupos paramilitares y excombatientes de las guerras civiles en Centroamérica.

En el albergue esperaban un crecimiento de la violencia, pero no a los niveles que pronto aparecieron. A las puertas de la posada empezaron a llegar migrantes sin heridas aparentes en el cuerpo, pero con el alma desgarrada por las experiencias del camino.

Muchos han sido encerrados en casas de seguridad, a veces con otros secuestrados. A quienes se rehúsan a entregar el número telefónico de familiares que podrían pagar su liberación, los plagiarios los asesinan a golpes frente a los demás.

A otros los mutilan, o los cuelgan desnudos de los pies para golpearlos con tablas. Muchas mujeres son violadas, y algunas se convierten en esclavas sexuales del jefe de la banda.

Cuando escapan los migrantes se llevan el infierno con ellos. En la posada Belén se creó un área de atención psicológica para ayudarlos a reconstruir, en lo posible, su alma.

Hacen lo que pueden. Ramón, un espigado adolescente de 14 años con ojos almendrados que lleva tres meses en el albergue es un ejemplo. Cuando llegó permanecía en silencio, algunos pensaban que era mudo. Tras varias semanas de terapia empezó a hablar, y a contar su historia.

Huye de Honduras porque su familia está amenazada de muerte. Su hermano mayor es miembro de la Mara y a finales de 2011 su mamá recibió un mensaje: o se largaban del pueblo o todos serían asesinados.

El muchacho decidió esconderse con un primo en Los Ángeles.

“Me agarré el tren pero en Veracruz se cayó un compa que venía con nosotros. Le cortó las piernas y gritaba, gritaba. Luego en Apizaco mataron con un palo a otro que no se dejó subir a una pick up. Mi primo se asustó mucho y en el DF se siguió en bus. Yo no tengo lempiras ni dólar y por eso subí al tren hasta aquí”.

Es un diálogo lento. Las frases aparecen despacito, como si el adolescente las pensara demasiado. No es eso. A Ramón todavía le cuesta entender lo que vivió y, peor aún, aceptar lo que sigue.

Tiene miedo de seguir adelante porque sabe que fuera del albergue, las calles de Saltillo, las vías del tren y los kilómetros que siguen hasta la frontera, son territorio de cacería para Los Zetas.

No puede regresar porque su madre sería asesinada por los pandilleros. Para Ramón los próximos días son lo mismo. A donde se mueva será una presa.

MANOS DE ESPERANZA

Hacia el norte de Saltillo, en lo alto de un cerro seco y gris, se ve una enorme estatua de Jesús de Nazareth con los brazos abiertos.

Un gesto que parecería contradictorio con la realidad. Apenas al salir de Saltillo los migrantes se encuentran en el territorio más controlado por las bandas de traficantes de personas, que trabajan para Los Zetas.

Fue en un sitio de esta zona, al este de la estatua, donde 72 personas indocumentadas fueron asesinadas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.

Pedro Pantoja suele decir que México es un cementerio de migrantes. Y tal vez tenga razón, porque los secuestros y asesinatos de personas indocumentadas no cesan.

Pero tampoco se apaga la luz de esperanza que representa el sacerdote jesuita y otros que, como él, diariamente se meten al infierno para arrancar de los criminales a sus víctimas.

En la frontera norte el gobierno de Estados Unidos levanta muros para tratar de impedir el flujo de personas. Del otro lado, en México, las puertas de los albergues siempre están abiertas para recibirlos.

A pesar de todo, dice Pantoja. “Si alguien pensó que la violencia, asesinatos y amenazas serían como un ejemplo de lo que nos podría pasar, se equivocó”, asegura. “Fue al revés. Ni a mí ni a nadie del equipo nos creó una barrera, un obstáculo que nos amedrente”.

LAS VOCES DE LA GUERRA

Daniela Pastrana

Daniela Pastrana es periodista independiente, especializada en derechos humanos, movimientos sociales y política social. Trabajó en los diarios Reforma, La Jornada y El Centro. Actualmente colabora en periódicos y revistas de España, Brasil y El Salvador, y es corresponsal para la agencia Inter Press Service (IPS), con sede regional en Uruguay.

Es coautora de los libros Vamos a portarnos mal. La protesta social en América Latina (Fundación Friedrich Ebert, 2011), Horas Infaustas. La tragedia del News Divine (Ririki, 2009) y del manual de periodismo Escrito sin d. Sugerencias para un periodismo sin etiquetas (Conapred, 2010).

Ha sido becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la Fundación Prensa y Democracia. Es profesora de crónica y reportaje en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha sido jurado de la beca para periodistas que otorga el Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana. Desde 2006 participa, junto con otras colegas, en el sueño colectivo de la Red de Periodistas de a Pie, del que es secretaria ejecutiva.

Nepomuceno Moreno Núñez llevaba 310 días buscando a su hijo Jorge Mario cuando supo que en el estado de Morelos, a unos mil 900 kilómetros al sur de su casa, había un poeta que pedía justicia para su hijo asesinado.

Era el 5 de mayo de 2011. El sonorenses de 56 años, vendedor de camarones, vio en la televisión a un hombre de sombrero, lentes y chamarra de borrego, llamado Javier Sicilia, que caminaba hacia la ciudad de México acompañado de unas doscientas personas lastimadas por la violencia.

En un ciber consiguió ayuda para escribir a la Red por la Paz y la Justicia, organización ciudadana que se gestaba en Morelos, y pedir informes de la ruta que seguirían los caminantes. Pidió prestado para comprar un boleto a la capital del país. No consiguió para el pasaje de regreso. Se sumó a la caminata al día siguiente, en Topilejo, ya en el perímetro de la capital. Para entonces, la marcha sumaba a unas mil

personas. A la cabeza iban el poeta Sicilia y Julián Le Barón, líder de la comunidad mormona que lleva el nombre de su familia, en Chihuahua, y que perdió a cinco de sus miembros por enfrentarse a los grupos criminales de la región.

En la mañana del 7 de mayo, Nepomuceno deambulaba solo en medio del descampado que alojó a los caminantes. Cargaba como estandarte una cartulina con las fotografías de cuatro jóvenes. Bajo su chamarra guardaba un sobre amarillo con más imágenes y el expediente de su hijo, Jorge Mario Moreno León, de 18 años, desaparecido desde el 1 de julio de 2010, junto con dos de sus amigos: José Francisco Mercado Ortega y Giovanni Otero. Mario Enrique Díaz, el cuarto joven del cartel, fue asesinado.

Ésta fue la historia que contó: el 30 de junio de 2010, Jorge Mario salió con sus amigos a divertirse a Ciudad Obregón, a unos 250 kilómetros de su casa en Hermosillo, Sonora. Fue la última vez que lo vio vivo. Después de eso, sólo escuchó su voz: “Apá, nos correteó la policía, no sé dónde están los demás muchachos, aquí estoy en un oxo”, le dijo la madrugada del 1 de julio, cuando le llamó y le explicó que un automóvil los interceptó al salir de un antro. Los jóvenes corrieron al monte. En su huida, Jorge Mario encontró una tienda y una muchacha le regaló saldo para hablar a su casa.

“No te muevas de ahí, voy a mandar a un amigo de Guaymas a que te recoja”, le dijo el padre. Pero no hubo tiempo. Mientras hablaba con su hermana, Jorge Mario advirtió: “¡ya vienen por mí!” y cortó la llamada. Nepomuceno volvió a marcar, desesperado. Después de varios intentos le contestó un hombre. “Aquí las preguntas las hacemos nosotros, somos

policías municipales. Estos muchachos andan muy mal, son de los Beltrán Leyva. Y a uno que andamos buscando es hijo del Dosmil, un mafioso que andaba con los Zetas”, le dijo. El comerciante trató de explicar que era un error, que uno de los jóvenes era hijo del doctor Díaz, director de salud municipal de Hermosillo, que otro era hijo de Don Goyo, taquero en la universidad. “Hagamos una cosa —interrumpió el hombre—. Denos 30 mil pesos y los soltamos”.

“Conseguí el dinero y les hablé”, cuenta Nepomuceno. “Me dijeron que esperaban a un comandante y me pasaron a mi hijo. Me dijo: ‘Estoy bien acá, no te mortifiques, dile a mi amá que estoy bien, que ahí le caigo a Hermosillo más tarde’. Me quedé tranquilo y le hablé a mi esposa. Pero nunca me volvieron a contestar”.

El vendedor de camarones se convirtió en detective. Se manifestó frente al Palacio de Gobierno, denunció ante la prensa. Consiguió el registro del teléfono de su hijo y así supo que la última llamada recibida en su celular, a las 10:18 horas del 1 de julio, fue desde la procuraduría del estado. Pero nadie le hizo caso.

Esa mañana fría en Topilejo, Nepo, me contó que todavía, después de 9 meses de silencio, marcaba al celular de su hijo, con la esperanza de que le contestara.

LA PRIMERA CAMINATA

El 28 de marzo de 2011 fue localizado en Temixco, Morelos, el cuerpo de Juan Francisco Sicilia, de 24 años, y otras seis personas. Según la policía, los mataron por reclamar una cámara perdida

en un bar protegido por el cártel del Pacífico Sur, una de las ocho organizaciones criminales más poderosas de México. Javier Sicilia —colaborador del semanario Proceso— estaba en Filipinas, a donde fue a leer poesía. Ahí se enteró de la muerte de su hijo Juanelo.

Su asesinato se sumó a otros 40 mil que, para el quinto año de gobierno de Felipe Calderón, eran el saldo más visible de la “guerra frontal contra el crimen organizado” declarada por el presidente en diciembre de 2006.

Sicilia, un hombre profundamente católico y muy identificado ideológicamente con los movimientos sociales y el zapatismo, cambió la poesía por el activismo y con el grito de “¡estamos hasta la madre!” convocó a la sociedad a una movilización nacional para exigir a las autoridades cambiar la política de seguridad y frenar la violencia. “En cada plaza del país debe haber una memoria de nuestros muertos en esta guerra imbécil, una memoria de nuestro holocausto”, dijo, antes de emprender una caminata de 80 kilómetros a la Ciudad de México.

Inspirada en la Marcha de la Sal, que en 1930 lideró en la India Mahatma Gandhi, la “Caminata del silencio” como le llamó el poeta, salió de Cuernavaca el 5 de mayo. Al frente iban Sicilia y Le Barón, cargando una bandera de México. En la marcha se fueron sumando padres y madres que llegaron desde Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco o Cancún, con el mismo objetivo: pedir justicia para sus hijos. Caminaron el primer día 21 kilómetros de subida, sobre el asfalto ardiente. Más que protesta, parecía una procesión. “El silencio es un arma muy poderosa, que permite decir lo indecible”, me explicó en una parada el historiador y activista por la paz, Pietro Ameglio Patella, amigo personal del poeta.

En Coajomulco, la primera pernocta, los pobladores entregaron a Sicilia un cuilote, el tronco de la flor del maguey, símbolo de la resistencia de ese pueblo indígena. Al día siguiente, en la plaza de Topilejo, el poeta escuchó por primera vez el testimonio de Nepomuceno Moreno, el sonoreense de grueso mostacho y cabello cano, que levantaba lo más alto que podía su estandarte para que todos lo vieran. Cuando acabó de hablar, el poeta lo abrazó. Lloraron.

“NO ESTÁN SOLOS”

Instantánea del domingo 8 de mayo de 2011: después de andar cuatro días, llegamos al Zócalo con tres horas de retraso. La marcha se alarga aún más en la última parte, cuando Sicilia y los miles de seguidores intentan entrar por una estrecha calle a la plaza, que se convierte en cuello de botella con empujones, jaloneos, arañazos y patadas entre periodistas y activistas.

“Son unos irresponsables, debieron hacer una valla antes de llegar aquí”, reclama un camarógrafo a un sudoroso hombre que forma parte del cordón de seguridad.

“Sí, pero nosotros no somos políticos, mano, somos sociedad civil. Ustedes mejor ayuden y ¡háganse a un lado!”, responde con enfado el aludido, justo cuando la burbuja de protección se rompe y caemos aplastados sobre Sicilia, Le Barón y el sacerdote Alejandro Solalinde, reconocido defensor de migrantes que se sumó a la marcha hacía unas horas. Sobre mi cabeza veo al dominico Miguel Concha, septuagenario defensor de derechos humanos, como si estuviera en un *slam*. Algunos desfallecen y son rescatados. Por fin, despeinado y

casi sin lentes, Javier Sicilia sube al estrado y comienza a repartir gritos, furioso por el caos.

“Nos rebasó la cantidad de gente. Nunca esperamos lo que pasó”, me dice, meses después, Gerardo Gómez, el hombre del cordón de seguridad, profesor de medicina naturista.

El llamado del poeta despierta el ímpetu de una sociedad civil agotada. Había dado fuertes batallas en 2006, el último año del gobierno de ocurrencias de la pareja presidencial de Vicente Fox y Martha Sahagún que llevó al país al filo de la gobernabilidad. Pero la falta de respuestas institucionales a las demandas consumió las reservas de la resistencia organizada.

¿Cuántos son ahora? Imposible saberlo. El Zócalo se llena varias veces, ante el retraso de la caravana, el calor y el mal sonido, muchos se van, dejando paso a otros que van y vienen mientras decenas de víctimas suben al templete a contar su dolor por primera vez.

Una mujer denuncia que por exigir justicia por la violación de su hija con discapacidad, el procurador de Jalisco la amenazó. Un padre cuenta que su hijo fue secuestrado en Monterrey, a donde fue a estudiar. Una abuela pide ayuda para encontrar a su nieto desaparecido en Reynosa. Otra joven afirma que su esposo y 11 compañeros de trabajo —todos vendedores de pintura— desaparecieron en Piedras Negras, después de ser detenidos por policías judiciales. Silvia Escalera, esposa del empresario Nelson Vargas, clama a los secuestradores y asesinos de su hija: “gánense un poco de perdón y devuelvan los cuerpos, regresen a los vivos”.

Durante varias horas se hilan más de 70 testimonios de dolor y de rabia, interrumpidos cuando llegan los caminantes de Cuernavaca.

No es poco lo que se mueve este 8 de mayo. Desde una pequeña montaña de asfalto, mucho antes de llegar al Zócalo, se ven en la Ciudad de México dos marchas multitudinarias, ambas extendidas hasta el horizonte: la que va detrás de Sicilia y la que va al frente, los que se adelantaron. En distintos puntos del camino la gente espera para aplaudir, llorar, solidarizarse con el padre que sufre, para mostrar su propio coraje.

Pie con pie avanzan los familiares de personas asesinadas o desaparecidas en la guerra calderonista, los activistas orgánicos, los sacerdotes progresistas, las madres de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, los campesinos de Atenco que sufrieron una represión policial que dejó dos muertos y 27 mujeres violadas, la Policía Comunitaria de Guerrero, los indígenas purépechas de Cherán que se atrinchero para defenderse, los huicholes que se oponen a una minera en su tierra sagrada, las reservas del otrora poderoso Sindicato Mexicano de Electricistas, los migrantes, los padres de los 49 niños calcinados en la guardería ABC, los activistas tuiteros, los estudiantes y los sobrevivientes de la masacre de 45 indígenas de Acteal.

La protesta se replica en 17 países y en 31 ciudades del país. La más numerosa es en San Cristóbal de las Casas donde se movilizaron 5 mil zapatistas, su primera reaparición pública desde 2006. “Estamos aquí para decirles a esas buenas personas que en silencio caminan que no están solos. Que escuchamos el dolor de su silencio como antes la digna rabia de sus palabras”, dice el comandante David, quien lee el comunicado del grupo rebelde.

En el Zócalo, la activista juarense, Olga Reyes, quien carga a cuestas el asesinato de seis familiares, y Patricia Duarte,

madre de Andrés Alonso, víctima de la negligencia en la Guardería ABC, leen un documento político redactado por académicos y dirigentes de organizaciones cercanos a Sicilia, como el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza.

El Pacto Nacional propone: 1) rescatar la memoria de las víctimas de la violencia; 2) cambiar la estrategia militar por una de seguridad ciudadana; 3) combatir la impunidad, corrupción y eliminar el fuero de los funcionarios; 4) combatir las finanzas del crimen; 5) recuperar el tejido social; 6) fortalecer la democracia participativa con plebiscito, candidaturas ciudadanas y revocación de mandato.

El poeta anuncia una caravana a Ciudad Juárez, “el epicentro del dolor”, para firmar el pacto y recoger testimonios de víctimas en ciudades azoladas por la violencia. En un impulso, sorprende a todos con la exigencia de la renuncia del secretario de Seguridad Pública Federal. La plaza responde con un grito inesperado: “Fuera Calderón”.

Al final del día me encuentro con Nepomuceno Moreno. Camina solo, con su inseparable cartel. Tiene el rostro colorado por el sol y anda apurado, debe conseguir dinero para regresar a Sonora. “Sí, valió la pena el viaje”, me alcanza a decir.

* * *

A pesar de la demanda de miles, Sicilia no encenderá las antorchas que anunció antes de salir de Cuernavaca. La gente se quedará esperando la desobediencia civil y refundación del país que anuncia en cada entrevista. En cambio, acepta los guiños del ejecutivo federal para dialogar.

“Javier no quiso romper con su vida pasada. Nadie lo puede criticar por eso, pero desde una óptica política fue un momento en el que no quiso asumir la dirección de algo mayor”, me dice, mucho tiempo después, Magdiel Sánchez, un joven filósofo de 27 años, y uno de los pilares del grupo durante el 2011.

La convivencia entre luchadores sociales, activistas y víctimas, no es sencilla. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad —como finalmente se autonombra el colectivo— se construye sobre un entramado de intereses diversos, que no logran coincidir en agenda común.

Los primeros problemas surgen días después de la marcha al Zócalo. El académico John Ackerman y el grupo de caricaturistas que desde enero de 2011 impulsa la campaña “No más sangre” para frenar la violencia, rechazan cualquier diálogo con las autoridades y se bajan del barco caravanero. Eduardo Gallo, empresario convertido en activista desde el asesinato de su hija, en julio de 2000, y que acompañó a Sicilia en la caminata al DF, decide no seguirlo a Juárez porque no aprueba su estrategia. Otras organizaciones civiles de derechos humanos, se distanciarán progresivamente, tras cuestionar la verticalidad en la toma de decisiones, que se concentran en el equipo más cercano del poeta.

Hay otros, en cambio, que llegan para quedarse. Ciudadanos comunes, como Gerardo Gómez, quien fue maestro de Juanelo. Cuando supo del asesinato, se sumó a la caminata con su familia y a partir de entonces, toda ella es parte de la logística del movimiento.

“Muchos de los que nos integramos éramos ciudadanos que estábamos en nuestras casas y no teníamos ninguna ex-

perencia en esto —rememora. El día del Zócalo, la guardia de seguridad la formábamos mi esposa, mis hijas, mi hijo, amigos y unos estudiantes de la UNAM, con un listón”.

Otros son los padres y madres huérfanos de sus hijos que encuentran en sus pares una segunda familia. Eso une a personas tan distintas como el recio y malhablado camaronero de Sonora, y Teresa Carmona, una mujer menudita, que se distingue entre los otros porque siempre lleva una flor y una pancarta con la foto de su hijo Joaquín, asesinado en la Ciudad de México. Ella —como Nepo— se unió a la caravana del poeta desde lejos, Cancún, donde dejó atrás su vida.

LAS ALAS DE LA CARAVANA

Monterrey se vuelve un lugar de paradojas. Aquí no hay buenos ni malos. Todos se matan. Y todos lloran. Escuchamos a padres que denuncian a policías por desaparecer, torturar y matar a sus hijos. Entrevistamos a esposas o madres de policías desaparecidos.

La Caravana del Consuelo, así llamado el periplo de víctimas hacia el norte, pasa por aquí el 7 de junio de 2011, tres días después de arrancar del centro del país.

La parada previa, en Durango, fue catártica. Decenas de personas salieron a las calles a gritar de angustia ante la llegada de los 13 autobuses y 25 vehículos que forman la caravana. Muchos esperaron en la carretera. No alcanzaban las manos de los activistas para registrar las denuncias y las libretas de los periodistas se convirtieron en hojas de registro. Era la primera vez que hablaban en público; antes tuvieron que tragar-

se los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, por el miedo a los delincuentes y a las autoridades. Todos lloramos esa noche. Hasta los conductores de los autobuses contaron las historias de terror vividas en las carreteras tomadas por criminales. Los decapitados en la Autopista del Sol, los retenes clandestinos, las extorsiones a transportistas, los “halcones” en las carreteras, el asesinato de un colega.

Desde la primera marcha convocada por el poeta, el 6 de abril, Sicilia ha sumado a su causa a cientos de víctimas que rompieron el silencio y han puesto al país frente a un espejo de horror. Ya no se le separa María Herrera, la mujer desgarrada por la pérdida de cuatro hijos que enmudeció la plaza de Morelia. No es la única. Cada testimonio tira por la borda la afirmación del presidente de que las muertes de civiles inocentes son el 5 por ciento.

“El 18 de abril no sólo asesinaron a un joven inocente, destruyeron a una familia”, responde en Monterrey el empresario lagunero Otilio Cantú, cuyo hijo fue asesinado por militares que luego pretendieron incriminarlo.

El mitin en la capital regia termina a la medianoche y el poeta anuncia una marcha a la Procuraduría de Justicia Estatal. El grupo camina por calles oscuras, seguido por nerviosos policías. Con los familiares entran a la reunión Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, gestor del encuentro. Los caravaneros se instalan en las escaleras. El encuentro se prolonga más de dos horas.

Afuera, el silbido de una flauta se mezcla con los tambores. Nicole y Meraly Gómez, dos niñas que viajan con sus padres, cantan su himno: “los caravanas llegaron ya/ y llegaron diciendo: basta ya/ basta ya, basta ya, basta ya/ no quere-

mos la guerra, sí la paz”. El Mimo Yayo, un payaso flacucho de pelo esponjado, anima un baile que terminará en pachanga. Veo al chihuahuense Julián Le Barón moviéndose al ritmo de “Guantanamera” y pienso que ya no importa lo ocurrido adentro. La historia está en esta rebelión al dolor y al miedo.

Porque después de llorar tanto, en esta madrugada regia sólo cabe la risa y esta imprudente irreverencia que nos llevó a caminar a medianoche por una de las ciudades más peligrosas del país. “Nosotros vamos a ganar porque a nuestro dolor ya le podemos agregar alegría. Y esas dos cosas juntas se llaman vida”, dice Le Barón al día siguiente, en un mitin en Torreón, ciudad con cientos de personas desaparecidas.

“¿Saben por qué estoy más seguro que nunca de que la vida le va a ganar a la muerte? Porque ayer en la noche, después de 2 mil kilómetros de camino, a esta caravana le salieron alas... ¿Dónde estaba el miedo anoche? La guerra se fue a dormir durante algunas horas. Que levante la mano el sicario que está entre nosotros ¿Nadie? ¿Algún secuestrador? Aunque lo hubiera no se atrevería a levantar la mano”, insiste.

Nepomuceno Moreno lo escucha atento, sentado en las gradas del teatro al aire libre donde se realiza el mitin. “Ese Le Barón es bueno, yo quisiera hablar así como él”, dice, en tono reflexivo.

LOS PIES DEL MOVIMIENTO

Siete días y 3 mil 400 kilómetros después de salir de la Ciudad de México, la caravana llega a Ciudad Juárez, donde cientos de personas salen a las calles para atestiguar el momento en el que Luz María Dávila le coloca un rosario al

poeta. La mujer es conocida porque después de que sus dos hijos fueron asesinados en una fiesta en Villas de Salvárcar, al poniente de la ciudad, encaró al presidente Calderón y le reclamó que los culpara de pandilleros. No fue la primera, ni la única vez que el mandatario culpa a las víctimas de su propia muerte.

Pero algo falla en Juárez. Las mesas de discusión, ideadas para definir la ruta estratégica de cada uno de los puntos del Pacto Nacional propuesto en el Zócalo el 8 de mayo, cuestionan la relación del movimiento con el presidente Calderón. La oportunidad que Sicilia da al diálogo con autoridades amenaza la ruptura.

En el larguísimo documento de trabajo de 70 puntos que se lee como relatoría este 10 de junio, pasa casi desapercibida la Ley de Víctimas, prioridad del movimiento, y se omite la tragedia de los desaparecidos. En cambio, los medios destacan la desmilitarización inmediata y el juicio político a Felipe Calderón, que luego Sicilia desmentirá.

Para atemperar los ánimos, Sicilia elige el poema “Ítaca” del griego Kavafis: “Ten siempre en tu mente a Ítaca/ La llegada allí es tu destino/ Pero no apresures tu viaje en absoluto”.

A partir de ahora, el movimiento de víctimas malabarea entre la movilización social que impulsan activistas como Pietro Ameglio o Miguel Álvarez Gándara, director de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), y el diálogo con el gobierno, que promueven académicos como Alvarez Icaza y Clara Jusidman, destacada investigadora de política social.

Sicilia explicará varias veces que ambas estrategias son los dos pies del Movimiento por la Paz y que éste avanza cuando

andan al mismo ritmo. Si uno va más de prisa, el esfuerzo “valdrá madre”.

Para bien y para mal, el poeta tiene siempre la última palabra. Y para muchos, el movimiento se convierte en el estado de ánimo de Javier Sicilia.

“No hay tiempo para construir un liderazgo colectivo. Y menos un relevo”, explica Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano, una de las organizaciones laicas más activas.

* * *

Después de Juárez, el grupo se concentra en preparar el diálogo propuesto por el presidente Calderón, que se programa para el 23 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Es un encuentro insólito. De un lado, el poeta, el ranchero norteño que perdió a un hermano, la mujer que busca a cuatro hijos, la madre de un policía desaparecido, el representante del pueblo indígena acuartelado para defenderse y la madre de una joven asesinada en Juárez. Del otro, el presidente con su esposa y varios secretarios de Estado. No está el jefe del Ejército.

Nadie le ha dicho a un presidente de México lo que le dicen en cadena nacional quienes han enterrado a sus hijos, quienes no tienen una tumba donde llorar sus muertos, quienes no duermen por el miedo a ser asesinados. Aquellos a quienes llamó “bajas colaterales”.

Frente a la defensa apasionada de Calderón de la seguridad militar, Le Barón le recuerda que “la violencia no termina nunca con violencia” y le pide rectificar, para no ser “recordado como el presidente de los 40 mil muertos”. De paso, lo invita a unirse “sin máscaras y sin armas” a la Caravana por la Paz, que ahora —anuncia— irá al sur.

Los reclamos de los deudos pasan a segundo término cuando el poeta, en un gesto espontáneo, besa al presidente. Los reflectores cambian de objetivo, y la discusión pública de las próximas semanas estará en el beso, que para muchos es como el “beso de Judas”. Sicilia, hombre de profundas convicciones católicas, lo defenderá a partir del conspiratio, ese intercambio de alientos de la primera liturgia cristiana.

LOS PADRES TAMBIÉN BUSCAN

Nepomuceno Moreno llega apresurado al restaurante y se sienta en la mesa. Se ve animado. Lo acaban de entrevistar los de EmergenciaMX, un colectivo de jóvenes unido espontáneamente al movimiento para documentar las caravanas.

“Sí, estoy contento”, dice, mientras almuerza unos chilaquiles con bistec.

El local, en la carretera que cruza el pueblo de El Camarón, en Oaxaca, está casi vacío. Es el 13 de septiembre, cuarto día de la segunda caravana de víctimas, ahora rumbo al sur.

Mientras esperamos la cuenta, Nepo me muestra de nuevo las fotografías de su hijo. Es una manía. Como si al enseñarlas pudiera exorcizar su dolor.

Cuando las guarda le pregunto algo que hace días me da vueltas:

—¿Y su esposa, don Nepo?

—Ella no viene, esto le ha pegado mucho, a veces ni siquiera quiere salir de la cama.

Después de cinco meses de caminar junto a los deudos, el activismo de los padres es algo que llama la atención. Las

madres están y participan. Pero los padres son protagonistas. Es como si Sicilia, al mostrar su dolor, les hubiera dado permiso de llorar a otros padres.

Son varios los que buscan. El veracruzano Carlos Castro camina en las marchas con una enorme manta que muestra las fotografías de cuatro mujeres: su esposa, Josefina Campillo, sus dos hijas, Joana y Carla, y Araceli Utrera, trabajadora doméstica. “¡Regrésenme a mi familia!”, se lee. Un día volvió a casa y ellas habían desaparecido.

El neoleonés Roberto Galván busca a su hijo, Roberto Galván Llop, un ajedrecista de 33 años desaparecido en enero de 2011, tras ser detenido por policías. Identificado por su gran altura y trato amable, Galván no falla a una cita del movimiento y es, quizá, quien define con más claridad la importancia del movimiento de víctimas. “Antes de estar aquí, el expediente de mi hijo era una cuartilla. Ahora tiene más de 80. Todavía no encuentro a mi hijo, pero al menos, ya los puse a trabajar”, dice en Iguala.

Tampoco falla el mexiquense Melchor Flores, padre del artista ambulante Melchor Flores Hernández, El Vaquero Galáctico, detenido y desaparecido por policías municipales en Monterrey. Duerme en el suelo, come tortas de jamón y se baña con manguera en los espacios habilitados como dormitorios.

En los trayectos, Roberto Galván, Melchor Flores y Nepomuceno Moreno se han hecho amigos. El carácter franco del sonorense, aficionado a los chistes “pelaos”, los hace reír en medio del dolor.

“El movimiento nos ha hecho fuertes”, me dice Nepo, en la parada de El Camarón.

“TAMBIÉN SOY VÍCTIMA”

Chiapas es clave para la organización de víctimas. Desde el alzamiento zapatista de 1994, no se había visto una actividad tan fuerte como ahora. En Ocosingo, el 16 de septiembre, fray Gonzalo Ituarte, heredero de la lucha de Samuel Ruiz, ofrece una ceremonia en tzotzil. En la víspera, en el Teatro de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas se encontraron el dolor del norte, por la fiesta de sangre del sexenio, con el dolor del sur, por la violencia que provoca el abandono institucional.

Una comitiva de víctimas encabezada por Le Barón va a Acteal, la comunidad donde fueron masacrados 45 indígenas en diciembre de 1997. Otro grupo se quedó con Sicilia para encontrarse con la Junta de Buen Gobierno de Oventic. Nepomuceno Moreno está en este grupo y antes de entrar, cuenta la historia de su hijo desaparecido a los zapatistas que resguardan el acceso del caracol.

El sonorense nunca imaginó conocer este otro México. Antes, los zapatistas eran unos encapuchados que veía en las noticias. Ahora, Nepo sale del encuentro impresionado por su dignidad y presume unas fotos: ellos con pasamontañas, él con su cartel.

Pero hay un ambiente extraño en esta caravana al sur. A medio camino, no es claro el objetivo de esta ruta. Y la cobertura mediática baja.

En Ciudad Hidalgo, Sicilia enfurece con las preguntas de dos reporteros. “Aquí a nadie se le trae a la fuerza; si les parece que somos majaderos pueden irse, nosotros no los invitamos”, les gritó ante las cámaras. La imagen será explotada

hasta el cansancio en la televisión. Sicilia necesita a los medios pero detesta que lo acosen. “No soy Lady Gaga”, reclamó una vez a los fotógrafos que lo perseguían como paparazzis.

Porque Sicilia no es sólo un padre que llora o un poeta que calla. Es un líder que no quiere ser líder de un movimiento político que no quiere ser político. “También soy víctima”, reclama constantemente.

LOS CARAVANEROS

La michoacana María Herrera organiza a los padres y madres para cantar a sus ausentes “Amor eterno”, de Juan Gabriel. Luego, adapta la letra de “La bella Lola” a su nueva vida. Todos cantan en el camión: “Y nosotros los caravaneros/ hemos hecho un barquito de ruedas/ pa’ luchar sobre la carretera/ pues ya no se puede vivir en la guerra”.

En el último asiento del autobús, Nepo repite a unos reporteros la recomendación que hace a quien lo entrevista: “cuando publiques de mi hijo, me mandas un correo. Y luego le escribes al gobernador de Sonora que ya sabes lo que pasó... ¿No se te olvida? Tal vez si ven que más gente sabe lo que pasó, me digan dónde está mi hijo”.

Antes de sumarse al movimiento ningún periodista en Sonora le hacía caso. Y después de varios meses de protestas en Hermosillo, hizo su propia encuesta para saber quién conocía del caso de su hijo. Nadie sabía nada.

Habla de las persecuciones y hostigamientos sufridos por exigir justicia. A su hijo mayor lo encarcelaron injustamente y su hija debió dejar su trabajo. Casi al final, confiesa un presentimiento:

“Dios no lo quiera, pero casi nunca me equivoco: me van a matar muy pronto”.

La plática se detiene mientras se limpia las lágrimas. Sabe que en este país exigir justicia puede ser condena de muerte.

“Páseme lo que me pase no voy a dejar de pelear... No es vida, te levantas y piensas. En todo el día no dejas de pensar... Yo ando con ellos todo el tiempo: en Hermosillo los traigo en el carro, los llevo a la misa, platico con ellos...” dice refiriéndose a los muchachos que lleva en el cartel. “Es muy duro, no lo deseo a nadie. Pero ahí voy a estar, no le hace, si me voy con él, pues no le hace”.

POESÍA Y FE

La base del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, está convertida en camposanto. Cinco mil cruces, flores y veladoras cubren el símbolo de la nación mexicana independiente, en la tradicional fiesta de muertos. Desde esa velada lúdico-espiritual se escucha el canto de dos mujeres islámicas que anteceden a un pastor.

Lo que a continuación se ve en el Paseo de la Reforma podría ser un sueño buñuelista: el fondo de la escena es compartido entre el Ángel alado independentista y el corporativo bancario de HSBC. Ante el monumento, decenas de activistas hincados sobre el asfalto, mientras el sacerdote católico arriba del templete cambia el “líbranos de todo mal” por “líbranos del silencio cómplice”.

Las imágenes de este 31 de octubre de 2011 son posibles gracias a las Iglesias por la Paz, una especie de concilio ecuménico que ha acompañado las movilizaciones.

Si la figura de padre doliente de Sicilia explica la incorporación de otros como él, su abierto catolicismo reactivó el ánimo de grupos religiosos progresistas, que dan base organizativa a las caravanas por la paz y acompañan legalmente a las víctimas. Rápido nos acostumbramos a ver sotanas, cruces y escapularios, y es cotidiana la presencia de religiosos de la teología de la liberación.

Y hay una tercera dimensión del movimiento de víctimas ligada íntimamente a la personalidad de Sicilia: la artística.

“Este movimiento es de largo plazo, porque lo que se está buscando es una transformación profunda, que realmente toque los corazones de la gente”, asegura el actor Daniel Giménez Cacho, uno de sus principales aliados.

Las manifestaciones artísticas han acompañado a los caravaneros en su lucha por la justicia. Artistas anónimos o activistas solidarios repartieron grullas por la paz, pintaron de rojo sangre las fuentes, bordaron los nombres de los ausentes o colgaron muñecos de trapo, en representación a los asesinados del sexenio, en puentes de Montevideo y Barcelona. En cada plaza se leyeron poemas y se cantaron canciones.

En enero de 2012, el movimiento presentó la campaña “En los zapatos del otro”, una serie de spots donde reconocidos actores, como Giménez Cacho, prestan su rostro para dar el testimonio de alguna víctima. Entre ellos, el de Nepomuceno Moreno.

LA MULA BORRACHA

Este 28 de marzo de 2012, cuando se cumple un año del asesinato de Juan Francisco Sicilia, es un día de contrastes. En la

plaza, frente al Palacio de Gobierno de Morelos, Rocato Bablot, amigo y editor del poeta, preparó una larga jornada de actividades y los integrantes del movimiento lloran por los miles de asesinados y desaparecidos del sexenio; al otro extremo, decenas de personas pasean y ríen, ajenas a la desgracia y a la organización.

Sicilia hace un corte de caja: en un año, el movimiento realizó más de 75 acciones, que incluyen 16 caravanas, dos encuentros con el ejecutivo, uno con el legislativo y una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene presencia en 26 estados y otras 19 ciudades de 13 países, con acciones apoyadas por organizaciones civiles y colectivos locales e internacionales de actores, creadores, periodistas y documentalistas. Además, está en curso la Ley General de Víctimas y se prepara para agosto una caravana a Estados Unidos para demandar al gobierno de ese país un mayor control en el tráfico de armas.

“No dejaremos de caminar”, advierte el poeta.

Más que la numeralia, la principal virtud del movimiento fue poner en la agenda del país a las víctimas de la guerra. Romper su silencio. La movilización de los deudos colocó en el centro del debate la emergencia y volvió a movilizar a colectivos y ciudadanos que estaban aletargados. Ya no pudo —o no quiso— ir más lejos.

En febrero de 2012, Le Barón, quien había sido pilar del grupo, hizo pública su decisión de desvincularse del movimiento por considerar que abandonó el método efectivo de la movilización ciudadana y se convirtió en interlocutor de partidos políticos y gobiernos.

“Si juegas con alguien y nunca le puedes ganar porque siempre hace chapuzas o soborna a los árbitros, la solución es

no jugar”, explica el chihuahuense. “Exigirle a la autoridad es como darle latigazos a una mula muerta o borracha. No se mueve, porque no puede. Ellos (los gobernantes) son el problema”.

Otro que ya no seguirá después de este día es Magdiel Sánchez. “El movimiento optó por la gestión de los casos de las víctimas. Me parece limitado para el tamaño de la emergencia y para las propias expectativas que había generado, pero así se decidió”.

El problema, reconocen los propios integrantes del colectivo, es la falta de capacidad para atender el drama nacional. El propio Sicilia lo admite: en un año se registraron más de 700 casos, a 33 se les está dando seguimiento y sólo uno — el de él— está resuelto.

En el país no hay tregua. Desde el homicidio de Juanelo, se sumaron 12 mil asesinatos al sexenio de la muerte.

* * *

La última vez que vi a Nepomuceno Moreno fue en una reunión del movimiento por la paz, días después del segundo encuentro de las víctimas con Calderón.

Ese 14 de octubre de 2011, Nepo se acercó al presidente y, ante las cámaras de televisión, le entregó una copia del expediente de su hijo. “Por denunciar a las autoridades del estado de Sonora ahorita tengo a los soldados afuera de la casa”, le dijo, antes de mostrarle la fotografía de Jorge Mario. Calderón apenas la miró, y prometió revisar el asunto. No lo hizo. Y 45 días después, a plena luz del día y a unas cuadras del palacio de Gobierno de Sonora, le dispararon a quemarropa. Siete disparos cegaron su vida. Fue asesinado sin que llegara

la justicia para su Jorge Mario. Días antes había dicho que pensaba irse a Tijuana, porque habían arremetido las amenazas por sus denuncias.

Nepo no ha sido la única pérdida del movimiento por la paz. Después fueron asesinados Pedro Leyva y Trinidad de la Cruz, líderes campesinos de Santa María Ostula, en Michoacán. Los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista están desaparecidos. Ningún caso se ha resuelto.

Durante el casi año y medio que buscó a su hijo, Nepo repitió a quien quiso oírlo un pensamiento atribuido a Bertold Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”.

TRAS LAS PISTAS DE LOS DESAPARECIDOS

Marcela Turati

Marcela Turati es una periodista que escribe desde una mirada social y con enfoque de derechos humanos. Es reportera de la revista Proceso. Es cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie. Autora del libro Fuego Cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del narco (Grijalbo) y co-autora de los libros colectivos Migraciones vemos... infancias no sabemos (Ririki), La guerra por Juárez (Planeta), 72 migrantes (Almadía, frontera press), La ley del cuerno (Puntocero), Los generales (Planeta), Nuestra aparente rendición (Grijalbo) y 20 años por todas las mujeres (GIRE). Fue finalista del premio Nuevo Periodismo de la FNPI y Cemex con una serie sobre la muerte de 14 migrantes en el desierto de Arizona. Coordinó la serie sobre niños jornaleros que ganó el premio América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del PNUD y la agencia IPS. Ganó el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por dos reportajes sobre familias que se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos. Ha sido becaria de las fundaciones FNPI (Colombia), Avina (Brasil), Prensa y Democracia (México) y Dart Center (EU). Sus textos han aparecido en diversas antologías latinoamericanas. En 2004 y 2005 recorrió redacciones de Latinoamérica en busca de las claves para hacer un periodismo “que no se quede en la denuncia, que abra caminos de esperanza y vías para transformar la realidad”, de cuyos apuntes nació el blog Periodismo de esperanza. El presente libro, del cual es motor y coordinadora, es un intento por materializar ese periodismo que explora lo posible.

Bajo la sombra de un frondoso árbol, en el jardín de la casa de retiros espirituales en las afueras del Distrito Federal, un grupo de madres con hijos de desaparecidos, y un par de varones, comparten sus frustradas experiencias de búsqueda y maldicen el muro de la negligencia gubernamental con el que han topado. Al reconocerse huérfanos de autoridades se abre paso una propuesta.

—Sabemos que hay cavernas, sierras, sembradíos, bodegas donde tienen secuestradas a muchas personas y aunque se da aviso a la autoridad, no hace nada. Es momento de planear un trabajo de campo para ir todos a rescatarlas.

La idea atiza las brasas de los corazones de las mujeres presentes.

—No queda de otra: las familias vamos a tener que ir bajo nuestros recursos y nuestro propio riesgo a rescatarlos, aunque los que los tienen estén armados.

Lo propone un hombre que, como todas aquí, ha seguido los rastros que los ausentes dejaron: transitó la carretera donde desaparecieron a tres de su familia con un grupo de amigos; ubicó el rancho donde sus captores los tuvieron concentrados; peinó los pueblos, cerros y brechas que están en la pasada; contactó a testigos; pidió ayuda inútilmente a procuradores, gobernantes, militares y policías; hurgó en fosas comunes de donde tomó fragmentos de huesos que, cuando tenga dinero, mandará para su análisis genético a un laboratorio. Su esfuerzo, aún sin resultados.

—Necesitamos asesoría sobre quién puede acompañarnos para llegar a esas bodegas sin arriesgarnos —sugiere entusiasmada una de las madres.

Otra señora, que lleva siempre aferrada a la solapa de su blusa, cerca de su corazón, un prendedor con la foto de su hijo —un joven que heredó sus mismas cejas tupidas— intenta devolverles la cordura:

—Si ya tenemos a un familiar desaparecido, ¿vamos a exponer a los otros? ¡Si vamos y nos desaparecen resultará peor!

—¿Qué otro pinche método de búsqueda hay? ¡No hay! —embiste el incubador de la idea.

La certeza de saberse sin salidas legales abona la lluvia de ideas. Alguna sugiere coger palas y excavar donde se dice que hay fosas clandestinas para avergonzar al gobierno y obligarlo a actuar; otra habla de convocar a todos los mexicanos de buena voluntad para ir juntos a rescatar a los muchachos; alguna más propone invitar a periodistas para armar un escándalo internacional.

Preocupada, una señora evoca el trágico destino de Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, el duranguense que sabía la

ubicación exacta del hijo secuestrado y aunque durante cuatro meses pidió ayuda para rescatarlo a las autoridades municipales y estatales, a la PGR, la Marina, la Policía Federal, el Ejército y hasta la Presidencia de la República, jamás fue escuchado. “¡Venimos por ti, compa!”, escuchó antes de morir rafagueado. La misma suerte corrió después el sonorese Nepomuceno Moreno, Don Nepo, asesinado por denunciar a los captores de su hijo.

—¿Quién de aquí no ha hecho hasta lo imposible? ¿Quién no se ha metido en la cueva del lobo? ¡Todos! —dice una mujer del grupo atajando al miedo.

Quienes recorren las rutas de la desaparición forzada en México han escuchado sobre las casas de seguridad donde la gente dice que los narcotraficantes tienen secuestradas a sus presas, los campos de cultivo donde los obligan a sembrar marihuana como esclavos, las bodegas donde los concentran como mercancía en tanto deciden su destino; las represas, tiros de mina, barriles con ácidos o terrenos baldíos donde se deshacen de los cadáveres. Saben de los centros de tortura donde el Ejército concentra a sospechosos, de los entierros clandestinos en los cuarteles militares. Pero si están aquí, en este encuentro, es porque sienten que su familiar está vivo.

Una norteña arrebatada que se ha colado a penales de alta seguridad a preguntar a sicarios por el paradero de su hijo y que a patadas se abre puertas para hacerse escuchar en oficinas de políticos —y hasta en la de la esposa del Presidente—, se imagina la acción colectiva. Y después de manosear un rato en la mente la idea de entrar en turba a una de esas guaridas de sicarios sugiere:

—¿Y si aprendemos primero tiro al blanco para de perdida defendernos cuando nos maten?

Silencio. La discusión acaba de agotarse. Saben que no aprenderán tiro al blanco ni entrarán juntos a rescatar a nadie. Aunque lo desean. Aunque rumien esa idea, en una y otra reunión, cada vez que tocan los límites de la desesperación. Como hoy. Como siempre.

ESTRATEGIA DE GUERRA

Miles son las madres o esposas que todos los días se levantan evocando al familiar ausente. No pasa día sin que ellas se pregunten si es torturado; si comió, si “lo están aprovechando”. En los días de lluvia “¿se estará mojando?”, y a la mañana siguiente “¿amaneció enfermo?” En noches tristes las atormenta pensar en su cuerpo tirado en cualquier monte. O si el ejército lo torturó hasta la agonía o lo tiene en una cárcel clandestina. Pagan fortunas a estafadores que les prometen rescatarlos o recurren a videntes y brujas para saber cómo están. Desde que el ser amado no llegó a casa se convirtieron en nómadas. Movidas por las leyes del corazón, recorren el país peinando procuradurías, carreteras, hospitales, cárceles, morgues, cementerios, baldíos y fosas comunes. Pero no los encuentran.

Calcularlas en miles no es exagerado. Se estima que 10 mil personas han sido desaparecidas en México durante el sexenio en el que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, mandó a uniformados a cazar delincuentes en las calles y la violencia se desató como bestia asesina. El

dato —que algunos lo estiman en 6 mil y otros en 18 mil— no tiene un fundamento científico. Cualquier cifra es dada por válida por lo común de esta práctica de capturar gente y arrancarla para siempre de su propia vida, o levantarla, como se dice en el argot del narco. Y así, sin más, de un segundo a otro un veterinario deja de estar, unos hijos se quedan sin mamá. Se esfuman todos los varones de una familia, todos los pasajeros de un autobús o los sindicalizados de una paraestatal.

Porque llevarse gente, esfumarla, “levantarla”, es una estrategia de guerra.

El método no es novedoso. En la guerra sucia de los años 70 eran desaparecidos los opositores políticos, jóvenes en su mayoría. En la actual, son esfumados los varones en edad productiva y generalmente sin filiaciones políticas. No se sabe para qué. Teorías hay muchas: para engrosar los mermados ejércitos de narcos, para trabajos ilícitos forzados, para traficar con sus órganos, para aprovechamiento sexual, para sacar dinero en extorsiones, para limpiar el país de delincuentes, para dejar a la comunidad en confusión, por meterse con quien no debían, por estar en el lugar equivocado a la hora errónea o, a manera preventiva, para que no engrosen las filas de algún cártel enemigo.

Durante los primeros años del sexenio, las madres parecían una Piedad incompleta llorando en los rincones por el hijo que no pueden tener en brazos. Escondidas, porque los desaparecidos son sospechosos de su destino. Porque cada vez que acuden a la procuraduría escuchan preguntas que parecen sacadas de un mismo manual para culpabilizarlas. “Señora, ¿en qué andaba metido su hijo?... ¿No lo vio con

mucho dinero?... Seguro su esposo la dejó por otra más buena... Los que lo tienen le han de estar pagando bien así que no chille... Si denuncia se llevarán a sus otros hijos, mejor cuide a los que le quedan... Acepte estos huesos aunque no sean de él que ya otros quisieran tener un cuerpo que enterrar...”. La crueldad como método de investigación.

El 10 de mayo de 2012 cientos de Piedades marcharon juntas por las avenidas de la Ciudad de México, reclamaron a gritos los hijos robados del nido, hartas de pedir a la justicia que investigue y de surtir pistas a los fiscales. Parecían uniformadas vistiendo la camiseta y la pancarta con la foto del muchacho, de la jovencita con sus mismas facciones. Hablaban con un lenguaje hilvanado con menciones a corazones rotos, vientres vacíos, dolores del alma, caminos regados con lágrimas, vidas hechas pedazos. Lloraban hasta cuando despotricaban contra el gobierno que quiere verlas enloquecidas.

El encuentro no ocurrió ese día de las madres. Se empezó a bordar desde años antes en diferentes regiones del país, con distintas protagonistas que recorrieron los mismos laberintos burocráticos llenos de puertas falsas donde se fueron encontrando. Después de contarse unas a otras sus historias y de escucharlas una y muchas veces, concluyeron que en México la desaparición forzada es amparada por el Estado. Que los mecanismos de la impunidad garantizan que el delito siga cometiéndose. Desde entonces idean juntas estrategias para reencontrarse con los suyos. Como lo hicieron antes debajo de ese árbol y lo harán a lo largo de este capítulo.

MAPA DE LA DESAPARICIÓN

Tijuana, Baja California, mayo de 2008. Poco a poco, afuera del terreno baldío sellado como escena del crimen, van apareciendo cruces y veladoras y familias que elevan rezos y miran hacia adentro. Es el lote donde operaba el temible “Pozolero”, el hombre que confesó haber disuelto, por instrucciones de narcotraficantes, a cientos de personas cocinadas con ácidos en tambos metálicos. Las familias, desde entonces, no dejarán de movilizarse.

Saltillo, Coahuila, diciembre de 2009. Esta tarde, en las oficinas de la diócesis, se reúnen por primera vez cuatro familias que buscan a 21 personas extraviadas en el estado. Un universitario busca a un hermano y a un sobrino; una maestra a su esposo, a su hijo de ocho años y a dos cuñados; unos hombres a los 12 vendedores mexiquenses de pintura; otro padre a dos comerciantes de oro jalisco. Los convocó Blanca Martínez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis encabezada por el obispo Raúl Vera, quien le pidió atender a las angustiadas familias que se le arrimaban al final de las misas.

En el encuentro, tras reconocer en los otros la misma herida y el miedo paralizante que impide denunciar, con el espíritu envalentonado deciden: “No podemos seguir callados hay que hacerlo público. Somos muchos, ¿qué más nos pueden quitar?”.

Convocan a la prensa a una conferencia, le siguen con plantones semanales afuera del Palacio de Gobierno, exponen su situación en las misas donde piden la palabra,

persiguen al gobernador en actos públicos hasta obligarlo a instalar mesas de trabajo con la fiscalía de justicia. Cuando se dan cuenta de que nada sirve y que crece el número de casos emprenden una marcha a la capital, hasta la oficina del presidente. De regreso a su tierra, náufragos de resultados, deciden fundar una organización. Se bautizan como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila; son un ejército sostenido por mamás.

“Llevaba dos años sola preguntando a las autoridades qué pasaba y nunca tenían noticias de mi hijo. Ya no tenía esperanza, no sabía qué hacer yo sola y aunque hacía lo que podía sentía que no hacía nada. Cuando encontré a las compañeras sentí esperanza, son mi familia, me comprenden y juntas hemos logrado muchas cosas”, expresa la madre del veinteañero desaparecido Israel Torres, aunque podría haber sido cualquiera.

No sólo superó la culpa, también encontró apoyo. “La que está bien está pendiente de la que está enferma, nos entendemos porque tenemos el mismo dolor”, dice al salir de una de las reuniones de la organización.

En esos encuentros ha descubierto que, después de la desaparición de un miembro, las familias se dividen, los roles cambian, la economía doméstica merma, la enfermedad hace nido. La experiencia las hace cargar un botiquín a sus reuniones. Son tantas las emociones que tocan cuando se juntan que no falta a quien le ataque la gastritis, le aumente la presión, le duela la cabeza o le suba el azúcar.

—Ya estoy desesperada. Por más que le reniego a Dios y le pregunto qué quieres de mí, ya hice todo lo que pude, ya topamos con pared... pero tú tienes la última palabra —lamenta una joven abuela a cargo de sus nietos.

—Es válido renegarle, no te sientas mal —le dice otra—. A mí Dios me dice “dame tiempo” y yo le digo “pero no tardes”.

Comienzan a mencionar citas bíblicas, como aquella que dice “busca y encontrarás”, para ellas un guiño celestial, y de ahí pasan a desentrañar otras señales y a excavar en sus sueños.

—Soñé que mi hijo me abrazaba, corría, me decía “madre” y yo me desvanecía.

—Hay que tener mucha fortaleza para que el día que regrese no se te suba el azúcar ni te dé la chiripiorca.

Ríen con el comentario.

En cada reunión encuentran nuevas pautas para el análisis. Saben, por ejemplo, que en 2009, en Coahuila, se desató un “maratón de los desaparecidos”. Que varios muchachos fueron levantados en los mismos tramos carreteros. Que hubo una racha de capturas de técnicos e ingenieros en telecomunicaciones. Que los policías municipales han sido cómplices de los secuestradores. Podrían incluso dibujar a ciegas un mapa de esos “triángulos de las Bermudas” dentro del estado.

Chihuahua, Chihuahua, noviembre de 2010. La casa de retiros espirituales en las afueras de la ciudad alberga un encuentro de mujeres. Durante la presentación, de tanto escuchar la razón por la que todas están aquí, las gargantas se hacen nudo.

El equipo organizador improvisa un ejercicio de respiración para quitar la pesadez al aire. De por sí las mujeres venidas de Nuevo León, Coahuila y Baja California habían viajado

nerviosas por saber que encontrarían a otras sobrevivientes de la misma tortura. Una anciana de plano pasó la noche en vela y amaneció con jaqueca. La mayor angustia de las mujeres es que el programa incluye, además de la charla sobre cómo exigir resultados a la justicia, impartida por veteranas de Juárez que lograron encontrar a sus hijas muertas, otra sobre la exhumación de restos.

De imaginar la posibilidad de encontrar al hijo, a la hermana o al esposo sin vida algunas entran en crisis. Varias lloran. Las personas de los distintos centros de derechos humanos las reúnen para analizar las emociones que les surgen con ese tema.

Otra incomodidad es la charla psicológica anunciada en el programa porque quienes están aquí huyeron de los psicólogos pues, en vez de ayudarlas, les dicen: “delo por muerto, confórmese con los hijos que le quedan”. Ellas no pueden más que re-cordar, que significa “traer de nuevo” (re) al “co-razón” (cordis).

La juarense María Luisa Valdez, que busca a su hijo Juan Miguel y a un sobrino levantados en Veracruz por policías federales, explica su renuencia a las terapias: “Soy madre de siete, y todos los días me levanto y repito: me sigue faltando uno. ¿Cómo pueden pedirme descansar?”.

Pero los psicólogos que dirigen esta sesión lucen distintos. Parece que las entienden. Usan un método llamado psicossocial que se utilizó en El Salvador durante la represión de los años 80 y se convirtió en patrimonio de las víctimas de distintas violencias. Ayuda a que la gente, en comunidad, le encuentre sentido a lo que le ocurre y halle fortalezas individuales y comunes para organizarse y seguir luchando.

Así, guiados con esa técnica, los psicólogos les piden compartir las emociones que más les pesan. Ellas abren su alma:

...Me daba pena decir en el pueblo lo que me pasaba...

...Se queda uno sin trabajo, sin amigos, sin familia, como apestado, creen que siempre va uno a pedirles algo...

...Las culpas dividen a la familia, todos se recriminan...

...Se me cargó todo: tuve que sacar a mis hijos de la escuela, soy padre y madre...

...Somos como esas estrellas en el cielo, la mía es una estrella opaca que está apagada...

...El arzobispo me dijo: “tú tuviste la culpa porque no lo educaste bien”...

...Me dijeron que seguro los levantaron porque mi hijo llevaba un pantalón camuflado...

Al escucharse, las mujeres se dan cuenta que la culpa corroe, paraliza, aísla, ocupa el lugar del sinsentido. Entienden —como aquí les explican— que sus reacciones son normales ante situaciones anormales. Después de reflexionar un rato deciden que es el gobierno, y no ellas, el que debe cargarla. Acomodan sentimientos.

En la segunda fase, los psicólogos les piden que compartan sus fortalezas. Que se dibujen. Y en las hojas van apareciendo corazones heridos pero resistentes, paisajes lluviosos con arcoiris, casas sombrías de donde salen caminos delgados como víboras que indican al ausente la vía para el regreso, árboles secos que dan frutos amorosos. Al expresar comienzan a enderezarse. Los pulmones se inflan de esperanza.

“Me fortalece la vivencia de cada una, porque está pasando lo mismo y la unión hace la fuerza. Y voy a salir adelante. Ya las

de Juárez nos pusieron el ejemplo”, dice contenta la regiomontana Gloria Aguilera, que busca a su marido y dos hijos agentes de tránsito, a quienes dejó de ver el mismo día de 2009.

Ésta es la tercera reunión de madres con hijos desaparecidos en el norte. En la primera, en Saltillo, se contaron cómo la tragedia les partió la vida. En la segunda, en Monterrey, intercambiaron experiencias de lucha y detectaron que por más plantones, huelgas de hambre o mesas de trabajo logradas con los distintos gobiernos estatales y federal, la respuesta común fue la burla institucionalizada. En esta tercera, en Chihuahua, compartieron el aprendizaje legal de las veteranas, comenzaron a validar sus sentimientos y crearon la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familias de Desaparecidos del Norte.

El domingo por la tarde se despiden cantando en círculo alrededor de un cirio pascual encendido como símbolo de esperanza. Arropadas en una lluvia de abrazos unas a otras se dicen al oído la misma frase: no te rindas.

Monterrey, Nuevo León, Mayo de 2011. El calor seco pega intenso sobre las escalinatas afuera de la Procuraduría de Justicia del estado, donde se plantan decenas de familias uniformadas con camisetas blancas en las que llevan impresas los rostros de los seres queridos y la pregunta “¿dónde están?”.

Adentro, en la oficina del procurador, 13 familias en representación del resto exhiben un cuadro sinóptico que muestra las sistemáticas omisiones de la dependencia en las pesquisas. Son las pistas sin rastrear. Las placas de la camioneta en la que se llevaron al ausente, el video que muestra quiénes lo sacan a

la fuerza, el relato del testigo, la lista de llamadas hechas desde su celular después de capturarlo, las coordenadas que marca el GPS de donde fue levantado, el mensaje de texto que la víctima alcanzó a mandar avisando quiénes o dónde lo tenían retenido.

Escuchándolas queda claro que a los desaparecidos no se los lleva el viento. No se los traga la tierra. No desaparecen de la nada. No son personas a quienes alcanzó un brote contagioso de Alzheimer y olvidan el camino a casa. Alguien se los lleva y ellos generalmente dejan pistas. Pero quienes están obligados a investigarlas no lo hacen.

Está ahí Gloria Aguilera, pidiendo respuestas por su esposo Julián Urbina Torres y sus hijos Julián Edwin y Geovanny, los agentes de tránsito desaparecidos el mismo día. Durante semanas quedó noqueada en cama, sin deseos de contestar el teléfono hasta que sintió que su misión era buscarlos. En eso ha andado de la mano de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), centro dirigido por la religiosa Consuelo Morales, y de sus compañeras, muchas como ella, madres y esposas de policías o, por el contrario, de víctimas desaparecidas por policías.

“Vinimos a puntualizar lo que se debió haber investigado y no se hizo. En mi caso dije en la procuraduría dónde podían buscarlos porque mi esposo me contaba cosas de su trabajo y hasta dos años después dizque fueron a buscarlos y, claro, ya no encontraron a nadie. Anexé al expediente el recibo del teléfono de uno de mis hijos con las llamadas que siguieron haciendo, pero no las investigaron. Un día me atreví a llamar a uno de los números y sí me contestaron, pero ya no intenté más, pasé todo a la procuraduría”, relata la mujer menudita, de gesto dulce que ha participado lo

mismo en huelgas de hambre, que en encuentros con otras madres en Chihuahua, donde se prometieron no claudicar.

Esta mañana, cuando salió hacia la procuraduría marchando con sus compañeras, Gloria estaba nerviosa pero esperanzada de que echando montón podrían movilizar a los agentes. Platicaba que, aunque se promete no llorar en público al dar su testimonio, siempre la traiciona el dolor. Ahora, cuatro horas después, al salir de la oficina del procurador, luce triste. De camino a Cadhac, encogida de hombros comenta: “nos pidieron que les demos un mes más para que empiecen a buscarlos”.

En las oficinas de la organización realizan un convivio para informarse de lo ocurrido. La mayoría luce tranquila, en cambio, Julia —la compañera que busca a un hijo capturado por policías desde 2009— habla a gritos por teléfono en un monólogo interminable: “¡dígame al señor procurador que no se burle, que me diga qué han hecho, que mejor me diga que nada!... ¡Nomás están aparentando! ¿Para eso le pagan al señor que nos atendió?... ¡Tres años y siete meses y ni siquiera ha leído el expediente!... ¿Cree que soy estúpida? Ya me cansé, ¡tres años y siete meses suplicándole por favor, por favor, pero nomás se burlan! ¡Me le voy a hacer una huelga de hambre hasta que me muera, hasta que me muera!”.

Cuelga con rabia. Trata de balbucear algo pero no puede. Sólo atina a encogerse en un sillón para llorar. La hermana Consuelo se sienta a su lado, la abraza, la acaricia como a una hija, le dice que aprenda a no ir sola a las reuniones, pues todas están para acompañarse, que se tranquilice, que seguirán buscando a su hijo, que no descansarán hasta sacar a todos de donde los tienen.

México DF, Julio 2011. En el salón de reuniones de la organización donde acamparán esta noche se ven caras largas, ojos tristes. Decenas de familias del interior del país habían viajado ilusionadas a la reunión para hablar con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y con la procuradora general de la República, Marisela Morales, a quienes plantearían siete reclamos. Pero todo se salió de control.

“Al menos no nos batearon”, intenta matizar un joven de Coahuila, mientras varios se reclaman por el fracaso de la reunión. Unas víctimas que nunca habían hablado ante autoridades comenzaron a exponer sus historias y el secretario, astuto, pidió que otras contaran sus tragedias, mientras los demás notaban angustiados que la cita llegaba a su fin. Fue cuando algunas, desesperadas, intervinieron para contar sus casos. Apenas pudieron centrarse en plantearle la necesidad de crear una fiscalía nacional dedicada a buscar personas, un banco de datos genético de las familias, una base de información nacional de casos y un programa de búsqueda con protocolos establecidos.

La discusión continúa:

—Qué decepción. Hasta se me subió el azúcar —dice una norteña sentada en un rincón, el cansancio en el rostro.

—No nos fue tan mal, logramos evidenciar que no han hecho nada —responde un abogado.

—¿Por qué esta vez no lo hicimos bien, como cuando los de la ONU vinieron a vernos? Si cada quien está hablando sin método nos van a ganar el partido porque los políticos sólo quieren aprovecharse —repela el universitario.

Las recriminaciones continúan. Una mujer pide disculpas. Algunas se incomodan por los reclamos. La desesperación

cunde al ver desvanecerse otro oasis en este largo peregrinar por los áridos caminos de la búsqueda de un ser querido.

—Con tantas puertas que nos están cerrando vamos a tener que hacer lo que proponen las compañeras de Sonora, que dicen que las están obligando a agarrar una pala y salir al momento a buscarlos. ¿Qué les cuesta a ellos buscarlos si ya todos sabemos dónde los desaparecen? —señala impaciente una mujer.

—Pero es bien riesgoso. Tenemos que pensar bien, no nada más que salgamos en la locura del dolor al monte. Tenemos que organizarnos mejor —intenta tranquilizarlos una asesora.

Otra vez toparon con pared. No será su última decepción en este juego de serpientes y escaleras. Después el secretario Blake y el subsecretario Felipe Zamora, que habían prometido ayudarlas, morirían en un accidente aéreo. Luego se enterarían por las noticias de que el hermano del fiscal de justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles y la subdelegada de la PGR, Claudia González López, a quienes confiaron las investigaciones, estaban en la nómina de uno de los cárteles de la droga.

León, Guanajuato, Mayo de 2012. De los autobuses recién llegados bajan madres nortañas que viajan con destino al DF, donde anticelebrarán en un plantón otro 10 de mayo alejadas de sus hijos.

En la desarropada marcha rumbo al centro de la ciudad, en la que participan pocos ciudadanos, Ángeles López, activista del centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, vocifera por el altavoz: “hay una política de desaparición forzada, una política apoyada por el Estado... El Es-

tado apoya las desapariciones cada vez que no los buscan, cada que nosotros denunciemos los retenes o los puntos en las carreteras donde desaparecen y no hace nada; cuando no combate al crimen organizado; cuando no investiga las denuncias; cuando niegan que el delito exista; cuando no quieren darnos información... Hoy fueron nuestros hijos, mañana pueden ser otros”.

La idea de armar la caravana desde Ciudad Juárez hasta la capital del país surgió tras la presentación del informe que hizo la ONU sobre la desaparición forzada en México que validó los reclamos de las familias. “¿Qué más podemos hacer?”, se preguntaron al final, “si ya nos sentamos frente al presidente Calderón, si ya nos crearon una fiscalía para buscarlos, si ya logramos que cambiaran las leyes, si ya la ONU nos dio la razón. ¿Qué más?”. “¿Y si hacemos un plantón el día de las madres?”, sugirió alguna, y entonces dale, ponte a vender ropa usada en la cochera de la casa, a ofrecer comida los domingos afuera de misa, a confeccionar manualidades y organizar rifas para juntar para el viaje.

Las de Chihuahua, organizadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) y Justicia para Nuestras Hijas, llenaron un camión con mujeres de todas las generaciones: abuelas que hace 15 años buscan a sus hijas comparten asiento con hermanas, esposas y nietas de personas (mujeres, la mayoría) desaparecidas. Antes de subirse asistieron a un taller donde mesuraron sus expectativas para no deprimirse como cada vez que, después de una manifestación, no encuentran respuesta. En Saltillo y Torreón las madres hicieron ceremonias de envío a las compañeras que representarían al resto. Les impusieron las manos. Cada una

tomó una varita de trigo, frágil y quebradiza, la unió con las demás para simbolizar que juntas son más fuertes, indomables. En esta escala, mientras se desentumen y esperan el desayuno, una trabajadora social les pide cerrar los ojos, tomar aire y abrazar con el corazón al ser querido. Entonces comienzan a escucharse los suspiros entrecortados. Algunas madres mueven los labios. Están platicando con sus hijos. ¿Cuántos ausentes estarán presentes en esta vieja fábrica sin techo? Si Doña Emma, la anciana sentada en la silla, perdió a ocho, toda la simiente masculina de su familia. Si las gemelas Alvarado perdieron a su mamá y a sus tíos. ¿Cuántos desaparecidos están siendo abrazados, si estas mujeres representan a otras muchas?

MECANISMOS DE IMPUNIDAD

Junto al pizarrón del salón en el Distrito Federal donde se lleva a cabo un nuevo encuentro está una República Mexicana mal dibujada. Tiene marcados los hoyos negros en donde se llevan a la gente. El mapa de la desaparición forzada se desplaza por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, DF o Morelos. Y sigue abriendo huecos.

Las mujeres y el puñado de hombres reunidos han aprendido a lidiar con el dolor de la ausencia y la incertidumbre. Diseñaron sus propias estrategias de afrontamiento. Entraron a un proceso colectivo de búsqueda. Crearon redes de apoyo mutuo. Saben que la desaparición forzada es un fenómeno na-

cional, con lógica propia y un Estado cómplice de los captores, ya sea por omisión, colaboración o como perpetrador.

“Cuando conocí a la organización me involucré de lleno, era la posibilidad de hacer algo. Supe que lo de mi hijo no era un secuestro sino una desaparición, pero ya no podía recuperar el tiempo perdido de haber estado sólo llorando. En este tiempo he crecido”, comparte la saltillense Diana Iris, madre de Daniel Cantú, a quien busca desde hace media década.

Hace cinco años, al dar su primera entrevista, Diana pidió que grabaran sólo sus manos y distorsionaran su voz, pero hoy, vencido el miedo, es la primera en tomar el micrófono durante las manifestaciones, aunque siempre termina llorando. Su activismo le valió el divorcio. Al hablar con su marido de los términos de la separación le hizo una única petición: “si yo llego a faltar, tú continúas la búsqueda de nuestro Daniel”.

Volcada a la organización, ayuda a las otras mujeres que llegan a pedir ayuda. Como las demás, de madre se transformó en defensora de derechos humanos. Como las demás, experimenta una maternidad colectiva. “Si Daniel ya no tiene vida quiero que mi vida valga la pena para encontrar a los de mis compañeras”.

Las distintas organizaciones de derechos humanos que las acompañan les han dado herramientas para —como dice alguna por aquí— “saltar del ‘pobrecitas que somos’, al ‘somos poseedoras de derechos y al mismo tiempo que lloramos sabemos exigirlos’”. Toman nota de las experiencias de lucha de las madres de Colombia, de Guatemala, de Argentina, o las doñas mexicanas de Eureka. Sus maestras, sus ancestras, sus hermanas.

En el encuentro, el psicólogo vasco que viaja por el mundo exportando el método psicossocial, les habla de la importan-

cia de salir de la confusión que pretenden imponerles quienes quieren inmovilizarlas.

“Ésta es una lucha contra la impotencia, todo está puesto para ponernos obstáculos. La búsqueda está llena de puertas que llevan a ningún sitio, como un laberinto. Porque el problema de la desaparición es que parece que no hay responsable, que no se sabe quién fue, por qué, o cómo. Pero los familiares tienen que ser conscientes de que forma parte de una estrategia de estigmatización, de culpabilización, de aislamiento social, de privatización del daño, en el que todos te hacen sentir culpable y tenemos que ver cómo protegernos de eso”, explica al grupo.

“Por eso”, continúa, “construimos las vivencias colectivas, aprovechamos la experiencia de todos porque, al comprender el fenómeno de la desaparición salimos del caso individual y empezamos a tener una reflexión colectiva que nos ayude a enfrentarlo, a salir de la parálisis”.

Sienten alivio con estas palabras. Reconocen que si se han sentido enloquecidas, si la gente las evita como si estuvieran apestadas o si las investigaciones no avanzan, tiene relación con las estrategias aplicadas por el Estado para mantenerlas en la confusión. Forma parte de los mecanismos de la impunidad.

Esto hace recordar a Claudia, la madre de un policía desaparecido, el momento en el que las autoridades la llevaron sola a ver una exhumación (“ya no sabía si quería seguir, pero ahí estaba”). A Rosa, mamá de una adolescente asesinada, cuando la obligaron a recibir huesos que no eran de su hija (“que por cuestiones de salubridad no podía verla”). A Lupita cuando lloró en el hombro de la funcionaria que resultó tra-

bajar para los narcos (“tengo asco, se burlaron de nosotras”). A Roberta, cuando no le quisieron entregar el cuerpo de su hijo aún dos meses después de hallado (“les pregunté que de qué les servía, que para ellos eran huesos, para mí mi hijo”).

Así, cada una va desenmascarando las estrategias del Estado:

...Te hacen sentir que te hacen un favor, cuando es un derecho...

...Abren varios expedientes de un mismo caso para cansarnos y confundirnos...

...Me dijeron ‘señora, no lo busque, se lo tragó la tierra’...

...Enfrentan a las familias y meten ideas contra sus asesores...

...A todo lo que pedimos dicen que sí, pero en la práctica lo niegan...

...Desaparecen expedientes...

...Llevan a la gente solita a las excavaciones sin prepararlas y a la mitad las suspenden; son crueles...

...Que no tienes derecho de abrir el ataúd ni para despedirte del cuerpo de tu hija, y te quedas con la duda de si a ella fue a la que enterraste o si sigue viva...

...Te intimidan por investigar, dicen que van a acusarnos por usurpación de funciones...

...Su estrategia no sólo es la desaparición, también es la negación de la justicia...

...Son expertos en envolverte y en no hacer nada. Nomás se hacen pendejos...

Escritas sus experiencias en el pizarrón, toma forma, tamaño y cuerpo el monstruo que enfrentan. De momento se esfuma esa sensación de estar a ciegas.

“Así va a ser más difícil que nos quieran hacer tontas”, festeja alguna.

Seis meses después, la próxima vez que las madres y las organizaciones se encuentren de nuevo en el Distrito Federal para analizar el camino andado y los retos que se avecinan con el fin del sexenio, dejarán el pizarrón lleno de frases cortas. Son palabras que no representan el tamaño de los logros que van enunciando en voz alta cuando, una por una, dice lo que cambió los últimos meses:

“Aprendimos a manifestarnos sin miedo”.

“Dejamos de ser invisibles”.

“Los periodistas ya nos hacen caso”.

“Logramos traer a la ONU”.

“Nos invitaron a hablar en el extranjero”.

“La gente ya no habla de levantados, habla de desaparecidos”.

“Marchamos juntas el 10 de mayo”.

“Cada mes nos reunimos con la procuraduría para ver el avance de 50 casos”.

“Creamos una ley de víctimas que el presidente vetó, pero seguimos peleando”.

“Se hizo un protocolo para que el Ministerio Público sepa qué hacer las primeras horas cuando recibe denuncias”.

“Conocemos los métodos que usa el Estado para confundirnos”.

“En Chihuahua se rescataron cinco jóvenes vivas y una en Veracruz”.

“Estamos aquí familias y organizaciones de varios estados, organizándonos”.

“Cuando las autoridades ven que llegamos se ponen a trabajar”.

“Ya representamos a otras víctimas”.

Al final, una de las compañeras toma la palabra y expresa su sensación de ambivalencia: “Aunque éstos son logros no significan resultados, porque aún no hemos recuperado a nuestros hijos”.

Sin embargo, se les nota transformadas. Están revestidas de una dignidad que nadie les quita. Una madre no aguanta las ganas de pasar al frente a leer la carta de amor que escribió para su hijo y las demás la acompañan con su llanto. No falta quien cierre los ojos e imagine que el reencuentro puede ser más rápido y sueñe con el día en que podrán entrar a las casas de seguridad, las bodegas, las cuevas, los sembradíos, las cárceles donde tienen esclavizados a los suyos, y rescatarlos.

*Los nombres de algunas personas que aparecen en esta historia fueron cambiados a petición de ellas mismas.

TINTA CONTRA EL SILENCIO

John Gibler

John Gibler es autor de Morir en México (sur+, 2012), 20 poemas para ser leídos en una balacera (sur+, 2012) y México Rebelde (Debate, 2011), y colaboró en el libro País de muertos: crónicas contra la impunidad (Debate, 2011). Es un periodista independiente que vive en México desde 2006, escribe artículos y reportajes sobre política nacional y regional. Ha colaborado en diversos medios impresos estadounidenses y mexicanos, como Left Turn, Z Magazine, In These Times, Common Dreams, Yes! Magazine, ColorLines, Democracy Now!, Milenio Semanal y Contralínea. Se graduó en filosofía en la Universidad de Texas y estudió la maestría en filosofía política en la London School of Economics.

Cuando Pedro Tonantzin salió de su oficina y vio un helicóptero de la Marina suspendido en el aire, no tenía la menor idea de lo que vendría. Cuernavaca en diciembre del 2009 todavía no sufría los peores acontecimientos de la llamada narcoguerra. Los reporteros de nota roja, como Tonantzin, corresponsal de Excélsior, Cadena 3 y Univisión, ya cubrían algunas escenas de personas asesinadas cuyos cadáveres habían sido depositados en la vía pública con mensajes escritos en cartulinas y firmados por el Cártel Pacífico Sur, o C.P.S. Pero las balaceras en plena ciudad, las masacres en lugares públicos, el teatro callejero de la saña, tan común ya en lugares como Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez, era visto como parte de una lejana realidad nortea. Una realidad que los periodistas de Morelos no dimensionaban ni entendían. Algunos confiesan ahora haber sentido ganas de cubrirlo.

Pedro Tonantzin filmó el helicóptero mientras marinos bajaban a rapel, uno tras otro, hacia los condominios de lujo Altitud. Momentos después él y un colega corrieron hacia los departamentos.

En las siguientes horas a muchos reporteros de Cuernavaca les tocaría tirarse al suelo entre las balas, identificarse ante soldados que los encañonaban, tomar imágenes de explosiones de granadas, balaceras, detenidos y muertos. Un poco antes de la media noche supieron que fuerzas especiales de la Marina —aparentemente apoyados por elementos de la agencia estadounidense antidrogas, la DEA— habían matado al capo del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva y a varios de sus acompañantes.

Así llegó la llamada narcoguerra a Cuernavaca, un día de diciembre, como de la nada.

“Sabíamos que iba a tener consecuencias”, dijo Pedro Tonantzin sobre el operativo de la Marina, “y apareció la primera narcomanta unos días o una semana después”. Esta manta, reflexionó, declaró una guerra, “no un ajuste de cuentas, una guerra”.

Pasaron un par de semanas de calma extraña en Morelos y después empezaron a aparecer en las noches y en las madrugadas los cuerpos destrozados, lenguaje del terror escrito con seres humanos decapitados, desmembrados, desfigurados, colgados de los puentes. En el estado de Morelos, a una hora del Distrito Federal, ese lenguaje era noticia. Los medios de comunicación exigían la nota y sobre todo, la imagen. Los reporteros acostumbrados a cubrir incendios, asaltos y choques, se encontraron de pronto ante escenas de incalificable brutalidad.

Desde diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón mandó al ejército a las calles en su llamada “guerra contra el narcotráfico”, un estimado de 20 mil personas habían sido asesinadas, hasta ese entonces. La Procuraduría General de la República no investigaba el 98 por ciento de esos casos. Prevalecía una lógica explícita de culpar al muerto de su destino y así reinaba la impunidad. En el mismo lapso, 24 periodistas fueron asesinados. Ninguno de esos casos estaba resuelto.

En 2010, llegar en la madrugada a tomar imágenes de cuatro hombres colgados de un puente no sólo era enfrentar el terror de los hechos, representaba un riesgo de muerte.

O más que un riesgo, muchos.

Está la amenaza constante de “los Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza”, por citar la carta publicada en primera plana del Diario de Juárez bajo el titular “¿Qué quieren de nosotros?” en septiembre del 2010 tras días del asesinato de su fotoperiodista, Luis Carlos Santiago, y a casi dos años del asesinato de su reportero Armando Rodríguez. La carta editorial siguió así: “la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias. Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer

nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.

Nadie les contestó.

“Nosotros buscamos una respuesta finalmente del gobierno, y en lugar de eso salieron muy a la defensiva”, explicó Pedro Torres, subdirector del diario. Prácticamente dieron carpetazo a las investigaciones.

Y esa falta de respuesta es parte integral de la amenaza: no sólo es que “los Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza” tienen el poder de fuego y la capacidad organizativa de matar, sino que quienes deben protegerte o por lo menos hacer justicia en caso de una agresión, no lo hacen. Para los reporteros la amenaza se hace presente al momento de escribir la nota o mandar la imagen, es como un telón de fondo, oscuro, indefinido, pero siempre detrás de lo que se presente en el escenario.

“El narco manda en muchos lugares del país, controla gobiernos”, me dijo Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Ríodoce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa. “Así el narco manda en las redacciones. Cuando tú escribes una nota sobre el narco, no piensas en el editor, no piensas en el jefe de información, no piensas en el lector: piensas en el narco, si le va a gustar, o si lo ve como un problema o si te va a amenazar, o si estará esperando para ‘levantarte’. El narco manda en la redacción. No es necesario que alguien llegue y te amenace, esta situación es ya una amenaza. Es como si alguien te estuviera apuntando siempre”.

Pero para los reporteros que acuden a los lugares de los hechos, hay muchos riesgos más.

Está el de llegar a la escena de un crimen y toparte con los delincuentes, como fue el caso de un grupo de reporteros

en Morelos que se dirigía a una cobertura por la madrugada. Estaban perdidos y pararon a una camioneta que venía hacia ellos, les pidieron orientación. Mientras les daban indicaciones percibieron que los tripulantes venían de ese mismo lugar y andaban armados. O el caso de otros compañeros que una madrugada fotografiaban a varios hombres colgados de un puente. Una camioneta Hummer llegó al lugar, un tipo bajó de ella y comenzó a grabar a los reporteros con una videocámara. Ni los policías, ni los peritos presentes dijeron nada. Después se enteraron que el hombre era Julio Radilla, alias El Negro, acusado del asesinato de seis personas, incluyendo a Juan Francisco Sicilia, el hijo del poeta Javier Sicilia.

O está el riesgo de salir a buscar una nota y llegar en plena acción. Brenda Ramírez, corresponsal de Uno TV en Cuernavaca, cuenta que con una compañera se encontró en la calle con patrullas de policías y ministeriales, decidieron seguir las y llegaron cerca del epicentro de una balacera.

También está el riesgo de encontrarse frente a frente con los asesinos. Un día, en Culiacán, los reporteros y policías llegaron al sitio donde acababan de secuestrar a una persona. A los pocos minutos regresó la camioneta con los secuestradores, unos bajaron y encañonaron a los fotógrafos mientras decían “nada de fotos, eh”, luego se llevaron a otra persona. En esa ciudad Ernesto Martínez, fotógrafo de Primera Hora, atestiguó cómo un comando armado llegó a la Cruz Roja para sacar a un herido de bala, quien minutos antes sobrevivió a un multihomicidio. Después apareció muerto. Martínez logró captar un par de imágenes mientras se tiraba al piso.

La propia policía también es un riesgo. Puede golpear o quitar el equipo de trabajo a los periodistas, o incluso traba-

jar para las organizaciones delictivas. Y están los llamados halcones, empleados rasos del crimen organizado, que bien son taxistas o mirones con celulares o radios en la mano, para informar sobre quiénes llegan y qué hacen.

Está el riesgo de un conflicto con los familiares de las víctimas de un asesinato. “Ése es el principal factor de inseguridad” al momento de acudir a la escena de un crimen, dijo Pedro Tonantzin, “el hecho de que haya familiares. Y sobre todo cuando las víctimas sí tienen algo que ver con la delincuencia, eso es cuando es más agresiva la cosa”.

Y está el gran riesgo, impregnado por todo lo anterior, que representa la cultura del chayote, ese legado de los años del PRI donde toda noticia tiene precio. El soborno se manifiesta en las mensualidades que proporciona algún funcionario para tener siempre fiel y a la orden al reportero. Este riesgo tomó otra dimensión cuando representantes del crimen organizado —a veces despachando desde escritorios gubernamentales— se encargaron de repartir el dinero.

Los riesgos se han traducido en agresiones. En julio del 2012, Laura Angelina Borbolla, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, dijo que desde diciembre del 2006, 67 periodistas fueron asesinados y 14 desaparecidos. La funcionaria, que según El Universal gana más de un millón de pesos anuales y cuenta con 3 millones de pesos para la operación de la fiscalía, no ha resuelto un solo caso desde el 2010.

Por todos estos riesgos, agresiones e impunidad, México se convirtió en el país más peligroso para periodistas en el mundo en los años 2010 y 2011.

* * *

El 23 de julio de 2010 fueron colocadas cuatro mantas en puentes peatonales y portones de los municipios de Cuautla, Jojutla, Juitepec y Yautepec, Morelos. Escritos sobre sábanas con una caligrafía impecable en tintas negra y roja, los mensajes acusaron a varias personas de “colocar los narcomensajes para distraer a la ciudadanía”. En las mantas se leía también que “las autoridades que laboran en esta zona están compradas por Edgar Valdez Villarreal (Barby)”. Y ahí el mensaje se dirigía a Valdez Villarreal: “sabemos de las intenciones que tienes contra los reporteros y que pronto piensas realizar, pero antes de que esto suceda vamos por ustedes es cuestión de tiempo para que terminen colgados de un puente como los traidores que son”. Abajo, la firma: “ATT: C.P.S”.

“Cuando la veo, de verdad me corre un frío terrible”, dijo David Monroy, corresponsal de Milenio y AFP en Cuernavaca. Monroy agarró su teléfono y marcó a Justino Miranda, corresponsal de El Universal. “Esto está muy grave”, le dijo, “tenemos que organizarnos para ver qué vamos a hacer. A ver cómo vamos a responder y cómo nos vamos a defender”.

Se citaron en el Sanborns del centro de Cuernavaca. Convocaron a todos sus compañeros periodistas a una reunión.

“¿Qué te da a entender?” dijo Enrique Tejeda, corresponsal de Notimex, en referencia al mensaje, “que La Barbie atentaba en contra de los periodistas y que el C.P.S. nos iba a defender. Ese es el detonante. Todos fuimos al Sanborns”.

Por esas fechas del 2010, Valdez Villarreal, alias La Barbie, era acusado de ser uno de los más sanguinarios asesinos a sueldo en el mundo del narcotráfico (fue detenido por la Policía Federal en agosto del 2010). No se podía ignorar la posibilidad

de que contara con un plan en contra de periodistas. Ni que un grupo autodenominado como cártel anunciara su intención de actuar en defensa de la prensa. La situación estaba complicada, sobre todo por el poder de fuego de los grupos delictivos y la impunidad de sus crímenes.

“Cuando nos reunimos, pronto caímos en la terrible realidad de que nadie podría hacer nada por nosotros”, dijo Monroy. “Ni las empresas dueñas de los medios ni los diferentes niveles de gobierno tenían programas especiales ni siquiera protocolos de seguridad para reporteros trabajando en zonas de riesgo”.

“Nos encontramos” continuó, “ante la realidad de que lo único que podemos hacer era autoprotegernos. Dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos?”.

Surgieron propuestas que iban desde comprar chalecos antibalas hasta contestarle al C.P.S. con mantas de los periodistas declarando la imparcialidad. Pensaron que ninguna era útil.

Ese 23 de julio, los reporteros en Cuernavaca se toparon con su soledad frente a la violencia y el fracaso del Estado. Estaban solos, sí, pero eso los llevaría a buscar fuerza en otro campo distinto al de los carros blindados.

En la reunión surgió la idea de crear una red que pudiera romper las viejas envidias entre reporteros y asentar una estructura para la autoprotección, lo que sería después la Red Mexicana de Reporteros. Decidieron primero, y de inmediato, crear la figura de monitor para las coberturas de riesgo; segundo, y durante las siguientes semanas, capacitarse para trabajar en zonas de peligro; y tercero, y más a largo plazo, desarrollar y promover un protocolo estatal de

seguridad para periodistas que podría ser firmado y asumido por el gobierno del estado.

* * *

Estrella Pedroza, reportera de El Regional del Sur, quien cubre las fuentes de movimientos sociales, derechos humanos y el poder ejecutivo del estado, fungió como monitora por más de seis meses. Desde su casa llevó una bitácora de los movimientos de los reporteros que salían en la noche o madrugada a cubrir eventos relacionados al crimen organizado.

Cuando algún periodista se enteraba de algo ocurrido, le marcaba a Pedroza, quien avisaba a los demás para saber si acudirían o no. Ella anotaba cualquier movimiento de quienes iban a cubrir la noticia. Les marcaba cada 15 o 20 minutos para confirmar cómo estaban, cuáles eran las condiciones de seguridad en la zona, y en cuánto tiempo realizarían la cobertura. Todo quedaba registrado en su libreta.

“Prácticamente era como si yo fuera con ellos, porque yo tenía que estar despierta. Digo, me daba mis pestañitas, pero tenía la preocupación”, dijo Pedroza. “Ellos me transmitían ese miedo que llegaban a sentir, esa angustia. O por ejemplo, en algunos de los lugares a donde ellos iban, se perdía la señal. Entonces era una locura porque yo ya no sabía si estaba pasando algo o sólo era la señal”.

No todo marchaba siempre según el plan. Una vez se quedó dormida. No pasó nada, los reporteros no le avisaron cuando iban de regreso pensando justamente que ya estaría descansando. Ella durmió una o dos horas y despertó de golpe. Desesperada, empezó a marcarles, pero no le contestaban. Por fin uno le contestó y le dijo, “no te preocupes, ya estamos en casa”.

Pero sobre todo era un apoyo. “Empezaba a haber acciones en donde los mismos policías los querían golpear, o les querían quitar su material,” contó Pedroza.

En estos casos los reporteros llamaban a Pedroza y le iban informando sobre la situación en la escena. En algunos otros hicieron evidente sus pláticas por teléfono ante algún comandante de la policía para demostrarle que alguien en otro lugar los estaba cuidando.

* * *

En septiembre de 2010, un par de meses después de que los periodistas de Morelos comenzaron a organizarse, Calderón se comprometió a combatir la impunidad ante el Comité para la Protección de los Periodistas diciendo que un fiscal especializado en crímenes contra periodistas llevaría a los culpables ante la justicia. En febrero del 2012 Mike O’Connor, representante en México del Comité, escribió en un informe que “Calderón y su administración fracasaron en casi cada paso”. Reconoció que la administración tomó ciertas acciones en 2011, “pero sin ningún avance, dejando a los periodistas sin razones para pensar que el clima de impunidad cambiará pronto”.

En este contexto de asesinatos, agresiones, e impunidad, el presidente Calderón, en un discurso ante el Foro México el 16 de marzo del 2011, dijo: “si yo no hubiera sido político, a lo mejor hago, me dedico al periodismo, que también me gusta, es una profesión que respeto. Pero hubiera hecho un periódico que se llamara Balance, ¿no? Y en la primera plana pondría, de un lado, todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado de la primera plana, todas las noticias buenas, las más importantes”.

Para ese entonces por lo menos 29 reporteros y cuatro trabajadores de medios habían sido asesinados durante su mandato, y ningún caso resuelto. Y más de 40 mil personas habían muerto en todo el país en hechos supuestamente vinculados al crimen organizado o a su combate, y menos del tres por ciento de estos homicidios estaban siendo investigados por el gobierno federal. Violencia diaria, terror y trauma social, y una tasa de impunidad del 98 por ciento. En este contexto no hace falta balance, hace falta justicia.

Ocho días después del discurso de Calderón, los principales medios comerciales del país, incluyendo a Televisa, TV Azteca, Excélsior y El Universal, firmaron un “acuerdo para la cobertura informativa de la violencia”, llamando, entre otras cosas a “no interferir en el combate a la delincuencia”, como si eso fuera el problema. El día siguiente, Luis Emanuel Ruiz Carrillo, reportero de La Prensa en Monterrey, fue asesinado. No hay ningún avance en el caso.

“La crítica en México al gobierno, en particular al federal, es intensa”, dijo Calderón en agosto del 2010. “Y qué bueno que lo sea en términos de nuestra democracia y de nuestra pluralidad, pero eso no debe llevarnos a omisiones en la narrativa del problema, en esa narrativa hay una verdad elemental que no podemos perder: el verdadero enemigo, la amenaza a la sociedad son los criminales, no es el gobierno, por lo menos no en este caso”.

Quién es “criminal” y quién no es algo extremadamente difícil de descifrar en estos últimos años. Según la lógica de Calderón, si estás muerto es porque en algo andabas, es decir, fuiste criminal, y si estás llevando un uniforme de policía o soldado, entonces andas bien, no puedes hacer el mal. Uno de los principales retos del periodismo durante

el sexenio de Calderón ha sido precisamente derrumbar, con investigaciones y documentación de hechos concretos, esta falsa distinción.

Pero Calderón quiere que los periodistas apoyen de entrada al gobierno.

“Para mí es muy difícil hacer periodismo tomando partido de antemano”, me dijo Luis Petersen, director de Multimedia en Monterrey, en el 2010. “Parece que aquí se tiene que hacer y el tomar partido es una institución que está en riesgo. El estado mexicano está en manos de gente no representativa que lo único que tiene es capacidad de fuego. Toda esta lucha mexicana de 20 años por la democracia y la apertura, eso ya no existe. ¿Quién ejerce la soberanía? ¿Dónde está el poder? Está en manos de esa gente [narcos]. ¿La policía? Infiltrada. Tienen una buena parte de la política infiltrada. Nosotros no podemos hacer periodismo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una opinión previa”.

* * *

En septiembre del 2010 empezaron a organizar y tomar talleres de periodismo y seguridad. Carlos Quintero, un reportero que en ese entonces trabajaba para el principal periódico de nota roja en Morelos, Extra, fue uno de ellos. A partir de los cursos decidió dejar de saltar los cordones policiales que encerraban la escena de un asesinato, y moderar el lenguaje que usaba en sus notas. Cambió la palabra “ejecutado” por “víctima”, la palabra “levantado” por “privado de la libertad”, y “sicario” por “persona armada”.

“Eran términos que el narcotráfico había impuesto y nosotros estábamos contribuyendo con ellos. Finalmente me di cuenta que nosotros tenemos mucha responsabilidad en

la forma en que cubrimos la noticia”, dijo Quintero y señaló otro punto clave en la autocrítica hacia la violencia del lenguaje empleada en muchos medios que implícita o explícitamente vuelve a victimizar a personas asesinadas: “el gobierno con eso se limpia las manos”.

“Llegué a saber que involuntariamente éramos portavoces de la delincuencia organizada”, dijo. “Le creas una imagen de poder. Porque también es una estrategia mediática la que ellos utilizaban. Nosotros no sabíamos cómo cubrir los hechos violentos. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a capacitarnos”.

Pese a la desconfianza hacia las autoridades los reporteros de la red decidieron promover ante el gobierno del estado un protocolo de seguridad para reporteros. Querían obligarlo a definir medidas de seguridad con la gestión de un protocolo.

Maciel Calvo, reportera de La Unión de Morelos, es de los miembros de la red que ha trabajado el protocolo a partir de preguntas como: ¿qué hacer si un periodista recibe una amenaza directa del crimen organizado? ¿O si secuestran o privan de su libertad a un reportero? ¿Cómo responder ante una situación así?

“Con el gobierno del estado sí hubo disposición. Y con el Congreso del estado sí nos topamos con pared porque nos decían casi casi, ‘es obligación de ustedes venir a presentarnos el proyecto y a ver si lo aprobamos’. Sí fue muy renuente, incluso algunos legisladores fueron muy groseros. ‘Ustedes, ¿a quiénes les importan? ¿Para qué quieren un protocolo? Ustedes no son especiales, son trabajadores como todos. No necesitan un tratamiento especial, ni una ley especial’”, recuerda Calvo.

Para demostrar la urgencia de un protocolo, a través de la red documentaron varios casos de compañeros que habían recibido amenazas o sufrido alguna agresión.

Uno de los casos fue el de una joven reportera de la Unión de Morelos, en el sur del estado. Cuando fue a cubrir un asalto ella identificó a uno de los criminales, que resultó ser un comandante de la policía de Cuernavaca. Le cayeron varias amenazas directas por teléfono, en las que le dijeron “te vamos a matar, sabemos dónde vives”. Ella nunca imaginó la dimensión de su nota y entró en pánico. Sus amigos y colegas intentaron protegerla y ayudarla a tranquilizarse. Las amenazas no pasaron a una agresión física, pero la experiencia resaltó la necesidad de elaborar y establecer medidas de seguridad básicas para situaciones de mucho riesgo.

“En Morelos estábamos haciendo un trabajo para que no pasara lo que en otros estados”, me dijo Calvo. “Incluso hicimos el esfuerzo de venderles la idea al gobierno de que Morelos fuera el ícono a nivel nacional por la disposición del tema de nosotros, no solamente en la libertad de expresión sino que hubiese medidas de seguridad del propio estado para proteger a sus periodistas. Pero finalmente dijimos que es su obligación legal. No es que seamos especiales. Hay leyes que nos protegen y ustedes tienen que poner toda esa disposición.”

Con el fin de promover el protocolo varios miembros de la red formaron una asociación civil y una mesa directiva para delegar la representación del grupo ante el estado. Otros no estuvieron de acuerdo. Había dos grupos buscando los puestos de la dirigencia. Acordaron no hacer campaña, convocar

una asamblea y votar. Un grupo subió la convocatoria para la asamblea a su cuenta de facebook y agregó una especie de “vota por nosotros”. El otro grupo se enojó y también subió sus propuestas y la petición de voto a la red social. Del internet a las llamadas telefónicas. De las propuestas a las acusaciones y los insultos. La mayoría de los participantes me contaron su versión del desencuentro, pero Estrella Pedroza en una frase resumió las diferentes posiciones: “en un día se fue al carajo todo”.

Nunca se realizó la asamblea. La mitad de los periodistas salió de la Red Mexicana de Reporteros aunque seguían organizados entre ellos. La otra mitad se quedó con el nombre de la Red. Los dos grupos seguían promoviendo el protocolo de seguridad.

En estos últimos años otros reporteros de a pie de regiones peligrosas comenzaron a organizarse entre ellos, a sabiendas de que ni sus empresas ni el gobierno velarían por su seguridad. En Ciudad Juárez y en Chihuahua redes recién creadas organizaron talleres de seguridad para coberturas riesgosas. En Chiapas se creó un bloque de reporteros que tras capacitarse en periodismo digital usaron el tuitter y los blogs para difundir información censurada. En Veracruz, después de cinco asesinatos de periodistas en menos de un mes, un grupo de reporteros policíacos elaboraron un protocolo para activar en casos de emergencia.

A medio año de la división de los periodistas de Morelos se habían calmado las aguas, la Red estaba estancada, pero sus miembros seguían organizándose de forma informal. Les pregunté, ¿qué pasó con el proceso de organización en la Red?

“¿Qué es lo que más se ha quedado? Pues, los conocimientos”, dijo David Monroy. “En mi caso yo no veo una cobertura igual que antes. Antes buscaba todos los detalles, pero hay cosas que con los cursos nos hemos dado cuenta: que primero no valen la pena, y segundo, haces víctimas a las personas cuando las expones. Ya no hago las mismas imágenes que antes. Intento cuidar un poco el ángulo sin perder esa libertad, sin perder esa esencia de informar de lo que está pasando. Yo me quedo con eso, con lo que hemos aprendido para autoprotegernos, para no ser tan agresivos con la sociedad”.

En muchos lugares del país, me dijo Maciel Calvo, hay zonas de silencio donde los reporteros, por muy distintas razones, “en su momento no se organizaron, no se protegieron y terminaron siendo callados y dominados tanto por el Estado como por las organizaciones criminales”.

“Dijimos, pues hay que hacer el esfuerzo de organizarnos, porque si dejamos que la aplanadora pase por nosotros, después nos va a pasar exactamente lo mismo”, dijo Calvo. “Y de hecho, creo que sí logramos el objetivo, a pesar de las diferencias y las broncas que hemos tenido, alcanzamos ese objetivo de lograr que no nos callaran”.

* * *

En los primeros días de mayo del 2012 acompañé a Pedro Tonantzin a sus jornadas de trabajo. Él es uno de los reporteros de Morelos que más sale a los lugares para cubrir hechos de violencia. Dos horas después de haber llegado a su oficina le llegó la noticia del hallazgo de una narcofosa que iban a exhumar. Salimos en camino junto con Brenda Ramírez, el camarógrafo Óscar Raúl López Torres y Margarito Pérez,

fotógrafo de Proceso. En el coche le pregunté si la guerra seguía, y bajo cuáles dinámicas.

“La guerra aquí es por la venta”, dijo Tonantzin. “El narcomenudeo aquí es altísimo. Hay un nivel de consumo como en Ciudad Juárez y ahora empieza a haber adictos a la heroína, lo que no se veía antes”.

En el camino, mientras llegábamos a la escena del crimen, llamó por teléfono a un par de compañeros para avisarles del descubrimiento de la fosa clandestina.

“Hicimos mucho hincapié”, me dijo, “mucho énfasis en que en Morelos no hay que ceder al silencio. En otros estados, compañeros cayeron por errores en el silencio y con el silencio la violencia se puede poner peor. Yo creo que parte de la inconformidad social que se siente por lo que está pasando es por no haber caído en el silencio”.

Llamó a un compañero y le preguntó: “¿por dónde vas?”.

Estábamos ya en la orilla de Cuernavaca, cerca del lugar donde enterraron los cuerpos. El contraste con el centro turístico de la ciudad no pudo ser mayor. Se parecía más a las orillas de Ecatepec o a las últimas casas de una extensa favela de Río de Janeiro.

Caminando hacia la casa donde encontraron los cuerpos, Margarito Pérez se me acercó. Veíamos las colinas con casas pequeñas y precarias hechas de concreto y lona, bajo el sol fuertísimo y sobre la tierra seca, quemada. Pérez me comentó sobre la diferencia entre las “calles bonitas” del centro de Cuernavaca y los barrios marginados como éste, de la condición pesada de la vida y la concentración de la violencia en esta zona.

“Yo lo ubico como algo socialmente muy definido”, dijo.

LA RESISTENCIA CIBERNÉTICA

Vanessa Job

“Muchos de los eventos que cubrimos están en colonias populares como ésta. Ves, aquí se dan los enfrentamientos, de aquí son los muertos, aquí consumen la droga. Tal vez es muy fuerte eso de limpieza social, pero...”

Llegamos frente a la casa de un piso, pintado de amarillo, sencilla pero un poco más cuidada que otras del barrio. Estaban varios policías y peritos en la reja de entrada. Desde la calle de terracería alcanzamos a ver los hoyos de donde habían sacado dos cuerpos. Un agente de la policía municipal empezaba a apuntar los nombres de varios periodistas presentes en una libreta. Llegaron soldados y los fotógrafos y camarógrafos buscaban la imagen de los militares en frente de la casa.

De repente, mientras estaban grabando a los militares y la casa, los peritos empezaron a retirarse. Tonantzin le gritó a Óscar Torres, “eh, ¡ahí, ve cómo se van! Graba cómo se van”.

Me dijo: “hay una política del gobierno del estado de ocultar la información, por eso se están yendo, porque nosotros estamos aquí. Están suspendiendo una diligencia”.

Él había escuchado que alguien le dijo a un perito por radio: “la operación se va en 52 por la presencia de los medios”. El número 52 quiere decir cancelado.

Tras cinco minutos de haber llegado, la casa estaba sola. No dejaron ningún cordón, ninguna guardia. Un policía dijo solamente: “puto el que entre”.

“Cuando la autoridad quiere silencio”, dijo Tonantzin, ya de regreso en la oficina, “es porque está involucrada. Es regla. Cuando una autoridad pide silencio no hay otra explicación más que la complicidad.”

Vanessa Job es reportera especializada en temas políticos, sociales y derechos humanos. Durante más de tres años formó parte del equipo de la revista Emeequis y ahora labora en el programa Punto de Partida con Denise Maerker. A lo largo de su trayectoria ha escrito en el periódico ABC (España), las revistas Pie Izquierdo (Bolivia), Este País y Cambio. Además en el periódico El País (Colombia), el suplemento Petroleum de Reforma, el periódico Libertas, el suplemento Letra S de La Jornada, El Gráfico de El Universal, la revista Obras de Grupo Expansión, y durante tres años fue corresponsal de Time Inc. en la revista People en Español.

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Además estudió el diplomado en Análisis Político en el CIDE, y otro en Derechos Humanos impartido por la Universidad Iberoamericana y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.

En la séptima edición del Premio Nacional Rostros de la Discriminación 2011 obtuvo una mención honorífica por el reportaje "Todos los caminos de Mier conducen a Roma, Texas" publicado en Emeequis.

POR MEMORIA Y JUSTICIA

Que nunca los voluntarios cuenten a uno de mis padres, mis amigos, mi familia. Nunca. Yo encontré a Rubén, Javier, Juan Manuel, Carlos, Rafael, Rubén, Abraham, Noel, Franshesca, Ricardo, Luis Alberto. Cuatrocientos treinta y nueve cuerpos de hombres, mujeres y niños asesinados en la semana que me uní al blog Menos Días Aquí, donde los ciudadanos se ofrecen como embalsamadores cibernéticos y durante siete días rastrean los cadáveres de las personas asesinadas en la guerra contra el narcotráfico.

Los nombran, los cuentan, señalan el lugar y el día que apareció el cuerpo, buscan datos de cómo estaban vestidos, si tenían un tatuaje o una cicatriz que ayude a un familiar a encontrarlos. Los han localizado y hay historias donde los familiares compartieron el nombre de su difunto para unirlo

a este altar de la memoria. Así lo hizo la hermana de Juan Pablo Núñez Manzano, víctima de la violencia.

A los voluntarios les envían las instrucciones por correo: “antes que nada queremos agradecerte que hayas querido sumarte a este esfuerzo colectivo: te necesitamos, así como necesitamos a cualquiera que quiera involucrarse en nuestra lucha contra la indiferencia. Este trabajo no es fácil, exige tiempo y cuidado, por eso te pedimos que seas consciente de que has adquirido un compromiso con el blog, con quienes lo visitan, con nuestros muertos y con México”.

El instructivo incluye una lista de más de 50 fuentes de información entre blogs, medios de comunicación locales y nacionales para que los voluntarios escarben entre las notas publicadas y desentierren el número de personas asesinadas.

Por la noche los voluntarios rastrean a las víctimas y las suman a una base de datos construida colectivamente a través del blog. Sus nombres son desgranados uno a uno a través de la cuenta @menosdiasaqui.

La apuesta a futuro es lograr un memorial que recupere el nombre de las miles de personas muertas en esta guerra.

—Un hombre de 50 años de edad, de 1.75 metros de estatura, complexión regular, ojos café claro, fue baleado y arrojado a la presa Torreoncillos del Municipio de Villa Matamoros, Chihuahua.

—Bridan Gabriel “N”, de un año y 7 meses de edad murió a consecuencia de las heridas que sufrió afuera de un centro comercial, en la ciudad de Nuevo Laredo.

Menos Días Aquí y sus voluntarios iniciaron la labor el 12 de septiembre de 2010 y casi dos años después han contado

más de 27 mil muertes por violencia en México. Si hiciéramos un cálculo del tiempo invertido en esta tarea habría que pensar que cada persona destina alrededor de 21 horas semanales para realizar la búsqueda en varios periódicos estado por estado.

El lunes que llegó mi turno sentí vértigo ante este duelo participativo y social. Conté los cadáveres de personas embolsadas, descuartizadas, torturadas, acribilladas, cuerpos en estado de putrefacción, personas y osamentas encontradas en fosas clandestinas en varios estados, decapitados, gente asesinada después de un secuestro y varios muertos por granadas. No era consciente de todas las personas que cada semana pierden la vida ante el poder de las esquirlas.

Un día tras otro es el mismo derramar de sangre, pero hay algunos instantes peores como el 24 de marzo, cuando la voluntaria Ana Gabriela Jiménez contó el cuerpo de una bebita de 18 meses, a quien le mutilaron las manos.

SEGURIDAD CIUDADANA

El país se desintegra, pero hay gente “trabajando por sueños, viviendo realidades”. De eso sabe mucho @MrCruzStar, que pasa sus días bien plantado en el suelo de Tamaulipas. Sus casi 5 mil seguidores (personas que monitorean sus mensajes en tuitter) lo conocen como Chuy.

En 2009 cuando entró al mundo del tuitter mostraba su nombre y rostro en su avatar (imagen para reconocer a cada usuario), pero un año más tarde, cuando todo en el estado se volvió plomazos a diestra y siniestra, prefirió guardar el anonimato.

Era el tiempo cuando la gente podía coleccionar los casquillos de diferentes calibres regados por las calles después de los enfrentamientos entre el cártel del Golfo y Los Zetas. Era el tiempo en el que las autoridades hablaban de un estado en paz, mientras que los reportes en las redes sociales eran descalificados como parte de una “sicosis social”.

@MrCruzStar es uno de los miembros de la resistencia cibernética y ha emitido cerca de 78 mil tuits (mensajes de 140 caracteres). Dedicó buena parte de su tiempo a activar alertas de seguridad a través de su cuenta.

Los ciudadanos confían en él. Saben que un aviso de balacera, enfrentamiento o disturbio emitido desde su *timeline* (línea de tiempo donde se leen los mensajes) está verificado.

También incluye reportes de la situación en las carreteras porque tiene contactos con los camioneros y una red de 28 usuarios que a través de alertas de blackberry monitorean diferentes sectores de Reynosa.

La escena se da más o menos así.

La gente antes de salir del trabajo, de la escuela o de su casa chequea los reportes que tuiteros como @MrCruzStar publican para identificar las zonas de tránsito seguras.

—RT @CSIREYNOSA Precaución gente en las áreas de Jarachina sur y sus alrededores balacera en curso por varias áreas #reynosafollow #reynosaSDR.

—@MrCruzStar reporte granadazo en agencia Chevrolet en #Matamoros 21:20 #Tamaulipas.

—@MrCruzStar Camioneta aztek en sentido contrario calle Porfirio Díaz esquina ferrocarril, la abandonan y se meten a cuartería 10:45 #Reynosafollow.

“Hay mucha gente a la que le da miedo tuitear los reportes y me comparten la información por mensajes directos, llamadas telefónicas o por correo. Hay funcionarios, empleados del municipio, gente que no puede hacer nada de manera oficial, pero que tienen ganas de ayudar, entonces me pasan los reportes y yo los publico. Lo hago por protegernos como ciudadanos. Tengo familia y no quiero que les pase nada y estos reportes seguro que han salvado vidas”, dice vía skype.

El joven, nacido en una familia de comerciantes de la Ciudad de México y ahora dueño de una tienda en Reynosa, lleva una bitácora de guerra. En el blog <http://chuynews.blogspot.mx> sube el registro de las alertas que emite y nutre de información el sitio. Así documenta lo sucedido en las zonas más conflictivas.

@MrCruzStar no es el único en dar alertas de seguridad, existen otros ciudadanos como @yehuai81 que desde Ciudad Madero informa. Él es un joven de 30 años que se dedica a las ventas y anda por la ciudad montado en una motocicleta.

“Tengo como una de las reglas nunca dar información acerca de la ubicación de las fuerzas armadas y emitir sólo las alertas que estén validadas. Tengo la facilidad de moverme en mi moto y chequear la situación. Me sé la ciudad como si fuera una Guía Roji y les puedo decir a los ciudadanos qué rutas alternativas tomar”.

@yehuai81 ya recibió amenazas por su labor, le dijeron que es un soplón, un halcón. Él no se amedrenta, pero debe tener cuidado. Ya en septiembre del 2011 en Tamaulipas asesinaron a una tuitera conocida en las redes sociales como la NenaDLaredo.

La periodista Elizabeth Macías Castro era la moderadora y administradora del sitio de noticias independiente www.nuevolaredoenvivo.es.tl que tenía más de 400 mil visitantes. Ahí se hacía cargo de los chats con denuncias contra grupos del narcotráfico. Además de la página tenía una cuenta en tuitter, donde también se hacían denuncias anónimas.

El viernes 25 de septiembre al salir de la redacción del periódico Primera Hora, donde trabajaba, la periodista desapareció. Este diario es propiedad del alcalde de Nuevo Laredo, Benjamín Galván Gómez.

Entre los últimos tuits que emitió en la página de internet Nuevo Laredo En Vivo se leía un festejo por la “cacería” de zetas:

—Cacería de ratzzz si ven a donde korren esos DENÚNCIELOS xfa!!

Desde la cuenta en tuitter @nuevolaredovivo se escribió:

—#nuevolaredo Precaución en col Oradel y Campanario cacería de lacras en esas colonias se reportan detonaciones a las 9:50 am.

—#nuevolaredo REDADA DE LA POLICIA FEDERAL CORRETEANDO FALSOS TRAMITADORES POR PUENTE II, YA ERA HORA..11 PM.

El cuerpo de la NenaDLaredo apareció con un mensaje: “Aquí estoy por mis reportes y los suyos”. Para algunos se equivocó al tomar partido, para otros era una heroína.

En Monterrey, el jueves 25 de agosto de 2011, estas redes de cibernautas demostraron su utilidad ante la emergencia. Esa tarde el país estaba de luto por la muerte de 52 personas, entre ellos dos mujeres embarazadas, víctimas del incendio provocado por un comando de zetas al Casino

Royale. Ana Rent, una popular tuitera que difunde alertas de seguridad, estaba ahí celebrando el cumpleaños de una de sus amigas.

—@AnaRent: (...) ya en mi casa, sólo golpes y la horrible experiencia vivida en el Casino Royale; fue un ataque TERRORISTA.

Muchas personas buscaron a sus familiares a través de todos los medios, incluyendo tuitter, se apoyaron en #mtyfollow, el hashtag (etiqueta temática) donde los regios se comparten información de situaciones de riesgo.

—@Edward_Black: Aún nada de noticias sobre José Jaime Fuentes Oviedo. Por favor pasen este tweet. @AnaRent gracias de antemano. #mtyfollow #CasinoRoyale :/

—@AnaRent: identificamos a Rubén Morales Castillo, sí falleció, el viernes lo velaremos, tenía 19 años y era su primer día en ese trabajo.

—@anaostrich: Jenny Alejandra García Toledano estaba en el Casino Royale hoy por favor si alguien sabe algo avise!!!! RT por favor!! @AnaRent @DesdeLaRisca.

A sus 23 años AnaRent tiene más de 23 mil seguidores y ha emitido casi 35 mil tuits. La gente la reconoce en la calle, le agradece su labor, a veces le invita la cuenta o hasta le pide retratarse con ella. “Confían en mí porque tengo una red de contactos entre periodistas, bomberos, políticos, paramédicos que me dan información que ellos no pueden difundir”, explica vía skype.

Ana Rent no ha salido ilesa de toda esta labor que realiza al informar de la violencia. Por el estrés no podía extender ni mantener las piernas quietas, tenía fuertes dolores de cabeza, vómitos y había perdido parcialmente la vista.

Ahora, ya recuperada, continúa su trabajo voluntario desde las redes sociales, convencida de que no quiere ser “desertora de la esperanza”.

GOLPES A LA RESISTENCIA

Maruchi tiene miedo. Cuando intentas hablar con ella sobre los 27 días que pasó en la cárcel acusada de ciberterrorismo, se pone nerviosa. Está segura de que la espían a través de su teléfono, sus mensajes de correo y las pláticas en el chat.

A María de Jesús Bravo Pagoda, conocida como Maruchi, y a Gilberto Martínez Vera, el gobierno de Veracruz los acusó de terrorismo y sabotaje por difundir en facebook y tuitar información falsa de un ataque de grupos del crimen organizado a escuelas.

Los medios de comunicación refieren que Maruchi escribió en su muro: “Por favor vayan por sus hijos. Sedena sugiere y ordena el desalojo de las escuelas”.

No era la primera vez que prevenía a sus amigos en facebook sobre alguna situación de riesgo ante la inseguridad del estado.

Maruchi comenzó a usar las redes sociales por diversión, pero después se dio cuenta que frente a la violencia generada por el narcotráfico, podían ser un instrumento de protección ciudadana muy poderoso. Aunque presume como ciertos la mayoría de sus reportes, acepta que algunos carecían de sustento. Esto abonó al debate nacional sobre la poca maduración de las herramientas virtuales como instrumentos de información veraz.

En ese momento el gobierno estaba sumido en el silencio, aparentando una supuesta paz, los medios no informaban de la violencia y los ciudadanos sólo tenían a su alcance las herramientas virtuales para enterarse de lo que sucedía.

Cierto es que en esa vorágine de las redes sociales, la información no estaba verificada y algunos falsos rumores se esparcían sin medir las consecuencias. Además de que el crimen organizado utilizaba la red como herramienta de propaganda para difundir videos con sus ajustes de cuentas y acciones violentas.

La noche del jueves 25 de agosto de 2011, en las noticias Maruchi escuchó al Procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Escobar, acusar a algunos “intelectuales” de provocar el caos social. Desde la versión oficial y de los medios de comunicación, los tuits generaron sicosis, los padres corrieron atemorizados por sus hijos a las escuelas y aumentaron los accidentes automovilísticos. El funcionario amenazó con encarcelarlos.

“Al día siguiente mi hija me llamó para decirme que habían ido unos hombres a su casa, para que saliera le quitaron el medidor de la luz, luego la abofetearon y le pidieron que me dijera que si no me callaba la matarían. Su hijo de seis años quiso defenderla, lo aventaron contra la pared y se golpeó la cabeza”.

Maruchi posteo en su facebook lo sucedido y anunció que no publicaría más. Salió a la calle buscando tranquilizarse y ahí la aprehendieron unos hombres vestidos de civil.

Más o menos al mismo tiempo en que Maruchi publicó sobre el supuesto desalojo de escuelas, Gilberto Martínez Vera, un profesor de matemáticas de 49 años, difundió el

presunto secuestro de alumnos, luego de que su cuñada le hizo el comentario por teléfono.

“...Confirmando en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron 5 niños, grupo armado, psicosis total en la zona”, tuiteó desde su cuenta @gilius_22, quien en ese momento tenía sólo 314 seguidores y había enviado 634 tuits.

Él dice que el mensaje enviado alrededor de las 11:15 de la mañana fue modificado, pues nunca dio por confirmado el hecho, ni habló de la sicosis general.

El día de su detención, hombres vestidos de civil llegaron hasta donde impartía clases para aprehenderlo. Viajaban a bordo de tres camionetas y se lo llevaron sin explicación.

“Yo pensé que era un levantón, sólo compararon mi cara con la de una foto que traían y me llevaron de Boca del Río a Xalapa. Me interrogaron por casi 12 horas”. Durante ese tiempo el profesor sufrió intimidaciones por parte de Remigio Ortiz, titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para firmar un documento cuyo contenido no pudo conocer.

Hasta ocho horas después de su detención a Gilberto le dejaron hacer una llamada para avisar dónde se encontraba. Su madre ya lo había visto en la televisión, pues las autoridades dieron a conocer la noticia de la captura de los tuiteros.

Gilberto y Maruchi permanecieron presos casi un mes, con la amenaza de ser condenados a 30 años de cárcel acusados de terrorismo.

Por presiones sociales y políticas, el priista Javier Duarte anunció vía tuitos que su gobierno desistía de presentar los cargos de terrorismo, pero a cambio el Congreso del estado aprobó una nueva figura delictiva que penaliza con uno a

cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario a quien incurra en el delito de “perturbación del orden público”, que incluye la difusión de rumores por redes sociales. La legislación fue bautizada como Ley Duarte.

Desde el ciberespacio, los ciudadanos reaccionaron al intento de represión:

—@el_greco: #SabesQueElGobiernoMienteCuando no quieren que te enteres de las #balaceras #levantones y #narco y hacen la #LeyJavierDuarte / #verfollow.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esa normativa atenta contra la libertad de expresión y criminaliza el uso de las herramientas virtuales. La ley hasta ahora sigue vigente.

El 21 de septiembre Maruchi y Gilberto fueron liberados. Maruchi se dejó abrazar por su hijo, el exdelantero de los Tiburones Rojos.

A Gilberto lo esperaba su madre afuera de la prisión. Ahora está completamente recuperado, pues como producto del estrés de la detención sufrió una parálisis facial.

Ese día el trinar de tuitos se hizo presente con los mensajes de usuarios alertando sobre el abandono de dos camionetas con 35 cadáveres en la vía pública.

“Eviten Plaza de las Américas”. “Hay hombres armados”. “No son soldados o marinos, sus caras están cubiertas”, informaban antes de que los policías o los periodistas llegaran al lugar, cerca de la sede del Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia, que se inauguraría minutos después.

—@elvergon70707: @Javier_Duarte ESTOS NO SON “RUMORES” DE TWITTEROS”TERRORISTAS” 35

CADÁVERES EN PUENTE VIAL EN VERACRUZ :-(
#verfollow.

—@omondra: Dicen que @Javier_Duarte va a demandar a los cadáveres de Plaza las Américas por perturbar el orden público.

EN LOS ZAPATOS DE LAS VÍCTIMAS

La noche en que conocí a tres de los integrantes de la comisión de redes sociales de El Grito Más Fuerte entendí el por qué de la fuerza de la campaña #enloszapatosdelotro. La actriz Sophie Alexander, la productora de cine Karla Bukantz y el académico Jorge Linares desbordan energía.

Las ideas les fluyen y hasta pareciera que dieron un nuevo sentido a sus vidas a través de El Grito Más Fuerte.

Como colectivo están preocupados por la violencia. Según sus cálculos si guardáramos un minuto de silencio por cada muerto de esta guerra estaríamos 41 días sin palabras.

Silencio. Silencio. Silencio.

Pero ellos están aquí dispuestos a gritar para hacer conciencia de que los cuerpos de todos los asesinados pueden llenar el Foro Sol en la Ciudad de México.

A los 250 artistas, cineastas, fotógrafos y productores que forman el colectivo vinculado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, se les acabó la apatía y quieren terminar con la guerra.

Ahora son gritones.

La primera idea para organizarse la tuvieron los actores Ilse Salas y Daniel Giménez Cacho. Convocaron a otros con

la propuesta de hacer una campaña para que la gente conociera los testimonios de las víctimas documentados por el colectivo EmergenciaMX.

Entonces no imaginaban el nombre de la agrupación ni que su éxito se lograría gracias a las redes sociales, y no a la televisión, como lo supusieron.

Empezaron las juntas eternas, una persona sumó a la otra hasta que dos meses después llegó el día de grabar los dolores de las víctimas en voz de famosos como Diego Luna, Demián Bichir, Ofelia Medina, Héctor Bonilla, Ely Guerra, Tiaré Scanda.

“Se trata de entender, no de representar”, dice Sophie, quien además de ser una de las responsables de redes sociales, participó en la campaña. “Los actores entraron en una verdadera sensación de empatía. Cuando salí del foro sentía como si hubiera salido de un velatorio a donde fuiste a dar tu apoyo a un amigo”.

Los actores prestaron su voz a las víctimas, mientras en el foro los familiares observaban la grabación con las fotos de sus seres queridos entre las manos.

En los anuncios se escuchaban testimonios como éste:

—Mi nombre es Melchor Flores, soy del Estado de México. Mi hijo es Melchor Flores Hernández, mejor conocido como el Vaquero Galáctico, es artista performer. El 25 de febrero de 2009 fue secuestrado por la policía regia, por las patrullas 534, 538 y 540. Levanté la denuncia y nunca me han hecho caso, pero yo sigo aquí buscando justicia.

Durante los días de grabación, asesinaron a Nepomuceno Moreno, uno de los activistas del Movimiento por la Paz que pedía justicia por la detención ilegal y desaparición de su hijo.

Aún así siguieron y el spot, que ya tiene miles de visitas en youtube, concluía:

—A mí se me quita el miedo cuando caminamos todos juntos, se siente fuerza. Yo lucho porque lo que me pasó a mí no te pase a ti nunca. Yo sueño por un lugar en donde puedan crecer nuestros hijos. Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos. Los necesitamos. Escuchen, véanos, paremos esta guerra.

Después del 30 de enero de 2012, cuando fue la presentación de la campaña en el Teatro de la Ciudad, se quedaron asombrados por la respuesta de la gente a pesar de que ni Televisa ni TV Azteca accedieron a pautar en su programación la campaña.

Con el apoyo de tuiteros y defensores de derechos humanos como Jesús @roblesmaloof y Daniel Gershenson @alconsumidor la campaña en las redes sociales se hizo viral.

“Los correos electrónicos del movimiento se saturaban, había muchas reacciones en facebook y muchas menciones en tuitter”, dice Sophie mientras da un sorbo a su café.

Tenían que organizarse pronto para atender a todos esos ciudadanos que ayudan a encontrar personas desaparecidas; compartían su desolación por el duelo de algún familiar; manifestaban sus ganas de ayudar a frenar la violencia e, incluso, los cuestionaban.

—¿Ya me puse en #enloszapatosdelotro y ahora qué?, leían en algunos mensajes.

“Yo sentía angustia. Había muchos gritos desesperados en las redes sociales”, confiesa Sophie al recordar la experiencia.

Entonces se dedicaron a vincular a las personas que tenían la inquietud de hacer proyectos en los estados, pu-

sieron en contacto a víctimas con personas que podían ayudarlos, como un colectivo de psicólogos voluntarios que ayudan a la gente a sobrellevar su duelo.

“Encontramos que ahora somos más los que queremos hacer algo, los que tenemos ímpetu revolucionario, pero no sabemos cómo encontrarnos”, dice Karla.

NACE UN CONTINGENTE

Era la noche del 30 de enero de 2010. Al menos 20 gatilleros entraron disparando a una fiesta de cumpleaños en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, y asesinaron a 15 estudiantes.

Después, disparos de 140 caracteres fueron permeando el ciberespacio. Los tuiteros en la Ciudad de México se organizaron, decidieron salir de sus casas, dirigirse al Ángel de la Independencia, llevar las imágenes de los jóvenes asesinados y cubrir la escalinata del monumento con veladoras. Cada hora de la vigilia estaba dedicada a uno de estos estudiantes masacrados a casi dos mil kilómetros de distancia.

La indignación comenzó a propagarse en las cuentas de @rsnunez, @PPmerino y @roblesmaloof y pronto se sumaron muchos más para llevar las consignas de tuitter a la calle y ser parte de la vigilia para honrar la memoria de los 15 jóvenes.

“@AramBarra: Le prendí una vela a Edgar Martín Díaz Macías que tenía, hace 15 días, mi edad. #15x15”, se leía en uno de los miles de tuits.

Desde, Japón, donde se encontraba de gira, el presidente Felipe Calderón declaró que los jóvenes masacrados eran integrantes de pandillas, aunque después reconoció su inocencia.

—@danycruyff: #15x15 Ni en Juárez ni en ningún lugar del mundo, el miedo y la violencia no pueden seguir avanzando, alza la voz y se hará la luz.

—@dios_padre Dios: Dejemos la ironía un rato y apoyemos la #vigiliaporJuarez y #15x15 para que esta ciudad deje de ser el Infierno en la tierra.

Como se narra en el libro Ciudadanos.mx, desde Oaxaca, la abogada Karina Cortés @karina750901, deseó unirse a la protesta y cambió su avatar por una veladora. Pidió que otros hicieran lo mismo y en poco tiempo un gran número de tuiters formaron parte de una manifestación visual y solidaria con los parientes de las víctimas.

“Queríamos que los familiares se sintieran acompañados en su dolor. También sirvió para pasar del tuitter a la calle, seguir construyendo ciudadanía y obligar a los medios convencionales a hablar de la masacre”, recuerda @alconsumidor.

Entonces parecía que algo poderoso estaba trinando allá arriba.

Los tuitter-activistas Daniel Gershenson y Robles Maloof son optimistas, aunque saben que tuitter sigue siendo el espacio de una minoría motivada e informada, pero minoría.

Han empleado su poder de convocatoria en esta red cibernética para intentar derribar el obstáculo físico para la organización social. Imaginan la red como caja de resonancia para expresar el descontento. La ven como un medio de comunicación alternativo, útil para hacer activismo en línea y una vía de presión colectiva.

Hoy se hacen llamar @contingentemx, un grupo compuestos por núcleos con vida propia en Monterrey, Guadalajara,

Reynosa, Ciudad Victoria, Saltillo, Guaymas, Hermosillo, Veracruz, Nayarit, Puebla y Seattle.

“Formamos un colectivo, aprovechando las nuevas tecnologías, con la idea de que en el actual contexto de violencia, la información debe aportar a los ciudadanos herramientas para entender lo que pasa, sobre todo ante los peligros que afronta el periodismo tradicional”, cuenta Robles Maloof.

Como contingente han realizado acciones para exigir la protección a defensores de derechos humanos; demandar justicia por el incendio de la guardería ABC donde murieron 49 niños y por el asesinato de la activista Marisela Escobedo, quien persiguió al homicida de su hija Rubí y exhibió la incapacidad gubernamental para hacerlo. También han tejido solidaridad con movimientos como Los Queremos Vivos, que alzó la voz por agresiones a periodistas, y La Caravana del Consuelo, que cruzó el norte del país para encontrarse con los familiares de las víctimas de la guerra.

El contingente es seguido por más de 5 mil personas, quienes trabajan, como dicen, para formar ciudadanía e intentar un cambio en este país.

NO HABRÁ RENDICIÓN

En la vida hay momentos que sacuden y te encuentras bajo dos opciones: o te quedas mirando el derrumbe o asumes hacer algo por cambiarlo. A la catalana Lolita Bosch esa disyuntiva le llegó un mes de agosto cuando estaba en Es-

pañá y supo que en México unos criminales secuestraron a 72 migrantes de Centro y Sudamérica, intentaron extorsionarlos, reclutarlos y al no lograrlo, les dispararon por la espalda. Sus cuerpos fueron apilados en una bodega abandonada, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Lolita —novelista y filósofa—, abrió su correo electrónico y mandó un mensaje a los amigos y conocidos que hizo cuando vivió y se enamoró de México.

—¿Cuántos somos y qué podemos hacer? —preguntó convencida de que lo ocurrido debía resolverse desde diferentes puntos de vista.

Encontró mucha gente deseosa de sacudirse la perplejidad y reflexionar sobre la guerra contra el narco a través de la escritura.

Lolita les pidió que unieran sus plumas, donaran su tiempo y construyeran juntos un blog, que con el paso del tiempo creció y mutó en portal. A todo este esfuerzo le dieron el nombre de Nuestra Aparente Rendición pensando en la falta de un medio de reconstrucción, desahogo, memoria, refugio, lucha y reflejo de indignación.

De a poco y con mucho esfuerzo, comenzaron a publicar artículos, crónicas, ficción, poemas, entrevistas, ensayos, testimonios y colaboraciones.

El portal funciona con la solidaridad de 20 voluntarios permanentes que dan mantenimiento al sitio, editan textos, coordinan proyectos, hablan por y con las víctimas, trabajan por los derechos humanos. Y otros tantos ciudadanos que aportan su trabajo y su tiempo como parte de las acciones del sitio.

“El costo principal para sostener NAR es la inversión en tiempo y alma, cada quien se organiza para abrir espacio para el proyecto”, dice Cordelia Rizzo, una de las colaboradoras del portal.

“Lo que hacemos con este esfuerzo es como mandar mensajes en botellas a través de la red, siempre pensando en qué es lo más urgente que le sucede al país. Y estoy convencida de que lo que hacemos genera esperanza”.

Su trabajo ha dado resultados:

Realizaron, a través de textos, un mapa de la violencia en el continente, trataron de evitar el cierre del albergue para mujeres de la periodista Lydia Cacho; lanzaron un nuevo proyecto donde la gente cuenta sus pesadillas de guerra y convocaron a protestas en varios países europeos con un llamado a detener la sangre que corre en México.

También, inspirados en la colombiana Radio Caracol que manda mensajes a los secuestrados, abrieron un espacio a través de cartas para dar voz a los familiares, amigos y colegas de personas desaparecidas.

Ya Lourdes le escribió a su hijo Kristian Karim Flores Huerta. El joven desapareció el 12 de agosto de 2010 cuando salió a trabajar de Villa Juárez, Nuevo León, rumbo a Piedras Negras, Coahuila, en una camioneta nissan, con caja refrigerada, color blanca. Aquí un fragmento de las palabras de su madre:

“¡Escuchen todos mi lamento!, esto es para que no juzguen sin saber, nos robaron a nuestros hijos y no sabemos cómo hacer, sólo le pido a Dios que ninguno de ustedes pase por este sufrimiento que día a día nos está consumiendo por no saber nada de ellos, Kristian, ayúdame a encontrarte, agárrate de la mano de Dios, y pide que a todas las madres que estamos pasando por este dolor a nuestros hijos nos regresen hoy”.

Y EL EQUIPO DE NAR NO PARA

Recientemente lanzaron una convocatoria para que 126 escritores voluntarios cuenten la historia de 126 periodistas y trabajadores de los medios asesinados en México, a consecuencia de su trabajo o de la violencia en el país.

Sueñan con que este esfuerzo, organizado desde el ciberespacio, se convierta en un libro al que llamarán “No se mata la verdad matando periodistas”. Para eso hacen una colecta virtual a fin de conseguir el dinero para que el libro nazca antes de finalizar el año.

No es su primera publicación. Lograron traspasar el mundo de la resistencia virtual y editaron el libro Nuestra Aparente Rendición cuyas ganancias fueron dedicadas a impulsar Becas por la Paz en beneficio de huérfanos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Incluso el blog fue reconocido por la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, como un proyecto que busca entender la violencia generada por el crimen organizado.

Hoy, Nuestra Aparente Rendición es una asociación civil constituida legalmente en Cataluña, que funciona con el esfuerzo de diversos profesionistas en México, España y los Estados Unidos y la ayuda constante de otros voluntarios.

Desde NAR, Lolita impulsa que semana a semana un ciudadano cuente los muertos de esta guerra a través de Menos Días Aquí. El conteo sigue y urge encontrar voluntarios para llevar al blog el registro de los muertos de la guerra. Quieren que en algún momento se pueda exigir justicia por cada una de esas personas asesinadas, sin importar quiénes eran o qué hacían.

Lolita promete no parar pese a la merma económica que NAR ha representado en su vida, al desgaste emocional y los altibajos propios de todo proyecto. Sigue motivada y creyendo que “los ciudadanos no hemos perdido, sino que apenas estamos empezando a defendernos”.

Por eso bautizó a este diálogo colectivo y virtual como Nuestra Aparente Rendición. Para gritarles a quienes nos creen rendidos que no lo estamos, porque una resistencia civil emerge a través del pensamiento.

Repaso estas acciones emprendidas desde las redes sociales y pienso:

Hoy, para la resistencia cibernética, es tiempo de transgredir, luchar, crear conciencia de que no merecemos esta violencia y, a través de la memoria, devolver la dignidad que esta guerra intentó arrancarle al país.

Somos responsables de alzar la voz para que juntos logremos que nunca, entre los muertos, uno de los voluntarios cuente ni a mis padres ni a tus hermanos. Nunca.

EL BARRIO BAJO ACECHO

Lydiette Carrión

Lydiette Carrión es periodista independiente. Actualmente es columnista en El Gráfico de El Universal, y tiene a su cargo una sección semanal con historias sobre violencia contra las mujeres. Ha colaborado en las revistas Milenio Semanal, Día Siete, Replicante, Newsweek en Español, Newsweek Argentina, Defensor, Generación y Bitácora. También ha trabajado en Milenio Diario, el extinto Centro y la revista Asamblea de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Escritores de la SOGEM, a la que ha regresado para impartir clases de periodismo narrativo. Participó en los libros colectivos 72 migrantes y Memorial de Chiapas: pedacitos de historia.

En 2011, funcionarios municipales recorrieron las calles del norte de Monterrey. Buscaban pandilleros para realizar trabajo social: organizar concursos de grafiti y torneos deportivos, facilitarles el acceso a programas sociales. Fueron a las esquinas, las canchas. Sólo encontraron a unos cuantos muchachos que jugaban de forma esporádica una cascarita de futbol o se tomaban un refresco en la tienda de la esquina antes de encerrarse en sus casas.

Querían hacer trabajo social con pandillas, pero los jóvenes desperdigados les dijeron que las pandillas ya no existían; sólo había una sola: el cártel de los Zetas.

Habían llegado demasiado tarde.

El origen de esta historia está enterrado.

El catalizador más visible ocurrió cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en

los últimos días de 2006, y el Ejército y la policía federal comenzaron a peinar el país buscando criminales. Las calles se llenaron de retenes, y los militares comenzaron a esculcar civiles y a realizar labores de policía. En junio de 2007 esta guerra llegó a Monterrey con más de mil federales y militares. Desde entonces, han muerto muchos hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, civiles y miembros del narco. Estos últimos necesitaron más soldados y pusieron la mira en otro ejército: el de los jóvenes desocupados, en riesgo, el de los pandilleros de barrio.

Ellos son la carne de cañón. Organizaciones sociales calculan que al menos mil 300 menores de edad —niños y adolescentes— han sido asesinados durante la administración calderonista. Los jóvenes conforman la mayoría de los 60 mil asesinados por la guerra contra el narcotráfico, en todo México, así como en Monterrey.

La guerra contra el narco quizá fue el catalizador, pero no el origen de este relato de niños sicarios y juvenicidios endémicos. Éste quizá ocurrió décadas atrás, cuando “expertos” decían que se avecinaba un bono “demográfico”, es decir, que México tendría el mayor porcentaje de personas productivas de su historia, y que si “esto se aprovechaba”, sería un gran empuje para el país; pero que si no se preparaba el escenario para darles trabajo y educación, “el excedente no sólo sería desperdiciado, sino que se volvería un problema”.

Es difícil establecer el inicio de la historia. Pero para 2009, en Monterrey, la norteña potencia empresarial del país, muchos de los jóvenes que antes pasaban las noches escuchando música, ensayando ritmos musicales o se expresaban a través

del grafiti, la ropa, el lenguaje, los tatuajes y el peinado, ya eran la mano de obra del narco.

Y comenzaron las demostraciones de poder.

Los llamaron los tapados. En 2009, mujeres, jóvenes y niños bloquearon las principales calles de la ciudad. Exigían que el Ejército volviera a los cuarteles. Algunos fueron detenidos e interrogados. Dijeron que los Zetas les habían pagado 500 pesos por manifestarse.

No ha sido la única vez.

En junio de 2010 fue detenido Héctor Raúl Luna Luna “El Tory”, líder zeta de la plaza a los 28 años, veterano para el promedio de edad de los narcotraficantes. Al ser apresado, mandó a decenas de jóvenes para que, a punta de pistola, detuvieran y despojara de sus carros a los automovilistas en 28 calles de la ciudad. Con los autos secuestrados, bloquearon el tránsito por horas.

También hay adolescentes y niños. El 25 de agosto de 2011, a las 3:30 de la tarde, un comando prendió fuego a la casa de apuestas Casino Royale, en cuyo interior se entretenían con máquinas tragamonedas y el azar, mujeres, amas de casa y jubilados. Murieron quemadas y asfixiadas 52 personas. La sociedad se conmocionó por partida doble: la primera, cuando se informó sobre el crimen; la segunda, cuando se reveló que los responsables eran menores de edad —tres eran mujeres—, comandados por un joven de 18 años.

Unos pesos y algo de droga bastaron para engancharse.

Muchos trabajan como halcones: espían los movimientos de las autoridades, de sus propios vecinos, para los cárteles. Otros más se convirtieron en mandaderos o trabajan en narcomaquilas, empacando droga. Conforme suben

el escalafón, reciben más dinero, más droga, un arma. Más responsabilidad y peligro. Para entonces ya saben matar y torturar.

Algunos jóvenes no son seducidos por el cártel, sino secuestrados, levantados, para ser esclavos.

Monterrey y su zona metropolitana es una de las urbes más importantes del país. Enclavada entre montañas, siempre brilla: de día resplandece con el polvo del desierto, de noche se engalana con luz eléctrica. Con poco más de 4 millones de personas es uno de los centros industriales, académicos y económicos más poderosos del país. Es la Sultana del Norte. Uno de sus municipios conurbados, San Pedro Garza García, es considerado el más rico de América Latina. Aquí es raro ver esa pobreza escandalosa del sureste mexicano.

Sin embargo las pandillas dejaban entrever otra realidad. Años atrás se crearon programas municipales para desarticularlas aunque algunos expertos alertaban que hacerlo sería contraproducente, se acabaría con el sentido de pertenencia y la solidaridad entre los jóvenes. Para 2011, cuando los funcionarios municipales salieron a las colonias del norte a buscarlas, la discusión era estéril: las pandillas ya habían enterrado a sus integrantes, se habían disuelto o sus miembros estaban escondidos.

Escucho la misma historia en la colonia Independencia, en voz de dos adolescentes de 14 y 15 años; en Nueva Esperanza, Escobedo, la relata un joven de 20 años; en Tres Caminos, Guadalupe, la confirma un expandillero de 16; en la Garza Nieto lo dicen menores de edad que, sin embargo, conservan el nombre de su clika; en la colonia 10 de marzo, un chico de 17 asegura que aunque ya no es pan-

dillero los dos bandos lo asedian: los Zetas lo han tableado —golpiza en las nalgas con una tabla— para que trabaje con ellos; el Ejército lo ha levantado para interrogarlo a la mala.

* * *

He venido a Monterrey a buscar individuos y colectivos que intenten alejar a los jóvenes del reclutamiento forzoso y de la marginación que los invita a sumarse al crimen organizado. He hallado muchos proyectos que buscan ayudar a los adolescentes, a los pandilleros, a los jóvenes en riesgo. Unos son más grandes; otros mejores. Unos lo intentan a través del baile, la religión, la expresión artística o el deporte. He encontrado decenas de personas que arriesgan la vida en ese trabajo. Hay héroes, sin duda. Pero el problema es tan vasto, el daño es tan grande, que todo intento parece ser rebasado.

LA PATRIA DE MOU

A los 27 años, Mou ya había viajado por México, componiendo rap que hablaba de soledad y amores truncados. “Me vi vagabundo y entuerto/ empené al corazón para pagar lo que no se vende/ para ausentarme del mundo/ a un rumbo donde me encomienden”. Era reconocido en otros barrios, pero en el suyo caminaba como otro desechable más.

A mediados de 2011 la organización civil CreeSer abrió un módulo en la colonia Fomerrey 110 para impulsar varios proyectos, entre ellos PazArte, dirigido a dar alternativas a los jóvenes. Mou fue el primero que se acercó. Les

propuso armar un taller de rap. Días después llevó a sus amigos interesados en enseñar breakdance y grafiti.

En la mayoría de las colonias de Monterrey se escucha el vallenato, la cumbia colombiana, nostalgia por un país lejano y caribeño. Pero también se mira al norte por las innumerables migraciones que van y vienen de Estados Unidos. De ahí adoptan el rap, una holgada forma de vestir, algunos colores en la ropa. En la Fomerrey 110, al norte de la ciudad, prevalece el rap.

Creada por los programas sociales de vivienda, las Fomerrey (entre ellas, la 110) se parecen a cualquier colonia popular del país: mucho concreto, un paisaje gris a la altura de los ojos. A lo lejos, las montañas.

Anochece. Es febrero y en CreeSer tienen el tiempo contado. Nadie se queda después de las nueve. Los vecinos, que acostumbraban convivir hasta tarde, ya no lo hacen. Se ha vuelto peligroso. Pero Roberto Martínez, líder del proyecto PazArte, y los chavos están afinando los últimos detalles y sólo tienen las noches para trabajar. En unos días comenzarán los talleres. Llevan meses planeándolos. Mou, Fred, Jap y otros han montado exhibiciones en las plazas y el Conalep de la zona, para animar a otros a aprender una técnica y una forma de expresarse sin violencia.

Mou saca unas sillas y nos sentamos frente a la puerta del cubículo. Miramos cómo se oscurecen las calles. Él se fuma un cigarro. Es delgado. Moreno. Lleva el pelo cortísimo, casi rapado.

Le pregunto si a él lo han hostigado los narcos o el ejército. Sus respuestas son casi inaudibles. Un tímido sí. Mira hacia otro lado. Cambio de tema.

—¿Qué es lo que quieren los jóvenes?

—Espacios. Todos queremos espacios. Un espacio don-

de... no te miento, nos da miedo salir porque siempre anda esa raza por aquí, de los que estamos hablando. O te levantan éstos o te llevan los otros—. No los menciona, pero se refiere al narco y a los militares. Aunque la mayoría de los vecinos son trabajadores, no se han salvado de ser confundidos con delincuentes por el hecho de vivir ahí.

La depredación de sitios de recreación en los barrios populares es endémica. Un ejemplo es la privatización de las canchas de fútbol del lecho del río Santa Catarina, cerca del centro de la ciudad, a las que asistían los vecinos de la centenaria colonia Independencia, actualmente considerada un bastión de los Zetas.

En 2003, las autoridades decidieron dar el terreno en comodato a la empresa Siglo XXI, de TV Azteca, para que construyera canchas de pasto sintético, un mini golf y cobrara a los usuarios. Dejaron unos cuantos terrenos abandonados en la periferia. La gente se sintió insultada. En 2010, el huracán Alex arrasó con todo.

Con la emergencia de la inseguridad en la ciudad, algunos funcionarios emprendieron el proyecto social más ambicioso de las últimas décadas, y en septiembre de 2011, en la Independencia —crisol de las culturas del norte y uno de los primeros lugares a los que llegó para quedarse la música colombiana— se inauguró el macrocentro comunitario: enormes instalaciones, con canchas, talleres culturales, capacitación para el trabajo, bachillerato en línea.

El macrocentro fue inaugurado en septiembre de 2011 con una inversión de 200 millones de pesos. Encaramado en el cerro, parece un mirador de lujo.

Pero las autoridades dan y quitan.

Por el barrio de Mou existía el gimnasio popular Los Campeones. Las mujeres iban a bailoterapia; los hombres, al box. El Ejército cerró el lugar en 2011 para utilizarlo como cuartel. Cerca de ahí, a inicios de 2012, la administración inauguró unas canchas. Hay colonias cuyos escasos espacios comunes juegan constantes volados con las políticas públicas.

Mou está por terminar su cigarro. Le pregunto por qué quiere dar un taller de hip hop.

—Por la música. Y para que, cuando los chavos tengan mi edad, no estén como yo.

Mou dejó la secundaria trunca. “No me salí ni por drogas, ni por lo que pasaba en la calle. Sino porque no me entendía y quería tiempo para pensar. Pero sí me arrepiento bien gacho”.

Es precisamente en la educación media donde irrumpe la deserción masiva en México. Debido a una educación deficiente, a nivel secundaria el 70 por ciento de los muchachos cae en la categoría de analfabetas funcionales. Muchos dejan la escuela entre sentimientos de culpa. Se suma una política de expulsión frente a la menor provocación. Muchos ya no regresarán a la escuela jamás. Una tercera parte de los jóvenes de entre 25 y 29 años de edad en el país sólo llegó hasta la secundaria.

Ésta es una ciudad de estudiantes. Llegan de todas partes de la República y de otros países al Tecnológico de Monterrey, la universidad privada más prestigiada y quizá la más cara de México. Al lado de la abundancia, se encuentran los desocupados y los jóvenes sin escuela, en una sociedad que relega a quienes no tienen títulos académicos.

Mou ha terminado su cigarro. Apaga la colilla con el pie y la recoge. Forma parte de esos casi 30 millones de

mexicanos que tienen entre 15 y 29 años de edad. También está entre esos más de 7.5 millones de jóvenes que no van a la escuela y no tienen empleo formal. En su último trabajo separaba basura para una empresa de reciclaje. Pertenecía a lo que algunos bautizaron como ninis, porque ni estudian ni trabajan.

Mou explica que está pensando cómo ayudar a los de su cuadra. Lleva un cuaderno donde apunta pensamientos que les va a decir a los chicos del taller: ayuden en la casa, estudien. Lo que más le gusta de su barrio es su gente, por solidaridad. Esas calles son su patria. Y quiere salvarlas.

No ha sido fácil para el equipo de CreeSer.

En marzo comenzaron los talleres. Se inscribieron muchos jóvenes que se reunían en una plaza, al caer la noche, para practicar rap, breakdance y grafiti. Un padre de familia—quien, dicen en el barrio, trabaja para un grupo criminal—los alertó: “ya no salgan ahorita porque se va a poner muy feo”. A los pocos días comenzaron a aparecer colgados y ejecutados en las calles.

Ahora, nadie se queda en el cubículo de CreeSer después de las seis de la tarde. Cerraron los talleres callejeros. Refugiaron el proyecto en la secundaria 69. Entre semana Roberto Martínez imparte pláticas sobre la violencia, cómo identificarla, qué opciones hay frente a ella. Los sábados, Mou, Jap y Fred imparten los talleres artísticos. Varios jóvenes, los más vulnerables, los que no estudiaban ni se habían acercado originalmente al proyecto, quedaron excluidos. Las autoridades escolares no permitieron el ingreso a “personas ajenas al plantel”.

Los más desposeídos quedaron, otra vez, sin los espacios que reclama Mou.

Con los talleres, explica Roberto Martínez, los estudiantes han aprendido a identificar la violencia. Está pendiente que dejen de aceptarla como “normal”. Pero quizá el cambio más visible está en los mismos talleristas. Mou lleva un año colaborando con CreeSer. No recibe un peso. Dice que enseñar rap le hace sentir que vale la pena por lo que ha pasado. Ahora es reconocido en su propio barrio. Está por grabar otro disco. Ya no escribe de soledad, sino de iluminación: “Yo brillo porque somos luz/ me acabo de encender/ porque creo en Dios/ y sé que Dios me sabe comprender/ porque soy la sombra con luz propia de un ser divino/ porque creo que debo, puedo y, como Lennon, lo imagino”.

REDENCIÓN DE UN PANDILLERO

En junio de 2011, el expandillero Juan Pablo García llegó a la colonia Nueva Esperanza, municipio de Escobedo. Con un mensaje de paz buscó a los líderes de las pandillas y les propuso firmar un pacto de no agresión. Abelardo tenía 19 años, era pandillero desde los 13 y movía a sesenta huercos de los Pokos Lokos. Llevaba dos años tratando de alejarse, desde que estuvo a punto de matar a alguien. Su esposa estaba embarazada y él caminaba con miedo por su barrio.

La cita para firmar fue en la capilla de la colonia. La gente que quería presenciar ese momento, había dejado libre el pasillo central para que caminaran los pandilleros. “Yo llevaba una navaja. Toda mi clika llevaba navajas. De pronto, Juan Pablo dijo: ‘el que esté arrepentido, hínquese y pida perdón’. Pos yo, porque estaba arrepentido, me hínqué. Y no fue por

miedo. No tenía miedo, pero ya estaba casado, tenía que cambiar”. Las pandillas firmaron.

La paz no fue instantánea. Al terminar la ceremonia, dieron juntos una vuelta por el barrio, para celebrar. El paseo terminó con un joven acuchillado. Nunca hallaron al culpable.

Juan Pablo no se rindió. A los pocos días invitó a las pandillas de la Nueva Esperanza a un campamento espiritual de tres días en las afueras de la ciudad. Llegaron el viernes, y para el sábado Abelardo estaba mortalmente aburrido. Al filo de la media noche, él y dos más se querían ir a casa. Juan Pablo les dio un aventón a la central camionera. Cuando se bajaron del auto y cruzaban la calle, se les cerró un carro lujoso. Con un cuerno de chivo apuntándoles, los conductores les cuestionaron qué hacían ahí. “Les contamos que veníamos de un campamento católico. Nos mandaron un taxi y nos dieron 150 pesos para pagarlo”.

Abelardo ya había rozado la muerte. Unos meses antes de que conociera Clikas por la Paz se encontraba en una riña a pedradas con los de su calle cuando pasó una camioneta de narcos; alguien les lanzó una piedra y se quebró un vidrio. Los Zetas no hicieron nada, pero regresaron dos horas más tarde. “A quien vieron vestido guango (con ropa holgada, de cholo), lo mataron”. La víctima fue Omar Villarreal, de 19 años que paradójicamente nunca peleaba, tocaba la guacharaca en los bailes y se llevaba bien con todos. Los medios, por cierto, registraron su muerte como “una riña entre pandillas”.

Pero el episodio del taxi a la salida del retiro fue el que cambió a Abelardo. Sintió que no lo levantaron porque tiene

un objetivo en la vida. Tuvo lo que religiosos y algunos psicólogos llaman “epifanía”, una revelación.

Cuando Juan Pablo lo invitó a la Escuela para Líderes “Nacidos para Triunfar”, se apuntó junto con sus camaradas. De 60 pandilleros concluyeron cuatro.

Ha pasado un poco menos de un año. Abelardo tiene 20 años, sigue viviendo en el mismo barrio y ya no pelea. Se ha mudado con su esposa e hija a una calle en la que antes no podía caminar. Por las noches ayuda a Juan Pablo en la Escuela para Líderes. Me cuenta su historia en la colonia 10 de marzo, lejos de su hogar, a las 10 de la noche de un martes. Él sabe que se juega la vida cuando se traslada a esos barrios ajenos, en donde puede ser confundido con algo que ya no es. Es voluntario con Juan Pablo porque, dice, si de 10 pandilleros que llegan, ayuda a cambiar la vida de uno, se siente satisfecho.

* * *

El de Juan Pablo o Jotapé, como lo llaman todos, es uno de los proyectos para pandilleros más apoyados por los medios, los círculos gubernamentales y los empresarios locales. Quizá porque promueve un objetivo concreto: pactar el cese de agresiones entre las pandillas de un barrio mediante Clikas por la Paz; tal vez, por tener un trasfondo religioso; o por compartir un lenguaje común con el mundo empresarial: el liderazgo, el triunfo. Se ajusta más, en resumen, a la idea clásica de la asistencia social: ofertar unos trabajos y becas, inculcar ciertos valores. No subvierte o cuestiona el orden social. Sin embargo, muchos jóvenes sólo tienen eso: la oportunidad de esos trabajos y becas. Un chico de 17 años, relata que va a la

Escuela para Líderes para poder laborar en un oxoxo y ayudar a su abuela, a quienes su padre y tíos han abandonado. De su futuro, la posibilidad de una escuela o un empleo mejor, ni se cuestiona.

Juan Pablo está rapado. Es alto y robusto. Hiperactivo. Me ofrece un aventón. Pone el aire acondicionado al máximo, maneja raudo entre las callecitas de la 10 de marzo, a unos 20 minutos del centro de Monterrey. Describe sus proyectos. Primero Clikas por la Paz, el pacto entre pandillas, cuyo objetivo es crear un impacto en la vida de los jóvenes, “que crean en algo”. Después la Escuela para Líderes, de siete meses de duración, donde cada muchacho deberá trazar un proyecto de vida. Entre las actividades hay murales, reforestación, charlas sobre drogas y alcohol.

“Fui adicto, pandillero. Estuve 13 años metido en drogas y pandillas, con los Caciques 13 en la Fome 18, y en Estados Unidos con los Latin Kings y la Mexican Mafia. Una vida como la de los muchachos con los que acabas de platicar”, dice Juan Pablo. A los 20 años, y después de tres intentos de suicidio, “tuve una experiencia de Dios”. Se volvió misionero católico. Hace un año comenzó Clikas unidas por la Paz como respuesta a la ola de violencia.

“Ya no les digo ‘Dios te ama’. Ahora les digo, ‘Dios te ama, pero hay que trabajar’. Y antes de darles la chamba o la beca, para no quemar el cartucho, hay que prepararlos”. Juan Pablo promete a los jóvenes que cuando se gradúen de la Escuela para Líderes, los ayudará a conseguir un trabajo en las tiendas oxoxo, o una beca para continuar sus estudios. Parece demasiado pasar siete meses para un trabajo de salario mínimo, pero en Monterrey hasta las tiendas de abarrotes

rechazan a los tatuados. Nadie contrata a un menor de edad de los barrios marginales.

Guarda silencio un momento. Y eleva la voz: “yo lo que les digo: ¡No sean miedosos! Vamos a rescatar nuestros barrios”.

VOLVER A SOÑAR

Es de noche. Unos adolescentes entrenan fútbol en un parque de la colonia Tres Caminos, municipio de Guadalupe, al oriente de la ciudad. Pasto amarillento, un circuito para correr que rodea canchas y porterías; hay vidrios rotos entre el pasto. Una camioneta de policía enciende su torreta. Todos en el parque se congelan un momento, evalúan. No hay peligro. Siguen jugando.

Bryan, expandillero de 16 años, tomó un breve taller con la organización Cauce Ciudadano, para volver a soñar: adquirir de nuevo la capacidad de imaginar y perseguir un proyecto. Él quería jugar fútbol, así que juntó a sus amigos y pidieron a un vecino que los entrenara.

Bryan interrumpe su entrenamiento para hablar conmigo. Está impaciente, quiere seguir pateando el balón, llevan apenas un par de semanas. No está estudiando pero quiere regresar a la escuela para ser técnico en sistemas de aire acondicionado.

A dos cuerdas del parque, en casa de Emanuel, un hogar humilde pero amplio, cuatro jóvenes dan vida a un show de payasos. Emmu, quien está por presentar su examen a la Universidad Autónoma de Nuevo León, muestra su disfraz de payaso: pelucas fosforescentes, paliacates de colores, ma-

quillaje. “El personaje es lo más importante”, recalca. Changuitos, una adolescente de 14, enseña sus fotos disfrazada. Va a cambiar su personaje, porque hacerse el peinado le lleva mucho tiempo. También están Show y Tiul, de unos 20 años. Fue Tiul quien emprendió el proyecto originalmente.

Una integrante de Cauce Ciudadano les ha traído un monociclo y un dinero para que se manden a coser sus trajes. Para esta organización civil con sede en el Distrito Federal, los jóvenes que son vulnerables o que ya han sido rescatados de la delincuencia necesitan un proyecto económico que les permita sostenerse. Si no, la dinámica del barrio los arrastrará de nuevo.

Discuten. Tiul advierte: “aquel que no asista a los ensayos no tendrá derecho al traje de payaso”. Han tenido apenas dos representaciones pagadas y para que esto funcione se requiere seriedad. Algunos tratan de justificar sus ausencias. Después de una larga discusión prometen que no faltarán.

En Guadalupe, muchos jóvenes han creado ballets de payasos para presentarse en XV años y fiestas. Es común verlos salir de sus casas disfrazados. Estos ballets no tienen más de 20 años pero ya se han convertido en una identidad cultural del municipio. Emmu, Changuitos y Tiul quieren seguir esta tradición.

Hay otras “tradiciones”. En 2008 éste fue el municipio conurbado con más pandillas del área metropolitana; tenía 720 de un total de mil 600. También es frecuente el fenómeno de los juvenicidios. Una semana antes de mi visita, Roberto García y José Francisco García, que no rebasaban los 25 años, fueron asesinados a unas cuerdas de la casa de Emanuel.

* * *

El origen de Cauce Ciudadano se encuentra en un homicidio. Era el año 2000 en el Distrito Federal, Carlos Cruz tenía 27 años y desde los 13 había estado en pandillas vinculadas a las mafias de la ciudad, cuyos líderes ejecutaban el trabajo sucio de autoridades escolares, y políticos. Pero Cruz ya buscaba una salida a la violencia y comenzaba a hablar de ello con personas fuera de su banda. Entonces mataron a un amigo suyo, Carlos Guadalupe, de la Prepa 9 de la UNAM. “Sabes, siempre caminaba yo mucho en esa locura: si ya mataron a alguien, pues hay que aguantarse, pero lo de Carlos Guadalupe me quebró”.

Varios se preparaban para ir a ajustar cuentas. Carlos Cruz ordenó: “no nos vamos a vengar”. Más tarde alguien le diría: “acabas de salvarle la vida a alguien”. Poco tiempo después fundó Cauce Ciudadano. Casi 12 años más tarde la organización tiene trabajo en varias ciudades, entre ellas Monterrey.

Carlos percibe que muchos barrios se han cerrado y un incremento desmedido del peligro. Admite que muchas veces sí se fastidia, sobre todo de lidiar con autoridades. Hay días que apaga la computadora y sale corriendo de su oficina. Harto. Pero “siempre me encuentro con una buena noticia: un chavo que acabó la escuela o la mamá de alguien que me agradece. Eso me mantiene aquí”.

No todo ha salido bien. Los miembros de Cauce no han regresado a Monterrey durante meses por falta de seguridad. “Hablamos con los chavos por skype. Les mandamos lo que necesitan”, explica. Regresarán si se concreta una alianza con las tiendas oxo, para tener cierta cobertura de protección. A inicios de 2012 otro proyecto se vino abajo. En Santa Isabel,

un vecino había prestado una casa a los jóvenes para que montaran un taller de pintura en aerosol. Una noche, un comando armado llegó a interrogarlos. No pasó a mayores, pero el dueño del lugar dijo que se fueran, que no quería una “matazón de chavos”.

Pero también hay buenas noticias. Han pasado seis meses desde que inició el fútbol en Guadalupe y uno de los muchachos, Dylan, ya fue fichado por el equipo Monterrey. El grupo de payasos ha crecido. Emanuel, recién ingresado a la universidad, me cuenta que ya son 10 miembros y hacen presentaciones al menos cada 15 días. Incluso salieron en la televisión local. “Ahí vamos”, dice con alegría.

LA DIMENSIÓN DEL AFECTO

Saltillo se encuentra a hora y media de Monterrey. Muchas personas viven en una ciudad y trabajan en la otra. Ambas ciudades intercambian personas, bienes, cultura. Y comparten la pugna entre los Zetas y el cártel del Golfo.

De Saltillo es el Borrás, quien tenía 16 años cuando decidió ser aprendiz de sicario para ganar 3 mil pesos quincenales. Comenzó a trabajar bajo el mando de un expolicía. La noche de su primer asesinato, su jefe y otros más treparon a la camioneta a un condenado a muerte. Condujeron hasta un paraje oscuro y le dieron la orden. Borrás disparó, y enseguida comenzó a vomitar.

Tiraron el cadáver en otra parte. El jefe le ordenó que metiera las manos en el cuerpo y se llenara las manos de sangre. “No te las limpies, déjalas así”, le exigía. Lo llevó a cenar en

un local junto a la carretera. “Esto es para que te vayas cauterizando”. Así es como se gana nervio para matar: comiendo con manos ensangrentadas.

Tiempo después el Borrás rozó su propia muerte. Iba con otros tres, cuando se encontraron con los soldados. Se replegaron a unos terrenos baldíos. En la carrera, cayó en un hoyo y se desmayó. Cuando volvió en sí, sus compañeros yacían muertos. Caminó a una casa de seguridad cercana. En reunión con toda la estructura, lo tablearon y lo degradaron por perder su arma. Fue rebajado a halcón y pasó a ganar 800 pesos semanales. Le asignaron un sitio de vigía y le dieron un radio. Una tarde, mientras comía papas fritas pasó un convoy del Ejército. Sintió que lo habían descubierto. Enterró el radio entre las papas, y escondió la bolsa de frituras en un hoyo. Huyó entre calles y vías del tren, por horas. Llegó a casa. Sus jefes lo estaban esperando. Les explicó lo ocurrido. Hasta que comprobaron que el radio estaba donde decía, le perdonaron la vida.

El Borrás habló con el expolicía y le dijo que esa vida no era para él. Su jefe se compadeció, le tenía estima. Lo dejó salir de la organización.

Esto es Saltillo y los jóvenes.

Durante los últimos años Rodrigo Montelongo, líder del proyecto Grafitos Colombia, ha podido observar dos fenómenos: ya no hay levantones de muchachos para forzarlos a trabajar con el narco. Ahora son los adolescentes quienes “hacen fila para ser reclutados”. Sin acceso al trabajo, la escuela o algún espacio en el que se puedan desarrollar, el crimen organizado es la esperanza. El narco impone los gustos, las modas, las necesidades entre los jóvenes de colonias urbano

populares. El segundo fenómeno es que el sicariato tampoco cumple todo lo que promete, y muchos deciden alejarse antes de ascender en el escalafón. En momentos tempranos todavía pueden zafarse e integrarse a una vida diferente, como la que enseña Montelongo.

El exseminarista me recibe en la planta baja de una antigua casona en el centro de Saltillo, la sede de Grafitos. Por más de 16 años ha convivido con cientos de jóvenes de los barrios marginales. Ha acompañado a muchos en un cambio de vida, a otros los ha visto perderse en la violencia. En el piso de arriba la treintena de chavos que asistieron este sábado escuchan a un cuentacuentos antes de ensayar sus bailes.

Lo más arraigado entre los chundos de Saltillo, son los ritmos colombianos, y esa forma única, singularísima, de bailar la cumbia. Por eso, cuando un grupo de personas se preguntaba cómo ayudar a adolescentes en riesgo se decidió que lo mejor era formar un grupo de baile colombiano. En los ensayos además reciben talleres de salud reproductiva, autoestima, valores. Usan un modelo —basado en la educación popular de Paulo Freire— al que llamaron dialógico participativo: todo se dialoga y los chicos son los dueños de la organización.

Grafitos recibe a adolescentes de 12 a 16 años. Serán beneficiarios hasta los 18. Después sólo podrán ser voluntarios y se convierten en los pilares de la organización. Por ejemplo, la mano derecha de Montelongo es Juan, un joven de 21 años, alto y robusto que desde adolescente ingresó a Grafitos. Proveniente de un barrio de pintores de brocha gorda, es el primero de toda su familia que se ha graduado de la

prepa, y ahora está por concluir una licenciatura en Ingeniería. Tiene un trabajo, una novia y asiste todos los sábados.

Antes, la organización aceptaba estudiantes para que hicieran su servicio social, pero no funcionó. Los prestadores de servicio social sólo venían por unos meses. “Se presentaron problemas afectivos entre los muchachos, se sintieron usados”, explica Montelongo.

La historia cambia de un plumazo mis preguntas: ¿de qué tamaño es el daño afectivo en los adolescentes de los barrios populares? Montelongo cuenta con humor amargo la discriminación que él mismo ha sufrido por acompañarlos. Se han negado a atenderlos en restaurantes “porque dan mal aspecto”. Al llegar a una tienda de abarrotes, un vigilante los escoltará hasta que salgan. La solución a la marginación y a los hoyos negros afectivos que ésta deja no es sencilla ni rápida. No acepta cursos fastrack, ni compromisos temporales, ni actitudes redentoristas.

En las paredes de la casa se relatan las historias de éxito de Grafitos. Premios internacionales a la labor social; jóvenes que nunca habían salido de su barrio pero ahora viajan por el mundo para dar a conocer el baile colombiano al estilo Saltillo. En el segundo piso, el cuentacuentos ha concluido. Es hora de ensayar el baile. Los chicos mueven las sillas, despejan el salón. Se presentan.

Mi nombre es Jorge, me dicen Yorch, vivo en Bonanza y me junto con los mafiosos, soy un nini. Me dicen Goya, vivo en Bonanza, tengo 17, estudio sistemas en el Cetis, vengo porque me gusta la colombia. Me llamo Enrique, me junto con los trolos, vengo aquí porque me gusta bailar. Yo soy Nelly, me junto con las cremositas, tengo 15 años y estoy estudiando en-

fermería. Yo me llamo Jonathan, me dicen Johnny, tengo 13 años, estudio la secundaria, vengo para no estar aburrido en la casa. Me dicen Chente, tengo 18, no estudio, no trabajo, ya no me junto con nadie.

Estos jóvenes representan a los del país. Olvidados excepto cuando matan y mueren. Me pregunto ¿en qué momento construimos un país que dejó de amar a sus hijos? Como al inicio de este viaje, la realidad se presenta abrumadora. Los proyectos, como dice Montelongo, “son pulguitas en un perro”. Y sin embargo ahí están, pequeñas iniciativas, pulguitas luchando contra un abandono colosal.

Comienza el ensayo. Uno por uno pasan a bailar y despliegan los elaborados pasitos del baile colombiano-saltillense. Por un momento, la avasalladora realidad de la marginación se ha detenido. Sólo suena el acordeón. Sólo existe la cumbia.

LA CIUDAD DE LAS PERSONAS SANADORAS DE ALMAS

Luis Guillermo Hernández

Luis Guillermo Hernández es periodista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de Maestría en Comunicación por la UNAM.

Desde 1994 su trabajo ha sido difundido en periódicos, revistas, radio, televisión y portales digitales de México y Latinoamérica, en medios como El Universal, Reforma, Grupo Expansión y Grupo Televisa, entre otros.

En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por la serie de entrevistas “Los niños de la furia” y en 2011 el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, por la serie de reportajes “La vida después de San Fernando.”

Actualmente es periodista independiente, becario del Conacyt en el posgrado en Comunicación de la UNAM, y cursa una especialización en periodismo literario en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuando escuchó decir al sacerdote, por la televisión, que muchos juarenses necesitaban ayuda para superar sus crisis nerviosas, su duelo, el temor a las balaceras constantes y sucesivas, Dora Dávila no sospechó que pronto su terapia floral, las “gotitas contra el miedo” en las cuales creía, habría de sumarse a un pelotón de mujeres y hombres decididos que saldrían a sanar almas a la ciudad de la muerte.

Muchos meses llevaba atestiguando un desconsuelo masivo en las calles del antiguo Paso del Norte, sin siquiera tener una expectativa concreta más allá de concluir un curso para realizar tratamientos terapéuticos alternativos, que un grupo de 15 mujeres, proveniente de distintas zonas de la ciudad, había comenzado recientemente en Sabcic, la asociación civil Salud y Bienestar Comunitario, a la que ella se había sumado como directiva poco tiempo antes.

Quizá fueron los 3 mil 111 homicidios de ese año 2010, que rasguñaron un promedio de casi nueve al día en toda la ciudad, o su propio miedo, su pasmo de habitante atrapada en la ciudad más violenta de México. Quizá algo en la voz, en las palabras urgentes del sacerdote Alberto Meléndez, vicario de la modesta parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, que esa noche retumbaron sonoras en un punto de la conciencia de esa mujer:

—Viene mucha, mucha gente a pedirnos ayuda, muchas familias que han perdido un hijo, al esposo... la gente está sufriendo mucho, mucho... nosotros necesitamos ayudarlos.

El sacerdote hablaba por miles de habitantes silenciosos, en una ciudad jolgorio que devino cementerio. Sede internacional de los feminicidios, de la impunidad, de la lucha sin fin entre los cárteles de la droga más sanguinarios del país, el territorio de la viudez como estado civil, cada vez más común, donde el ejército y las fuerzas policiacas federales, que llegaron a significar hasta 12 mil efectivos juntos en una sola temporada, fuertemente armados patrullaban, vigilaban y cernían el miedo a ras de cuello en la única zona que disputaba el título de mayor cementerio del mundo en guerra a la devastada Irak.

Dora, una mujer de cincuenta y tantos, cuya voz de ventisca evoca el tono de ciertas enfermeras consagradas, de manos hábiles como jardinera, ojos ávidos, marrones como el armazón de sus lentes, la boca un trazo tenue, el pelo entrecano, muy lacio, se decidió esa noche a marcar el teléfono y pedir una cita con el cura.

—Tenemos esto, padre, danos chanza de abrir aquí un centro de atención —dijo ella.

En sus manos un frasco diminuto, ámbar, con la síntesis de su propuesta: terapia floral, una esperanza en extracto de 30 mililitros macerada al sol, diluída en alcohol o brandy, serenada pacientemente por días y dispuesta para el alivio de quien sufre de las emociones alteradas.

Dora tenía una corazonada: contaba con 15 pares de manos de mujeres dispuestas a ayudar, capacitadas en ese tipo de tratamiento y con la certeza de que en la esencia de las flores podía encontrarse alguna respuesta.

—Son terapias que concentran la fuerza vibracional de las flores para la sanación emocional —dijo Dora como única explicación al padre Meléndez, quien para el domingo siguiente, después del sermón de mediodía, ya estaba avisando a los asistentes que las mujeres de Sábic iban a ofrecer una plática.

—Apoyo terapéutico —le llamó el clérigo— para todas aquellas personas que tuvieran problemas emocionales y quisieran escuchar.

De la feligresía, unas 30 personas se quedaron en el atrio de la iglesia, un patio amplio, soleado, con un par de árboles que sombrean poquito por la tarde, cuyo arenal contiguo, con apenas verdes, parece fundirse con el amarillo de la torre del campanario, brillante, chillón, justo al centro de la colonia Toribio García, en el norte populoso de la ciudad.

Las mujeres de Sábic les hablaron del poder curativo de las flores, de la energía que guarda la tierra del campo, del poder sintetizador de los rayos del sol, de un camino alternativo para encontrar la paz interna en medio de la guerra y la muerte.

Al mismo tiempo que ofrecían sus remedios, conocían las historias, muy similares, de sus primeras pacientes: mujeres,

jóvenes muchas de ellas, agotadas por recurrentes y sucesivas crisis nerviosas, insomnes, cargadas con duelos no elaborados, con alteraciones de personalidad producto de la violencia desatada. O adolescentes, algunas casi niñas, pero ya viudas y con fuertes problemas de gastritis, de hipertensión, incluso úlceras sangrantes. Y todas, sin excepción alguna, abatidas por huracanes de angustia, enojo o estrés.

—Nos dimos cuenta de que el problema era muy, muy grave. Llegaban mujeres, incluso niños, expuestos a la violencia —recordó Dora cuando hizo un recuento de ese tiempo.

A la que no le habían asesinado al esposo delante de sus hijos pequeños para despojarlo de su camioneta, le habían descuartizado al papá por dedicarse al narcomenudeo. La que no había perdido todo su patrimonio a manos de los financieros del crimen organizado, le habían casi matado al hijo por resistirse a pagar protección. La que no contaba una historia de amenaza, la contaba de violación, de secuestro, de golpes, de balaceras, de asaltos en plena madrugada al pie de su propia cama. Vidas al borde del extremo peligro y la inminencia de la muerte.

Armadas con pequeñas cajitas contenedoras de frascos con goteros, pero principalmente con una gran paciencia y disposición para escuchar historias de vida, unas más terribles que otras, las mujeres de Sabic atendieron, entre el primero y los tres domingos siguientes, a más de 700 vecinas de la colonia Toribio García.

—Eran demasiadas tragedias, demasiado sufrimiento de la gente —recuerda Dora— pensamos que esto podía ayudar, ¿verdad? Aunque fuera un poco, ayudar a sanar toda esa angustia.

Cada sesión, más extenuante, más prolongada e intensa que la anterior, detonaba en los colonos mayores expectativas casi de inmediato: significaba, en muchos de los casos, la única posibilidad de ayuda para miles de personas sin acceso a servicios médicos, a especialistas en la devastación espiritual, moral, anímica, que sacudió a la ciudad.

Si es cierto, como dicen los expertos, que una tragedia puede tocar aproximadamente a 200 personas que de una u otra manera se relacionan con la víctima, en Juárez, que entre 2006 y 2012 presencié el asesinato de casi 10 mil personas, ese universo fácilmente habría alcanzado las dos millones de almas, casi 700 mil más de las que registra el censo poblacional del año 2010. Un cementerio emocional.

Aunado a ello, autoexiliados por el temor a los secuestros o desalentados por la caída de los salarios, producto del éxodo masivo de capitales y el desplome de la economía juarense, muchos médicos y especialistas clínicos, entre ellos la mayoría de los psicólogos, habían terminado por huir a El Paso, en Texas, o a otras ciudades, estadounidenses o mexicanas, donde el ejercicio de su profesión no significaba la muerte segura ni la amenaza constante.

—Nos quedamos sin especialistas. En los hospitales, en las clínicas, privadas o públicas. Y muchos compañeros tuvieron incluso que apoyar en especialidades que no eran las suyas, porque no había capacidad para atender tanta demanda —dijo Leticia Chavarría, una de las cabezas del colectivo Comité Médico Ciudadano, una doctora cuyo rostro, anguloso, bello, recuerda más a esas actrices románticas de los años 50 que a una luchadora social aguerrida, decidida, enojada con el estado de las cosas en la ciudad que la vio nacer.

—Otros colegas se escondieron en consultorios sin anuncios, sin publicidad, para no llamar la atención —dijo— porque a muchos los mataron, incluso por atender a las víctimas. El comité mismo había surgido así, del hartazgo de los médicos ante los asesinatos de sus colegas en las escenas del crimen. De las ejecuciones cuando prestaban su ayuda a los heridos, de tener que pagar cuotas de vida a los sicarios o canjear su vida por la de sus pacientes.

Sin orden, ni garantías, muchos médicos se fueron, cansados de pagar las extorsiones que les exigían con amenazas contra sus vidas y las de sus familias. En apenas un trienio, 2008 a 2011, más del 50 por ciento de los médicos, especialistas y casi la totalidad de los psicólogos profesionales experimentados habían abandonado la ciudad o se habían replegado, y para comienzos de 2012 Juárez tenía sólo un cardiólogo en funciones, ningún oncólogo viviendo de fijo en la ciudad y una marcada sobreoferta de servicios médicos que, aunque abaratados, casi nadie podía pagar.

Por ello, lo que en otros tiempos pudo significar un muro infranqueable, como proponer un tratamiento alternativo considerado superchería, casi reducido a la categoría de placebo por la ciencia formal, terminó por germinar en un terreno ávido, necesitado de cura, como era ciudad Juárez en el momento que Dora y las mujeres de Sabic plantaron en la gente sus flores de Bach.

La necesidad era mayúscula, sin precedentes en una ciudad que no estaba preparada para un desafío emocional de ese tamaño: surgían terapias de toda índole por todos lados, pero ninguna se daba abasto para atender la dimensión de la tragedia. Algunas mujeres improvisaban talleres de sanación

en iglesias o reunían a estudiantes de psicología para abrir centros de atención, la mayoría de las veces gratuita, o talleres de yoga, meditación, terapia zen, de cualquier cosa que significara contención del derrumbe emocional.

Como torrente, la necesidad pronto liberó no sólo la confianza en muchos otros grupos que traían bajo el brazo sus propias alternativas, todas potencialmente útiles para aliviar la aflicción de tantos en medio del desastre, sino que empezó a sumar manos, incluso de aquellas personas que cargaban consigo la pena, la rabia, el odio de haber sido víctimas de la barbarie y estaban dispuestas a hacer algo por recuperar sus vidas.

UNA VERDADERA GUERRILLA DE SANACIÓN

Erika parece una mujer fuerte, de rasgos contundentes, de carácter sólido, que con la mirada domina la cámara ante la cual cuenta su historia.

—Yo venía en cenizas, pensaba en el suicidio... —dice, y sus ojos, negros como plumas de chanate, se clavan en los ojos de quien la mira a través del monitor, como si pudieran atravesar los cristales, vivos. —De ser mamá de tiempo completo, pasé a ser madre y proveedora, a dejar a mis hijos solos la mitad del día. Venía totalmente con la autoestima por el suelo, no tenía la fortaleza, renegaba, no alcanzaba a concebir mi vida sin mi esposo, no lo entendía. Todavía hay días que no lo entiendo —dice.

Sentada en una de las esquinas de su comedor, habla de su experiencia como víctima de la violencia. Recuerda, sin

lágrimas porque ya se le agotaron, un reporte de periódico, fechado en junio de 2010, en el que queda registrado el peor momento de su vida: su esposo, Óscar García, un chofer de tráiler quien durante 10 años cubrió las distintas rutas de Juárez hacia la capital del estado de Chihuahua, una noche es encontrado muerto. Acribillado con tres tiros en el abdomen, la cabeza y el cuello.

—Cuando apareció el cuerpo, yo lo reconocí en el forense. Mis suegros no pudieron, yo lo encontré, yo lo reconocí... imágenes que quizá no se me borren de la cabeza —dice.

Más en busca de ayuda para sí misma que con intención de ayudar a alguien más, tres semanas después de la tragedia, Erika acudió a una de las sesiones de terapia de duelo que las mujeres de Sabic realizaban en la iglesia de Mogrovejo, a la que llegó por recomendación de sus vecinas.

Después de tres visitas, a lo largo de dos meses, Erika sintió cierta mejoría anímica. Ya hablaba más, ya comía. Pudo comenzar el reencuentro emocional con sus hijos, de dos, seis y diez años. Explicarles por qué su padre se fue. Y de qué forma.

Cinco gotas de esencia floral diluidas en medio vaso con agua, cada ocho horas; el peso de los recuerdos frente al espejo, el convencimiento de que, aún sin su compañero, sigue la vida, que puede vivirse aunque distinta. Aferrada al peso de convertirse en el único futuro posible para sus hijos, dice Erika, puede levantarse de su derrumbe con las frases afirmativas, parte de su terapia, que a cada momento debe repetir: “Inseguridad. Hoy fluyo en la vida con fuerza para salir adelante. Tengo fe en que el amor y la bondad habitan en todo lo que encuentro... Impotencia. Confío en mi fuerza y capacidad de decisión. Enfrento los obstáculos y la adversidad con

ardiente coraje, con fiera valentía. Atravieso la oscuridad del mundo con la espada de la verdad”.

—Por eso me decidí a ser terapeuta, porque sentí un alivio que no había sentido hasta ese momento —dice. Al igual que casi todas las mujeres de la ciudad, el fondo de sus ojos es oscuro. Como si el aire de la frontera cubriera de mate el precipicio de todas sus miradas y las cuencas secas de todas sus pupilas.

Toma un curso intensivo, completo, y decide sumarse al grupo de Sabic, que para entonces ya es toda una brigada de mujeres que, como Erika, quieren conocer el método floral, armar talleres de aprendizaje rápido, preparar las esencias.

A partir del reconocimiento de sus propias tragedias, algunas mujeres impulsan la recuperación emocional de las otras, su acompañamiento, la vigilancia de sus estados de ánimo. Igual si son familiares, vecinas, amigas o gente incluso desconocida pero que requiere intervención urgente.

Las jornadas se convierten poco a poco en momentos para compartir experiencias íntimas de sufrimiento y de muerte, para inyectarse vida, para intentar apoyarse una con la otra: el dolor es el mismo, pero se procesa distinto.

Ellas, que en los años 80 atestiguaron la expansión económica de su ciudad, la más densamente ocupada por la industria maquiladora de ese entonces, y que en los 90 vivieron el apogeo laboral y comercial de la ciudad fronteriza más en jauja, hablan del derrumbe pleno, estrepitoso, sin vacilación, que viven.

Mientras hacen recuentos personales, críticos, del resultado del trabajo de autoridades federales, estatales y municipales poco inteligentes e insensibles, incapaces de ha-

cer frente al resquebrajamiento social; mientras se arremangan las mangas para comenzar a sanarse entre ellas a través de sus escencias vertidas en esos frascos color ámbar, las mujeres mezclan la confianza con la necesidad de creer en algo, los rezos católicos con “los siete pasos de la curación: la paz, la esperanza, la alegría, la fe, la seguridad, la sabiduría y el amor”, obligándose a repetir frente al espejo, como quien se habla a sí mismo sin ningún tapujo, la letanía de afirmaciones en que cifran su esperanza.

Cuando no han pasado ni 12 meses desde la primera reunión en Mogrovejo, las mujeres de Sabic ya tienen más de 200 voluntarias en toda la ciudad. Algunas más en otras ciudades del estado.

Convocadas por otras organizaciones civiles, las mujeres de Sabic acuden a sus primeras sesiones públicas en el Jardín Central de la ciudad, hasta donde llegan cientos de mujeres, hombres, niños. Son reuniones que han comenzado meses atrás, en las cuales, como si se tratase de un día de feria, conviven trabajadoras sociales con psicoterapeutas que ofrecen trabajos grupales para el manejo del duelo y las emociones, talleres para narrar tragedias personales, sobre todo con niños y mujeres, y hasta reuniones de catársis para manejar sucesos vivenciales extremos, como las balaceras o las persecuciones a tiro de plomo a plena luz del día.

Ahí, donde están también distintos grupos de tanatólogos, expertos o improvisados por tanta necesidad, que buscan auxiliar a la gente en el acompañamiento de enfermos terminales y en sobrellevar, lo más dignamente posible, las muertes violentas de familiares o personas queridas, ahí por primera vez se instalan las mesitas de trabajo de las terapistas de Sabic.

Se mezclan con los masajistas de todas las tendencias curativas, desde prehispánicas hasta orientales, pasando por reikistas, quienes igual proponen masajes de pies y tobillos, “donde está el reflejo de cada órgano del cuerpo”, que de hombros y cuello, “para liberar la energía negativa y la angustia de quien debe cargar un gran peso sobre sus espaldas”. Sugieren masajes en puntos específicos del cuerpo, de la espalda a la cabeza, las piernas, para equilibrar los chakras, como se denomina a los centros energéticos.

Observan a los acupunturistas, con mapas energéticos corporales que documentaron los antiguos chinos, para regular el flujo de energía y su correspondencia con cada uno de los órganos de los juarences afectados por algún drama personal. Auriculoterapeutas, que lo mismo proponen utilizar balines que granos de trigo, arroz, café incluso, convencidos de que las orejas reflejan una imagen parecida a la de los fetos dentro del útero materno, y por lo tanto funcionan como un espejo de todo el cuerpo humano.

Como la plaza pública tiene espacios amplios, van llegando también jóvenes de los movimientos culturales callejeros, los grafitteros, los dibujantes, que organizan talleres de pintura y dibujo para niños y jóvenes, al mismo tiempo que los chavos del colectivo Pacto por la Cultura, una asociación que plantea alternativas artísticas contra la violencia, presentan recitales al aire libre con guitarristas, flautistas, las gracias de algunos mimos, actores que improvisan ante los presentes mientras pasa la tarde. También escribieron una obra de teatro, crítica a la estrategia de guerra del gobierno federal, que fue actuada por víctimas de la violencia.

Recuperan juntos el espacio público y cada vez con mayor asiduidad lo reconstruyen suyo. Un trabajo nada fácil en una ciudad con miedo: casi 9 de cada 10 juarenses ha dejado de salir de noche por temor a la inseguridad. Casi la mitad de la ciudad deja de asistir al cine y la misma proporción ya no sale a cenar a restaurantes, a tomar la copa con los amigos, para de bailar, según los datos de la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

Se acaban las caminatas, se acaba el estadio, los noviazgos en el portal, las bancas con amantes, el bullicio. El 88 por ciento de la gente se siente insegura en la calle, en los parques, en las carreteras: se acaba la vida social. Sólo hay miedo y ni siquiera justicia: el 96 por ciento de los delitos quedan impunes. Completamente impunes.

Como explica Verónica Corchado, una de las cabezas visibles del colectivo cultural y artístico que forma parte de las jornadas del Jardín Central: a quienes salieron a sanar almas, con cualquiera de los métodos posibles, los mueve su certeza particular.

—Se puede llegar a ser más fuerte que el dolor.

Y entonces, entre los malabarismos de los saltimbanquis de Pacto por la Cultura y los salmos de sanación de las brigadistas de Sabic, se puede escuchar fácilmente el ssshhiuuuuu agudo, interminable, de los botes de aerosol que manan azules, rojos o verdes hacia las paredes, o las rimas de una canción de trova garantizando “maquiladora sólo recuerdo será algún día/ y la cosecha tu propio fruto/ será algún día/ y a la desaparecida le harán justicia”, o alguna de las muchas frases inmortalizadas por Shakespeare recitada con esas ché silbadas como shé, las coplas de un romancero

gitano, los gritos de niños recuperando su vida, las estrofas de un rap o hip-hop de MC Crimen gritando: “en mi vecindario la muerte ronda a diario/ chicos malos juegan a burlar al comisario/ cuando cái la noche y los perros ladran sin reproche/ los niños ya no piensan en juguetes”.

Juntos, congregados, insultados, dolidos, comparten sus experiencias y tratan de liberarse de sus fardos: “a una mujer la asesinaron delante de sus hijos pequeños para quitarle su camioneta”. Otra “perdió todo su patrimonio, la amenazaron y la despojaron de sus bienes por resistirse a pagar protección”. A “una brigadista de la zona de Villas de Salvárcar le secuestraron al papá una vez, lo retuvieron un tiempo y luego, tras liberarlo, dos meses después lo volvieron a secuestrar, esta vez para quitarle la vida”. A un raperero que “hacía malabares en un cruceiro le metieron 14 balazos”. “Una niña actriz callejera volvió a su casa, después de 30 noches, convertida en cadáver”.

Y ese universo de sufrimiento, de angustia, de muerte, de desasosiego como forma de vida, es el vértice donde convergen todos los activistas. Da lo mismo si terapeutas florales, actores o dibujantes. Con apenas recursos, con un mucho de inoperancia o por lo menos indiferencia gubernamental, sin garantías de seguridad, sin espacios disponibles para su actuar, en medio de amenazas, de carencias que les hacen desaparecer o empequeñecer ante los desafíos.

—Cada uno en su trinchera, estamos haciendo trabajo profundo para reconstruir, para revivir —dice Verónica Corchado, quien me habla de mujeres activistas que realizan seguimiento a niños huérfanos, más de 10 mil según las estimaciones extraoficiales. Habla de hombres que crean

talleres de música, de pintura, de baile, que a falta de parques o plazas, se refugian en casas, en patios, donde realizan desde cosas muy espirituales, hasta cosas muy prácticas. Atienden gente, hacen sesiones de meditación, de oración, eventos energéticos por toda la ciudad, “izquierdosos” que les llaman, que organizan concilios de reflexión, de discusión, de proyectos, para saberse vivos.

Ella misma, Verónica, encabeza brigadas que por las calles de Juárez van pintando murales, ofrecen acercamiento a las artes, cercanía con la lectura, para tratar de arrancar a los niños, a los miles de jóvenes sin opciones, de las fáuces de los cárteles de la droga.

—Es un esfuerzo en el que estamos empeñados. No se ve todavía, pero va a notarse muy pronto ¿sí? Gente que trabaja para recomponer el tejido social de nuestra ciudad.

Buscan la sanación de las almas de los vivos y eso los lleva a converger, a crear protocolos de “atención y contención para las víctimas, casos de emergencia, riesgos”, a realizar apoyo comunitario más amplio, más organizado, en centros sociales, en parroquias, en escuelas, en plazas públicas custodiadas por militares, en patios de casas ofrecidas por los mismos colonos.

Se convierten juntos en un ejército que, en casi cuatro años, da tratamiento a más de 10 mil personas, que erige más de 200 murales grandes o pequeños, que hace nacer festivales de canto, de baile. Que forja ciudadanía nueva y constituye lo que Dora, la directora de Sabic, sabe nombrar con tanta precisión:

—Una verdadera guerrilla de sanación.

“VAMOS A SALIR...”

Desde el otro lado del Río Bravo, desde las arterias sanas, sin herrumbres de guerra, que hacen fluir la vida en El Paso, la devastada Juárez es una copia fiel, completamente fiel, de uno de esos murales que los activistas del colectivo Arte, Comunidad, Equidad AC, pintaron en la Plaza del Periodista: en medio de un cielo azulado, cortado por cerros áridos, sin verdor, surge una ciudad quebrada, de gente sin sonrisas, de hombres y mujeres con rostros desdibujados en trazos rabiosos, toscos, achicharrados por un martirio, como se desdibuja lo que duele, lo que punza, y que sin embargo deja latir, aunque pequeña, una esperanza plasmada en una pequeña flor amarilla con el corazón rojo. Muy rojo.

—Eso intentamos mostrar: que estamos venciendo el miedo, recuperando las calles, organizándonos, pero sin olvidar los agravios —dice Verónica Corchado.

Entre sus calles de comercios vacíos, de plazas enteras desoladas como de pueblo fantasma, de gentíos ausentes y rastros de guerra tiznando las paredes, en Juárez hay un movimiento silencioso, emergente, que busca recuperar la vida después de la sangre, del desierto arenoso de los labios, del trepidar de la carne, del pánico puro y llano. Pero sin olvido.

—Si olvidamos lo ocurrido, estaremos fallándonos como sociedad. Si después de toda esta muerte volvemos a la corrupción, a la violencia, habremos perdido más que en esta guerra —dice Leticia Chavarría, quien fue convocada a sumarse a las mesas de trabajo que fiscalizan los avances del gobierno en materia de seguridad. Para reconstruir el tejido social tiene que hacerse un trabajo muy profundo, muy deli-

cado, que desafortunadamente nuestras autoridades actuales no son capaces de hacer... nos corresponde hacerlo a nosotros y vamos a salir.

Recuerdo una de las historias que me contaron las mujeres de Sabic, y sé que hay mucho de cierto en todo eso:

Una mujer, quizá 25 años, delgada, la piel blanca, el cabello largo y lacio como una seda negra, los ojos ocultos tras unos lentes inmensos, oscuros, se apea de una camioneta de llantas como de tractor. En los brazos, en las orejas, en el cuello, oro. Mucho oro. Que brilla como el destello de un cuchillo filoso cuando se enfrenta de pronto al rayo del sol.

Hace una semana que no puedo dormir... por favor... vengo a que me ayuden —dice.

Para el terrerío de la colonia López Mateos, para los usos y costumbres de una ciudad que aprendió a balazos a identificar a su gente, la mujer encaja perfecto en un estereotipo: de alguna manera, ligada al narco.

Como el procedimiento es siempre el mismo para todos quienes se acercan con las brigadistas de Sabic, una de ellas seguramente le pregunta por sus síntomas.

—No puedo dormir. Estoy angustiada, como si sintiera que en cualquier momento me van a matar.

—¿Trae alguna preocupación especial, algo que la angustie en particular?

—Hace unos días me mataron a mi esposo.

No hay más preguntas. Recostada en la camilla, cuando hay camilla, o sentada en una silla, un banco, la mujer debe despojarse de todos sus objetos metálicos, cerrar los ojos. Debe realizar ejercicios de respiración. Una inhalación profunda, lenta. La retención del aire. La exhalación lenta, sin prisas.

Dos veces, tres. Cinco. Apretar los músculos del cuerpo, soltarlos junto con el aire que exhala. Apretar, soltar. Inhalar, exhalar.

Sin ser tocada, debe sentir la vibración energética. El flujo de su calor hacia el calor de la brigadista. La terapia reiki. La sensación de que la música, un silbido tenue, como lejano, va impregnando de sosiego el estómago convulsionado. Revuelto de miedo.

—No piense en nada. Sienta su cuerpo, su espalda, su cabeza. Aquí. Ahora. Hable con él. Dígale qué siente.

Como son terapias de catarsis la brigadista intenta que la mujer se conecte con su dolor, con todo su espanto. Porque la tendencia de la gente es no tocar el dolor, no rascarse donde les duele. Evadir. Pero las emociones suelen acumularse. Estallar.

Y entonces, esa mujer siente cómo aminora el chasquido de la mandíbula, el sonido de los dientes al rechinar. Quizá el estremecimiento que refieren algunas, que como una gota helada resbala por los poros de la espalda, del cuello. Quizá el precipicio que se abre en la boca del estómago, a punto del vómito. Ese respirar el miedo de su adrenalina, ese soltar los brazos abandonados al temblor. El desierto arenoso de los labios. Estremecimiento. Pánico puro y llano. El esposo muerto, la sangre, seguramente las balas destrozándole medio cuerpo, o el cuerpo completo. El derrumbe de su hogar hecho cachitos igual que el cuerpo de su hijo, de su padre. El aullido, el dolor. El maldito dolor. El futuro sin fin.

Sólo al final, cuando la terapeuta le pregunta si está en condiciones de aportar un donativo, la mujer enojada le contesta:

—No. No tengo un peso. Mataron a mi esposo y yo me quedé en la calle. No tengo trabajo. No tengo para darle de

comer a mis hijos. Tengo la troca, pero la estoy vendiendo. Tengo esta cadena, si la aceptan...

—No. Está bien —dice la brigadista.

—Es que quiero traer a mis hijos también.

—Tráigalos. No se preocupe. Y cuando tenga oportunidad, regrese a continuar su terapia.

Y entonces llega el “gracias” más profundo que puedan escuchar. Como una flor. Ése que en las colonias de la periferia de Juárez, en esos centros de riqueza efímera que ha creado el crimen, donde la violencia es la principal actividad, no es inusual. El del mundo roto por el narcotráfico, donde la troca y las cadenas, incluso la ropa, son apenas el último sustento de toda una familia. Porque muerto el narco, se acabó la lana.

Como escribe Viktor Frankl, el psicoterapeuta austríaco sobreviviente del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial: es una urdimbre de recuerdos íntimos, de pequeños motivos internos, lo que al final hace que un ser humano despojado de todo, hasta de su dignidad, logre aceptar que la vida es digna y peleé por vivirla.

Al perderlo todo, al padecer los extremos del hambre, el frío y la brutalidad que sólo un ser humano es capaz de infligir a otro, es la intensificación de lo verdaderamente importante en la vida, es un breve atisbo de amor, el motor insustituible que empuja a sobrevivir.

Me queda claro cuando recorro la ciudad por última vez, cuando contemplo esas calles casi sin verdes, de grueso salitre, delante de los escombros de la Plaza de las Américas, cuando escucho de nuevo el estallido de las vidas rotas: la supervivencia es posible como una flor en este desierto.

—Por eso la sanación tenía que comenzar por las flores —pienso— precisamente por las flores, representadas en las gotas de las mujeres de Sabic o los murales de los chavos del Pacto por la Cultura. Por los versos de los poetas locales o las canciones que tararean su furia: flores. Botones de vida renovada. Que gritan que esta tierra está viva, que está lista para ser fértil nuevamente, después de que ha sido arrasada por el fuego.

LA JUSTICIA DE TODOS

Daniela Rea

Daniela Rea Gómez comenzó sus actividades periodísticas en Veracruz, donde escribió sobre temas indígenas, migratorios y sobre la vida cotidiana del puerto. En el año 2003 recibió el Premio de Reflexión sobre Derechos Humanos, entregado por la CNDH. En el 2005, llegó a la Ciudad de México, y a partir de ese año trabajó para el diario Reforma en la cobertura de pobreza, derechos humanos, conflictos sociales y el impacto social de la violencia. Ha colaborado con las revistas Replicante, Etiqueta Negra y ReVista, The Harvard Review of Latin America, así como con los portales Cosecha Roja y Anfibia. Sus textos aparecen en las antologías País de Muertos (Debate), Nuestra Aparente Rendición (Debate) y 72 migrantes (Almadía). Forma parte de los Nuevos Cronistas de Indias, de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es integrante fundadora de la Red de Periodistas de a Pie. Además, es co-coordinadora de este libro y de los videos que acompañan el proyecto.

Ahí vienen. Por la vereda de tierra los hombres suben hasta la cima del pueblo. Uno tras otro a pasos lentos, algunos andan descalzos. Ése de brazos fuertes y caminar holgado es Trinidad, quien hace unos meses intentó secuestrar a un taxista. Unos metros más allá anda el joven Raúl, de mirada altanera, aún orgulloso de haber matado a un muchacho en una riña. También se acerca José, culpable de asesinar a uno que intentó violar a su mujer.

En la cima del pueblo, bajo un árbol que extiende generoso sus ramas, aguardan otros hombres armados con escopeta o rifle al hombro. Se miran y se saludan con camaradería, mixtecos, tlapanecos, nahuas, mestizos.

“¿Cómo le va?”, se preguntan, chocan las manos, se palmean la espalda como si recién terminaran una cascarita de fútbol, pero lo que ocurre aquí es el encuentro entre delinquentes y sus vigilantes, los policías comunitarios.

Cansados del silencio y la complicidad del gobierno con los criminales, los indígenas de la Montaña de Guerrero se organizaron desde hace casi 20 años para vigilar su territorio. Escogieron entre sus vecinos a los más capaces y respetados, los armaron con escopetas y machetes, y formaron su propia guardia. De manera paralela crearon un sistema de justicia que desde entonces intenta calmar la inseguridad y la violencia en las zonas más pobres del estado, al sureste del país, ese cinturón marcado históricamente por la miseria. Son los policías comunitarios.

“Se confía en la policía porque es vecino del pueblo y se conoce bien”, dice orgulloso don Fulgencio Castro, un viejo indígena tlapaneco que apenas habla español, de dientes despostillados, exhibidos sin pudor en una sonrisa. “No necesita certificación como gobierno que paga millones y millones y no hay confianza. Aquí sí, el detenido sabe que policía no es borracho, no pelea, cuida al pueblo, pues”.

Cerca de él, sobre las piedras o recargados en el árbol, se acomodan los hombres recién llegados del río, donde tomaron un baño.

Don Fulgencio es un campesino analfabeta, como casi todos los mayores del pueblo, que una vez a la semana acude con los presos y les lleva el consejo para no hacer mal. Estas charlas son conocidas como reeducación de los criminales. “No vuelvan a cometer error —les dice—, porque dañan a la sociedad que quiere vivir tranquila, si asaltan, si matan no conviene porque sufre la gente, su familia y ustedes también”.

Está sentado a la sombra del gran árbol. Junto a él, los policías comunitarios y los detenidos. Es domingo al medio día y Capulín Chocolate, esta comunidad de la Costa Chica

de Guerrero, descansa apacible, de panza al sol. La gente se refugia bajo los tejados mientras una carcacha circula por las calles de tierra anunciando por altavoz las promesas políticas tan desgastadas como el sistema de justicia al que dieron la espalda. Los indígenas dijeron no a la fábrica de culpables, a la compra de jueces, a la tortura como técnica de investigación, a la criminalización de víctimas para intimidarlas y obligarlas a desistir en su reclamo, a la corrupción, a la justicia que tiene precio. Como ocurre en el país entero, donde el 98 por ciento de los crímenes quedan sin castigo y los agraviados sin verdad.

Trinidad, un joven de 19 años vestido con mezclilla y huaraches, llegó con el resto de los detenidos luego de pasear un rato por el río como cada domingo, su día de descanso. Lleva tres meses de comunidad en comunidad arreglando carreteras, escuelas o lo que está feo. Su castigo es sanar con su trabajo el daño hecho al taxista que intentó secuestrar y al pueblo vulnerado por ese crimen.

Dice que prefiere este sistema al oficial, porque el dinero no compra la justicia y aquí no está encerrado todo el día. Cuando lo detuvieron no pensaba así. Estaba enfurecido. Se negaba a escuchar el consejo del campesino Fulgencio o de mujeres católicas o evangélicas que acudían a leerle la biblia. Luego aceptó ir nomás para no aburrirse y de tanto escucharlos entendió que había hecho mal.

“Cuando empecé ese pleito y detención sentía coraje, pero cuando pasó tiempo sentí arrepentimiento. Estoy agarrando sentido que hice mal, pero hay que reconocer y ser gran persona para bien de nosotros, de mi familia”, platica tímido, con la mirada baja y las manos hechas nudo.

Raúl, un joven de 25 años, no piensa como él. Está detenido porque mató a un hombre en una riña. Es el segundo en su haber. Al primero lo asesinó a los 18 años y fue juzgado en el sistema oficial. Se acerca e interviene en la plática.

“Allá si pagas a la familia, estás libre. Es más justo, porque regresas a cuidar a tu familia que no se queda sola, el dinero ayuda pues”, dice. En realidad, libró la prisión tras corromper al juez.

Don Fulgencio presume con orgullo que ésa es la primera diferencia entre la justicia comunitaria y la oficial. La primera aspira a ser de todos. Por eso en este sistema no hay dinero ni abogados, quien defiende al detenido es su familia, vecinos o testigos que pueden alegar a su favor. En el caso de Trinidad fue su padre quien lo representó.

Para la Policía Comunitaria, con base en sus creencias ancestrales, si una persona hace daño a otra es porque la educación en el hogar falló y la comunidad entera debe salir al paso para que no vuelva a hacer mal. Así, cada habitante tiene tarea por hacer. En su estructura los policías vigilan el camino y detienen a los delincuentes, otros habitantes actúan como jueces y dictan el tiempo de castigo que pasarán de pueblo en pueblo haciendo faenas. Los mayores, como Fulgencio, son los responsables de la reeducación y las mujeres preparan la comida para alimentarlos a su paso por el pueblo. Mientras en el sistema tradicional a alguien que robó un pescado le dan un año de cárcel, en este sistema la condena es sanar con su trabajo las heridas colectivas.

“Sí, la justicia es como una red que se teje entre todos”, explicará luego Cirino Plácido, uno de los fundadores de la Comunitaria.

—Si hay uno que no teje, falta pedazo. O si teje mal, se rompe.

* * *

Hace 18 años cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional visibilizó a los pueblos indígenas y nos plantó de frente su dignidad, otro ejército de rebeldía se gestaba en silencio.

En la Costa Chica de Guerrero, al sureste del país, los territorios estaban minados por el olvido, la pobreza y la violencia criminal, que actuaba con la venia del Estado. Aquellos años hombres armados solían detener las trocas de pasajeros en los caminos y robar a los indígenas los pocos pesos obtenidos de la venta de café o maíz o el apoyo del gobierno; en ocasiones, mientras asaltaban, violaban a las mujeres frente a sus padres o maridos. Abundaban los robos de vacas o de cosechas enteras, las deudas entre vecinos terminaban en riñas o asesinatos; era común ver a mujeres golpeadas por los esposos alcoholizados.

Cuando los indígenas de Guerrero supieron del levantamiento en Chiapas escribieron a sus hermanos zapatistas una carta que, según Cirino Plácido, su redactor, decía más o menos así: “Su demanda es nuestra, después de luchar por justicia y no llega, no vamos a enloquecer y tirar al mar. El arma más importante es la conciencia y la organización”.

La resistencia corría por sus venas y por las veredas. En estas tierras nació y fue sepultado el guerrillero Genaro Vázquez, quien en la década de los 70 encabezó una lucha política y armada contra los gobiernos caciquiles del estado. Con esa herencia de rebeldía, los pueblos se organizaban para protestar por el robo de elecciones, la falta de maestros, o la estafa de los apoyos sociales que terminaban en las alforjas de los caciques.

En junio de 1995 el gobierno quiso dar una lección a los rebeldes. Policías estatales emboscaron y masacraron a 17 campesinos que se dirigían a una asamblea política en Aguas Blancas. Sus cuerpos quedaron abatidos en la tierra, junto a la camioneta de redilas donde viajaban. La sangre corrió en la Costa Grande de Guerrero, pero dolió en cada rincón del estado.

“Aprendimos que el gobierno no juega. Nos dejó claro que no puede haber confianza porque nunca va a responder las demandas de la gente de abajo. En la realidad persigue, mata”, explica don Cirino.

Cirino Plácido es un hombre de mirada chispeante, como sus ideas. Cuando apenas era un adolescente salió de la montaña de Guerrero y llegó a la Ciudad de México ávido de aprender. Como indígena sólo encontró oportunidad de sobrevivir trabajando para una familia que le malpagaba con un cuarto y dos comidas al día. Hambriento, se escabullía por las madrugadas a la cocina, remojaba las tortillas duras y las tragaba a escondidas, sin hacer ruido. “Si eres pobre y eres indio hasta cualquier perro te humilla”, aprendió aquellos años. Un empleo de ayudante de panadero lo sacó de esa esclavitud, luego fue albañil, obrero y un día llegó a ser policía municipal en el Estado de México. No lo sabía entonces, pero ese trabajo le serviría años después para dar vida a la Comunitaria.

En 1995, apenas unos meses después de la masacre de Aguas Blancas, la crisis de inseguridad colmó a los pueblos cuando una niña de 8 años fue violada y asesinada. Entonces, don Cirino y otros compañeros de organizaciones campesinas, magisteriales e indígenas, comenzaron a pensar en opciones para calmar la inseguridad.

“Ya veníamos discutiendo qué hacer, cómo encontrar respuestas. Ya teníamos idea de lo colectivo aunque no entendíamos eso de la autonomía. Pero entendíamos que era necesario organizarse, discutir qué hacer. Nos arrimamos varias veces al gobierno y vimos que no da solución. Y pensamos cómo recuperar nuestro derecho colectivo. El ‘nosotros’ estaba pisoteado con la idea del ‘yo’ que nos metió el gobierno”. Don Cirino da cátedra. Aunque ahora no tiene cargo en la Comunitaria y pese a su juventud —ronda los cincuenta años— es una especie de abuelo sabio al que recurren sus compañeros cuando pierden la brújula.

Ese octubre, al poblado de Santa Cruz del Rincón, llegaron representantes de 22 comunidades con las ideas ya trabajadas, instalaron una asamblea general y fundaron la Policía Comunitaria.

En aquel entonces, recuerda don Cirino, eran un grupo de campesinos con sus herramientas de trabajo, machete casi todos, vigilando el territorio. Para hacerse de armas, municiones y uniformes cada pueblo se las ingenió. Algunas vendieron el solar o la parcela, otras remataron los puercos que sin dueño andaban por los corrales comiendo la cosecha. Aprendieron a usarlas. Eso no fue problema. Él, con la experiencia de policía, les dio las primeras lecciones.

“Lo difícil fue romper la sumisión. Nos hicieron creer 500 años que lo que viene de arriba está bueno. Éramos indios, campesinos y costaba creer que podíamos agarrar al poderoso, gente importante, pesada y llevarla a rendir cuentas”, suelta aún sorprendido por la lección que dieron entonces.

Los dos primeros años la Comunitaria sólo vigiló el territorio y llevó ante la justicia oficial a los detenidos. Pero luego

éstos pagaban al gobierno corrupto y salían hambrientos de venganza. Así, resolvieron crear su propio sistema de justicia. Se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, dividida a su vez en tres regiones. Cada una tiene a tres coordinadores que fungen como jueces, y los consejeros, quienes dan reeducación.

Si el apoyo al EZLN los puso en el mapa de focos rojos del gobierno, la creación de la Policía Comunitaria los colocó en la mira. El gobierno no se arriesgaría a que otros rebeldes, como lo hicieron treinta años atrás los guerrilleros comandados por Genaro Vázquez, pusieran en jaque su autoridad. Y comenzó a maquinarse estrategias para desactivarlos.

* * *

Algunos vienen a caballo, otros se amontonan en camionetas de redila. Casi todos andan a pie. Descalzos, con huaraches, con sus botas consumidas. Hombres, mujeres, algunos ancianos. Con los hijos en un brazo y los morrales de comida en otro. Algunos llevan hasta cinco horas bajo el sol, sedientos. Desde lejos, la fila de peregrinos delinea los cerros. Van rumbo a San Luis Acatlán, la cabecera municipal más importante en la región. La peregrinación de indígenas llega a unos 5 mil participantes.

Corre el año 2002. Cinco comisarios comunitarios están encarcelados, acusados de secuestro por el gobierno de René Juárez Cisneros. No es la primera vez que ocurre, en su historia más de una veintena han sido detenidos, uno de ellos aún cumple una condena de 30 años. La prisión como estrategia para desarticularlos.

La organización hizo el trabajo del gobierno. Para entonces habían reducido en un 90 por ciento los asaltos, homi-

cidios y violaciones en el territorio, y de 22 comunidades extendieron sus dominios a 65 en 10 municipios, con 600 policías y 100 mil ciudadanos beneficiados. El costo había sido alto. Además de las acusaciones de secuestro dos policías fueron asesinados en venganza, después de dejar su cargo.

La peregrinación de los indígenas avanza a paso lento. Desde el altavoz se escucha su reclamo: “al gobierno duele que campesinos analfabetas hagan impartición de justicia, cuando hay gente que estudió derecho y que hace muy mal las cosas. Es una vergüenza para él, se desmorona su poder y no quiere eso”.

Se dirigen hacia las oficinas del Ministerio Público de San Luis Acatlán, donde están presos los comandantes. Bordearon cerros, ahora cruzan calles. Los vecinos de la pequeña ciudad, con tantos habitantes como los indígenas que vienen marchando, los miran curiosos, más bien asombrados. ¿De dónde salieron tantos y qué vienen a buscar? Los indígenas rodean las oficinas ministeriales, entran por sus compañeros y la policía judicial responde cortando cartucho.

“Digan cuál es el delito de nuestros compañeros”, reclaman a gritos a las autoridades. Protegidos por sí mismos, desarmen a los judiciales. De un momento a otro, los militares y policías del gobierno los cercan y les lanzan un ultimátum: “¡tienen 30 días para entregar las armas! De lo contrario va a entrar el Ejército, porque son ilegales”.

Ellos, que llevan todo el día en resguardo de sus compañeros, rechazan la propuesta y anuncian resistencia: en adelante nadie venderá agua y tortilla al Ejército, que a los tres días se verá obligado a salir de la zona para evitar conflictos políticos. Atrapado en su propia amenaza, el gobierno les ofrece

liberar a los policías, certificarlos como parte del Estado y de paso enseñarles a leer.

“Ataquen las causas, no a la Comunitaria”, les dice don Cirino en alguna de las mesas para exigir la liberación de los compañeros, “la Comunitaria va a desaparecer cuando no haya secuestro, violación, asalto, muerto, que no haya pobreza”.

* * *

Una muralla de costales rellenos de tierra, destripados por el paso del tiempo, anuncia la llegada al pueblo de Jolochitlán. Los habitantes la construyeron para protegerse de los extorsionadores que, por ahí del 2009, comenzaron a llegar a la Montaña a exigir dinero a maestros, ganaderos y cafetaleros a cambio de respetarles la vida. Fue la primera alerta de la incursión del crimen organizado en las tierras de la Policía Comunitaria.

En la Montaña de Guerrero ha existido una relación histórica con el crimen organizado. El estado con mayor nivel de pobreza del país, encabeza también la lista de producción de amapola junto con Chihuahua y Sinaloa. Al menos desde el último medio siglo, los indígenas siembran enervantes entre sus milpas, condenados a una dinámica de esclavitud con los narcos. Todos lo saben, pero se tolera porque se reconoce como la única opción de los pueblos para sobrevivir.

Así fue durante muchos años. La relación se mantenía en los límites de la siembra. Pero la Montaña pasó de ser territorio de producción a zona de consumo. Ésa fue la segunda alerta para los comunitarios. En poblados vigilados por ellos, como Buenavista, comenzaron a ver jóvenes fumando marihuana. Alarmados, los vecinos intentaron resolver el proble-

ma enviando a los consumidores a la reeducación o revisando las mochilas antes de entrar a la escuela. No se encontraron soluciones. Cada propuesta escala a un mayor problema y las causas de fondo, esa miseria histórica, continúa haciendo metástasis.

Para don Cirino se trata de una nueva forma de represión del gobierno. Si antes los acusó de guerrilleros, ahora de narcos.

“El Estado ha buscado cientos de formas de represión, nos ha acusado de guerrilla, ahora de narcotráfico y como no hace nada para detener violencia, ya llegó a las comunidades. Tenemos violencia del narco y violencia del gobierno que nos dice narcos”.

El punto de quiebre ocurrió en octubre del 2011 cuando cinco hombres fueron detenidos en dos camionetas por transportar casi 600 kilos de marihuana en el territorio bajo su resguardo. Era la primera vez que se enfrentaban a un caso similar. No sabían si entregarlos al gobierno o juzgarlos bajo sus reglas, como lo hacían desde 15 años atrás con los delincuentes comunes. Se convocó a una asamblea general, llegaron 500 habitantes, coordinadores, consejeros, ancianos, hasta el secretario de Seguridad Pública estatal. Ante ellos, los detenidos, descalzos y amarrados de manos o pies, con el cargamento expuesto.

La primera en hablar fue la señora Hernández, madre de dos jóvenes acusados. “Estoy aquí porque quiero llegar, pues, a un acuerdo con ustedes como máxima autoridad. Pues como ven, mis hijos cometieron estos errores. Estoy reconociendo el error, pero ustedes me pueden ayudar porque yo lo que quiero es que mis hijos los suelten”, dijo en su cortado español.

El único acusado que no era indígena pidió la palabra. “Me llamo Gabriel Orozco Nieto. No vean en mí esa persona, vean en mí un ser humano como ustedes que quiere ganarse un peso, que se pierde, que me vean a alguien como un ser querido, no como lo que tratan de hacer que me vean”, es decir, un narcotraficante. Luego alegó que lo detuvieron de manera injusta y no le permitieron llamar a su familia.

Vestido de blanco lino y custodiado por sus propios guardias, el secretario de Seguridad Pública dijo a los comunitarios que no tenían capacidad para tratar temas de tal seriedad y pidió que le entregaran a los detenidos y la mercancía.

Deliberaron de manera pública. Las manos se levantaron, tomaron el micrófono: “no tenemos el ánimo de hacerle guerra al narcotráfico, de meternos en la vorágine de esa guerra, pero no vamos a permitir conductas que afecten la armonía de nuestras comunidades”, lanzó un consejero; “dicen que hay que entregarlo al gobierno, pero el gobierno somos nosotros y ellos, parte de nuestra casa”, sumó uno de los coordinadores; “jóvenes, nosotros los queremos, pero los queremos recuperados, la comunidad no está contra el narco, más bien ellos están contra sí mismos”, dijo otro; “el culpable de todo este fenómeno de violencia social es la pobreza, la falta de educación, de oportunidades, los mixtecos no son narcotraficantes, ellos sólo siembran o la acarrear”, opinó un anciano y otro más “ésta es una guerra de pobres contra pobres, ¿quiénes están de soldados, de policías, de sicarios? ¡Hijos de campesino! Por eso al cobarde le conviene esta guerra para dividirnos”.

Serio y mal encarado el secretario atestiguó la votación: los comunitarios decidieron procesar a los detenidos porque, como hace 15 años, no confiaban en el sistema de justicia oficial.

Las semanas posteriores a la asamblea los coordinadores comunitarios recibieron amenazas por teléfono, les reclamaban a los acusados y la droga. Se negaron. Reforzaron las barricadas y aumentaron el número de policías. Aún los acusados esperan sentencia.

“El caso del narcotráfico demostró que la Comunitaria tiene fuerza y su decisión es respetada por el gobierno, fue un aliento para el sistema”, dice orgulloso don Cirino al recordar aquel episodio esta tarde. “Pero también evidenció debilidades que ya habíamos detectado”.

* * *

Bajo la sombra de los mangos y tamarindos y su olor que esparce el viento, un grupo de hombres con huarache y uniforme verde oscuro atienden una cátedra. Escriben en sus libretas desgastadas con letras torcidas, casi infantiles. Al lado, sus rifles y escopetas reparadas con alambre. Más parecen reliquias que armas de trabajo.

En San Luis Acatlán, una de las tres bases que tiene la organización en el estado, se lleva a cabo una asamblea para capacitar a los nuevos guardias y comandantes. La sede es un terreno amplio con una casa de cemento a medio construir donde está la oficina y una estación de radio comunal recién creada. Al lado, un cuarto que funciona de cárcel, tan pequeña que los seis hombres ahí detenidos se turnan para dormir. En frente una cocina de madera y cartón donde los vigilantes en turno devoran frijoles, tortillas, a veces un poco de carne. Sólo a veces.

Gabino González Mendoza, treinta y tantos años, voz recia y parca, simpático, está por terminar su servicio como

policía. Desde la cárcel, donde hace guardia, escucha la plática con arma en mano.

—¿Usted cree que esta policía podría funcionar en todo el país?

Gabino frunce el ceño y se ajusta la escopeta a la espalda.

—La verdad que a pensar mío siento que no, todavía le falta, tiene mucha necesidad, estamos con sufrimiento, le falta recurso. Pero ahí está la caminata, así poco a poquito a ver hasta dónde.

Cuando a Gabino lo escogieron para el cargo por tres años, él y su esposa tuvieron una repentina alegría. El nombramiento era reconocerlo como un hombre trabajador, en quien se puede confiar. Luego se pusieron un poco tristes. ¿De dónde iba a sacar dinero para mantener a sus hijos? Su esposa tendría que trabajar el doble, en la casa, la cosecha y la leña, mientras él daba servicio cada ocho días. Una tarde, cuando no había ni tortilla ni quelite para comer, la esposa le reclamó “¿por qué no ganas?, tu hija necesita comer, salte”.

—Yo le digo que no, que espere, ¿quién va a cuidar a mi pueblo? —asume serio su responsabilidad.

El trabajo como policía comunitario, comandante o consejero es voluntario, pero si el elegido no acepta es sometido a reeducación durante un año. Valentín Hernández, asesor mestizo de la organización, sabe que si pudieran rechazar el cargo la mitad lo haría por la falta de pago y seguridad. Están expuestos a ser detenidos, baleados y no tienen salario ni atención médica, menos un seguro laboral. Hoy por el déficit de personal 50 detenidos no reciben reeducación.

En la asamblea las manos se alzan sobre la punta de los fusiles. Quieren hablar. “En los años de inicio de esta lucha

se daba apoyo a policías”, “el policía arriesga su vida y no tiene un seguro ni doctor”, “por qué a coordinador se le paga y a policía no”.

El tema se ha discutido a lo largo de varios años. Recibir dinero del gobierno sería someterse a sus órdenes. Sin embargo, los coordinadores tienen un salario de 5 mil pesos al mes en un lugar donde el ingreso promedio de toda una familia indígena no llega a los mil pesos. La desconfianza merodea.

¿Cómo mantener una relación con la autoridad si ésta es la que somete, corrompe, humilla? Es un punto que la Comunitaria aún no resuelve. En abril del 2011 el gobierno estatal reconoció a la organización autónoma en la Ley de Costumbres Indígenas, pero los golpes bajos continúan: entregó en concesión a una minera extranjera un pedazo del territorio indígena, la corrupción mantiene a la región como la más pobre del país, los asesinatos y desapariciones de líderes sociales permanecen impunes.

En la asamblea las quejas continúan. No hay medicina para los detenidos, las celdas parecen pequeños calabozos, la justicia se hace a medias porque se detiene al malo y se olvida a la familia, ya empezó otra vez el robo y el asesinato, y algunos policías han sido señalados por abuso de autoridad. Y hasta por tortura.

—No podemos decir que somos blancas palomitas, tenemos algunos errores por no prevenir —reprende uno de los coordinadores a los comunitarios. En un rincón del patio, una señora descalza con sus hijos a medio vestir sigue la reunión desde hace un par de horas.

—Quizá haya errores, —continúa el coordinador— los policías a veces dicen “a mí nadie me molesta porque soy el

chingón de este pueblo”, es un error muy grave porque no somos judiciales ni del ejército, los que torturan, los que golpean y obligan a la gente que a fuerza diga su culpabilidad aunque no sea su culpa.

Paciente, la señora Constantina Mendoza escucha la clase de los nuevos policías y deja a su hijo, el más pequeño que llora de hambre, exprimirle los senos ya sin leche. Cuando la reunión va a terminar se acerca a los coordinadores y les pide liberar a su esposo. Como lo ha hecho cada domingo desde que lo detuvieron, tres meses atrás.

—Lleva tres días que ya no come, duele mano, está enfermo. No le dé golpe que mi marido no es un Jesucristo —les reclama. Ella no se siente representada en este sistema comunitario.

Silvino Encarnación, su esposo, está acusado de ser cómplice de matar y decapitar a un hombre. Lo inculpó el autor confeso del crimen, Celso, que luego se retractó. Era la única prueba en su contra. Ante la asamblea de este domingo la esposa del muerto pide justicia, pero de la buena.

Constantina, en cambio, acusa a la Comunitaria de haberlo torturado y de no darle atención médica ni permitirle llevarle doctor por las migrañas que padece. El último día del año 2011 unos 20 policías a bordo de dos camionetas llamaron a la puerta de su casa y entraron por él. Eran policías comunitarios y policías primitivos (como llaman a la Policía Municipal Preventiva) trabajando en coordinación.

—Le echaron bolsa en la cabeza de mi esposo y le echaron agua negra en un pocito, daban mucho golpe, grita bien feo mi esposo que le dieron tanto golpe —dice refiriéndose al método de tortura de sumergir a la persona en agua hasta la

asfixia. Como prueba la mujer guarda el pantalón, la camisa y los calzones que vestía ese día, sucios, acartonados por las aguas negras.

La asamblea la escucha y se queda sin argumentos. Al final, una de las coordinadoras le dirá que su marido será liberado cuando lo decida su comunidad, porque son sus vecinos quienes lo conocen de toda la vida y saben si es hombre de bien.

La mujer se va a casa llorando con los chiquillos alrededor y la reunión termina. Ahí, le pregunto a Pablo Guzmán, uno de los coordinadores, sobre lo ocurrido. ¿Quién los vigila de cometer abusos? ¿Quién protege el debido proceso?

—La ley cuadrada de allá (de las ciudades) lo soltaría porque no tiene pruebas contra él, pero ha hecho daño otras veces —responde convencido.

Pablo se refiere a que hace algunos años Silvino fue detenido por agredir a su hermano. Su esposa Constantina denunció a los comunitarios ante la justicia oficial, que los apresó y acusó de secuestro. Para la Policía Comunitaria el actuar de la mujer se trató de una revancha.

—¿Si un inocente es sentenciado a quién apela?

—Aquí somos libres de pensar con elasticidad, aquí se rompen los esquemas de la ley y se hace justicia. Lo bueno de no conocer el derecho de las ciudades es que no nos preguntamos esas cosas del derecho —confirma Pablo ante la insistencia.

Pablo es el único coordinador mestizo y eso genera algunas desconfianzas entre el resto de los integrantes que ven en sus reflexiones un dejo de venganza. La charla me recuerda la sabiduría de las palabras de don Cirino, que evitó el

linchamiento de unos asesinos y violadores en el año 2009, dirigiendo a los pobladores esta reflexión: “debemos vernos al espejo porque el próximo puede ser nosotros, nadie es perfecto y tarde o temprano podemos cometer error. Los que matan no tienen otra cara que nuestra cara”.

La Comunitaria sabe que vive ahora su propia crisis de confianza. En cierto modo, víctima de su éxito.

La caída de niveles de violencia en los 10 municipios donde gobierna tuvo algunos efectos no considerados por la organización. Por un lado, atrajo el interés de varios grupos políticos que han buscado controlar la organización, lo que ha generado divisiones internas; por otro, sus logros no significaron el reconocimiento a la organización por parte de los jóvenes, quienes nacieron a la par del proyecto y crecieron en el remanso de tranquilidad que dejó a su paso. Poco a poco los lazos comenzaron a soltarse entre los pueblos. Las preocupaciones fueron otras, o más bien la de siempre: la miseria histórica. De pronto, el relevo, la lucha renovada a las conquistas de los más viejos no llegaba.

En la asamblea, los futuros policías debaten que la verdadera justicia exige el involucramiento de la comunidad. Algo que en las ciudades hemos olvidado.

“La justicia que imparten nuestras autoridades regionales también se centra en este espíritu comunitario: es una justicia pública y colectiva, donde son varios los ojos que evalúan a quienes cometen errores”, dice el reglamento que en sus manos llevan esta tarde bajo la sombra de los mangos y tamarindos, en la asamblea de San Luis Acatlán.

* * *

—Durante muchos años hemos visto la cola del gobierno y la tiene larga, la tiene larga. Mucha cola que le pisen, pero tenemos que voltear a mirar nuestra cola, verla bien para no cometer mismos errores que ellos —dice don Cirino Plácido a la quinta taza de café. Habíamos recorrido durante varias horas, a través de su memoria, el camino andado por la Policía Comunitaria.

La inquietud es compartida por los coordinadores, consejeros, policías. En diez años los niños de ahora serán los guardianes y también los criminales. ¿Cómo se están preparando para ello?

Don Cirino se ve preocupado, pero no derrotado. Medido en sus reflexiones, reconoce riesgos, no el quiebre. Crisis como ésta han superado un par de veces en el pasado. Sabe cuáles son esos pedazos de cola y cómo reanudar camino.

Primero, la Coordinadora debe formar cuadros. Los líderes originales de la organización no se preocuparon por enseñar a los herederos el eje de la justicia comunitaria.

“La responsabilidad de los que le dimos vida está en que no preparamos al pueblo en 100 por ciento, no formamos cuadro. Por eso llega alguien que no tiene conciencia y se desvía, comete errores. Es el costo que está pagando el movimiento. No estamos previniendo, preparando las condiciones para que no se cometan errores, porque muchos de nosotros estamos desgastados físicamente, económicamente. Pensamos que las cosas ya se iban a dar por sí solas”.

Segundo, la Comunitaria sabe que enfrenta el divisionismo al interior de los pueblos. Para combatirlo, explica, deben retomar sus propias formas de organización al margen de los grupos políticos que quieren cooptarlos. Este anhelo de man-

tenerse unidos los empujó a iniciar una nueva cruzada: recuperar su derecho a elegir mediante usos y costumbres a sus autoridades, dejando de lado el sistema de partidos.

“El poder nace del pueblo y debe instituirse en beneficio del pueblo. El sistema de partidos no nos sirve para crecer como pueblos. Nos confronta, nos divide, nos manipula, nos corrompe, nos utiliza y al final nos hace a un lado”, escribieron en una convocatoria a las comunidades para sumarse a la exigencia de su autonomía.

Tercero, establecer límites en la relación con el gobierno. Cuando empezó la Policía Comunitaria se aliaron con el Ejército mexicano para la capacitación en el uso de armas, aunque en el fondo había una doble intención, por ambas partes. Los comunitarios querían mandar el mensaje a los caciques y delincuentes que el Ejército era su amigo. Los militares buscaban penetrar y desarticular a la organización.

“No queremos ser estructura de una casa que se está cayendo, queremos una estructura propia de los pueblos. Solamente nosotros vamos a lograr cambiar las cosas, pero no siendo el Estado. Imagínate, no le puedes tirar piedra estando dentro, se te cae techo encima”, las palabras de don Cirino ilustran.

Cuarto. La Policía Comunitaria debe imaginar su futuro y caminar hacia él. Hacer un programa de prevención, trazar una ruta de desarrollo porque la vida de los pueblos sigue marcada por la pobreza y el sometimiento del Estado. Se trata de preparar las condiciones para que la gente viva libre de inseguridad y miseria.

La mirada chispeante de don Cirino parece alumbrar ese camino. El hombre empina el café antes de lanzar una úl-

tima imagen: la justicia es como una red que se teje entre todos.

—Si hay uno que no teje, falta pedazo. O si teje mal, se rompe.

NO NOS ARRANCARÁN SUS NOMBRES

Elia Baltazar
Luis Guillermo Hernández

Elia Baltazar

Elia Baltazar es periodista freelance, ha sido reportera, editora, jefa de redacción, jefa de información, maestra de periodismo, tallerista y conductora del programa de radio en internet Ponte en Medio. Escribe en blogs y está en twitter como @eliabaltazar. Ganó el premio latinoamericano de periodismo UNIFEM ONU en la categoría de reportaje, y el Premio de Periodismo sobre Seguridad Informática en 2011. Ha colaborado en distintas investigaciones y publicaciones internacionales sobre la situación de los periodistas en México, entre ellas, en la revista Nieman Reports (Universidad de Harvard) y recientemente en el libro No Woman's Land, coordinado por INSI (International News Safety Institute). También ha colaborado con artículos y reportajes en los libros Migraciones vemos... infancias no sabemos (Ririki), 72 migrantes (Almadía, fronterapress) y 012-018: Ejes y Transición de la República (UAM Xochimilco). Colabora en el Huffington Post Voces y forma parte de la Red de Periodistas de a Pie desde su fundación.

Luis Guillermo Hernández, periodista (ver pág. 196).

Sobre la mesa, Héctor Sánchez despliega una hilera de hojas. Hay copias de diplomas, reconocimientos y constancias académicas ordenados de manera cronológica. Son el relato breve de una vida corta que lleva el nombre de su hijo: Jethro Ramssés Sánchez Santana, detenido, torturado y asesinado en mayo de 2011. Tenía 26 años y vivía en Jiutepec, Morelos. Sus últimas cuatro horas de vida son el capítulo más largo de su biografía y están contenidas en siete tomos de una investigación por desaparición forzada.

En su muerte están involucrados policías municipales, federales y soldados de la 24 Zona Militar de Morelos: al menos 40 uniformados, de acuerdo con expedientes del caso. Hasta ahora, sin embargo, sólo tres militares enfrentan juicio en la prisión del Campo Militar 1. Dos por lesiones, homicidio calificado e inhumación clandestina, y un coronel de infantería por el encubrimiento de esos delitos. El resto ha evadido cualquier posible responsabilidad, escabulléndose

tras la justificación que hace sospechosa a la víctima: “En algo estaba metido”. “Por algo le pasó”. “Uno nunca sabe...”. Es la sentencia anticipada que, desde hace seis años en este país, hace culpables a las víctimas, niega a los muertos por violencia su derecho a la inocencia, y a sus familias, la justicia. “Daño colateral” llaman las autoridades a la tragedia: cada una de las historias de los que salen de casa vivos y aparecen muertos, los que ya no vuelven, los que se llevan los criminales, o los policías y militares; los cuerpos sin identificar. No hay nombre para todas las víctimas ni números exactos. Apenas cálculos.

En contra de Jethro han dicho que al ser detenido durante una riña en la feria de Acapatzingo, se jactó de ser miembro de un cártel del narcotráfico y amenazó a los policías. Dos meses después apareció muerto en un hoyo de tierra en Atlixco, Puebla.

La voz de Héctor se enciende sólo de recordar que en el expediente del crimen hay declaraciones que involucran a Jethro con el narcotráfico: quiere justicia y dignidad para su nombre. Por eso ha recuperado de los cajones familiares fotografías y documentos que lo ayuden a proyectar en tamaño real la imagen de su hijo. No sólo para dispersar los rumores que pretenden torcer su historia, sino para defender a su familia de una duda “injusta” que los medios han difundido sin apenas investigar quién era Jethro, cómo vivía ni el daño que ocasionan al proceso judicial.

“Quieren criminalizarlo para quitarle fuerza al caso — dice —, pero yo estoy seguro de lo que era Jethro y voy a demostrarlo, porque lo que hicieron con mi hijo fue un acto de cobardía que no puede quedar impune”. Toda su indig-

nación no alcanza para exprimirle la tristeza, pero al menos ha convertido su luto en fuerza. Sólo así pudo sostenerse en pie este último año. Atravesar la desesperación y la ira y, después de todo, encontrar la manera de levantar el nombre de su hijo y salvarse él mismo de la desesperanza con un proyecto que cariñosamente llama Multiplicando a Jethro: una escuela preparatoria y técnica para revivir la memoria de su hijo en cada uno de los estudiantes. “Queremos reproducir un ejército de muchachos positivos, que nos recuerden a todos cómo era él”.

* * *

El lugar es pequeño pero suficiente: una oficina para la dirección y dos espacios adaptados como aula y biblioteca. Suficiente por ahora para recibir a la primera generación de alumnos del Centro de Educación y Capacitación Ingeniero Jethro Ramssés Sánchez Santana, ubicado en la calle Paseo de los Lirios número 7, colonia Ampliación Bugambilias, en Jiutepec, Morelos.

Allí, frente al local pintado de azul y blanco, con puertas y ventanas de cristal opaco, unas 30 personas se reunieron el 19 de junio de 2011 para la inauguración de la escuela que tiene como lema: “Luz de trabajo y dedicación”. Ese día Jethro habría cumplido 27 años y su padre quiso que el acto fuera al mismo tiempo homenaje y celebración.

Sin saberlo, Héctor sigue el ejemplo de otras ciudades y comunidades con heridas profundas por hechos de violencia, donde la pérdida y el dolor también han sido cimiento para obras de recuerdo colectivo. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal, en Chiapas, levantaron una capilla en honor de los 45 muertos; Atoyac, Guerrero, pintó su mural para las

víctimas de la guerra sucia; en Creel, Chihuahua, las familias de los 13 jóvenes asesinados en 2008 construyeron la Plaza de la Paz. Son todos actos de amor y lucha que buscan preservar la memoria de las víctimas con una acción colectiva o un espacio común. Es la lucha contra el olvido. La reparación simbólica que hay detrás de acciones tan sencillas como rebautizar calles, construir escuelas, levantar memoriales para honrar a quienes debían estar y no están.

Para Héctor, la escuela es la continuación de una tarea que Jethro ya había emprendido al capacitar a jóvenes con ganas de superarse. Lo hizo desde muy joven como maestro de natación y lo siguió haciendo como maestro en la Universidad Politécnica de Morelos. “Era uno de sus sueños”, dijo en la inauguración. Uno al menos que Héctor ha podido concretar en el mismo local que había cedido al hijo para instalar su propio taller, al lado del suyo. Jethro quería convertir ese negocio en una pequeña empresa y antes de su desaparición había comenzado a gestionar un apoyo federal.

Ingeniero electromecánico egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec, quería ser empresario y para ello eligió una maestría en administración de negocios, en la Universidad Latina de Cuernavaca. Para aprender inglés vendió su auto y viajó a Texas, donde trabajó durante ocho meses. Nunca sobró el dinero en su casa, pero “él siempre veía las cosas hacia arriba, nunca se conformó”. Y no es que fuera un ratón de biblioteca, era un joven normal, que le gustaba el deporte y la fiesta, pero tenía aspiraciones que contagiaban. Sobre todo a su padre, que hoy saca fuerza del recuerdo para llevar adelante el proyecto de escuela que ya tiene plan de estudios, director y maestros.

“Hemos alejado un poquito el dolor. Inconscientemente, creo, este proyecto es como terapia, nos distrae y alienta saber que hacemos algo positivo, un bien social en favor de los jóvenes”. Hace falta, pues en esa entidad la violencia pintó diana sobre su frente.

Las cifras lo demuestran. Entre las mil 500 personas asesinadas entre 2009 y 2012, había 600 víctimas menores de 30 años. La mayoría de Cuernavaca y de los municipios de Temixco, Cuautla, Xochitepec, Emiliano Zapata, Huitzilac y Jiutepec, de acuerdo con reportes de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).

No bastó la muerte, pues en muchos casos las autoridades intentaron estigmatizar a jóvenes asesinados, deslizando versiones sobre posibles vínculos con el crimen organizado.

En esa entidad que el PAN gobernó durante 12 años, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PDJE) tenía registro de mil 300 personas desaparecidas hasta 2011. La CIDHM considera que al menos 10 casos han sido desapariciones forzadas. Jethro es uno de ellos. Sonríe en las fotografías que su padre lleva consigo. Pero en el aire hay una tristeza que aprieta la respiración.

* * *

Jethro Ramssés Sánchez Santana desapareció la noche del domingo primero de mayo de 2011. Había salido de su casa para jugar fútbol con sus amigos y luego ir a la Feria de Cuernavaca, en Acapantzingo. Hasta allí, la historia sin contrastes. La confusión comienza a partir de las horas siguientes a una riña en la que habría participado con otros amigos, entre

ellos Horacio Cervantes Demesa, y que justificó la intervención de policías municipales.

Lo que ocurrió a partir de esa tarde está asentado en el expediente 331/2011 del Juzgado Quinto Militar. A Horacio lo sacaron primero de la feria y luego lo aprehendieron. Jethro, en cambio, fue detenido en el lugar de la pelea. Los municipales llevaron a los dos a la parte posterior de la feria y allí los golpearon. Argumentaron que Jethro presumió tener relación con un grupo de la delincuencia organizada y los amenazó. Por eso llamaron a la Policía Federal.

En su declaración, Horacio dijo que los federales llegaron con pasamontañas y también los golpearon. Cuando preguntó a uno de ellos qué estaba pasando, “me dijo que un amigo mío había abierto el hocico de más”. Luego los entregaron a los militares, que llegaron a la feria en tres unidades tipo pick up. Un “teniente Guerra” (era José Guadalupe Orizaga y Guerra) pidió a sus hombres vendar los ojos de los detenidos y subirlos a las unidades, separados.

“Me esposaron con las manos hacia atrás, de ahí me subieron a una camioneta, y de ahí ya no supe más de Jethro...”. Horacio declaró una sola vez. Nunca más respondió a los citatorios.

El 4 de julio de 2011, el Ministerio Público Militar consignó al teniente de infantería José Guadalupe Orizaga y al subteniente Edwin Raziel Aguilar, quienes confesaron la muerte del joven en las instalaciones militares, a consecuencia de una “broncoaspiración”.

En los informes del Ejército se apunta que Horacio y Jethro fueron interrogados en el cuartel de la 24 Zona Militar. Horacio fue liberado esa misma madrugada. Pero de Jethro nadie volvió a saber... Hasta dos meses después.

Su cuerpo fue hallado en un paraje conocido como La Ocotera, en Atlixco, Puebla. Las autoridades de ese estado localizaron sus restos y las pruebas de ADN confirmaron su identidad.

* * *

Héctor no sabe qué resorte disparó la idea de abrir una escuela en memoria de su hijo. Sólo sucedió que un día, mientras recorría de nuevo su recuerdo, la imaginó de pronto. Algo tenía que hacer para mitigar el dolor y sacudirse la frustración de la pérdida. “Mi esposa y mis hijas estaban deshechas y sólo se me ocurrió que teníamos que hacer algo para mantenernos ocupados”. La familia compartió la idea y emprendieron el proyecto. “Creo que vamos bien, aunque nunca supimos hasta dónde podíamos llegar”.

No sólo dudaban de la entereza de su ánimo, sino de la disposición de recursos, pues comprobaron que en México los familiares de las víctimas pagan con tiempo y dinero el derecho a la justicia. Desde la desaparición de Jethro dispusieron de todo a su alcance para buscarlo y, ya aparecido el cuerpo, siguieron en el trajín de los traslados de Cuernavaca al Distrito Federal, entre ministerios públicos, juzgados, abogados, organizaciones civiles, comisiones de derechos humanos.

“Abandonamos todo”, dice Héctor, y nadie en la familia quería volver al negocio que abría la herida. “Ni mis hijas ni mi esposa podían estar allí”. Sólo Clara García, vieja amiga de la familia y empleada del taller, pudo hacerse cargo para evitar la quiebra.

Héctor es un hombre sencillo que halla donde puede las palabras para explicarse: “El dolor hace muchas cosas: yo pensé

en suicidarme, emborracharme, ser un perdedor. Pero tengo la confianza de que mi hijo está arriba y no creo que lo viera con buenos ojos. Siempre busqué la forma de hacerlo gente de carácter, porque yo todavía tengo una hechura a la antigüita, en el sentido de ser muy hombre para enfrentar las cosas”.

Habla de sí mismo en pasado. Del hombre apasionado que “se ponía chinito” al escuchar la música de los chinelos o el mariachi que acompañaba las fiestas familiares. Hoy es otro. Un hombre que se obliga a seguir adelante por su familia, dice. Por sus dos hijas y su esposa que prefieren ya no hablar de Jethro en público. “Ya nos dieron un trancazo, pero quiero que ellas se recuperen, porque yo no sé si me voy recuperar. Al menos sé que no soy el mismo”.

Ha aprendido a hablar con los términos de la ley, pero no se acostumbra. Nunca había tenido nada que ver con policías ni ministerios públicos, y menos con militares. Ahora, en cambio, “cuando veo una camioneta del Ejército me entra una inquietud tremenda”. Pero no es miedo, dice. “Ya todo lo malo le pasó a mi hijo y no puede haber nada peor”. Hay pausa. Su garganta se corta. Ha tenido que aprender a salvar los silencios ahogados desde la primera conferencia de prensa a la que convocó su abogado, para pedir la aparición con vida de Jethro.

Héctor ha vuelto al negocio que inauguró hace 33 años. Su tiempo está dividido entre el taller, el caso de su hijo y el Centro de Educación y Capacitación. La escuela no es un negocio sino un servicio, aclara, “y no pretendemos sacar provecho”.

Como está pensada para jóvenes con necesidad económica y ganas de trabajar, han decidido otorgar media beca a

los mejores estudiantes de preparatoria. “Aquí podrán cursar su educación media superior y una carrera técnica al mismo tiempo, porque la idea es que puedan comenzar a trabajar por su cuenta desde el principio, para que más tarde ellos, si tienen ganas, cubran su universidad”.

Así educó Héctor a sus hijos y así piensa que otros podrán avanzar por sus propios medios, sin necesidad de pensarse como empleados. “Queremos alentar en ellos una ambición positiva. No serán profesionales terminados, pero sí podrán seguir adelante”, dice.

Los estudiantes del Centro de Educación y Capacitación asistirán a clases cuatro horas diarias: dos para cursar la preparatoria y el resto para su formación técnica. Héctor cuenta con el plan de estudios oficial para educación media superior y él diseñó la parte técnica a partir de sus conocimientos en mecánica automotriz. También ha dispuesto de toda su herramienta y equipo para la práctica de los estudiantes, aunque le faltan simuladores. Ha pensado recurrir a las empresas automotrices y fundaciones para conseguir donativos. “Lo que ya no utilizan y puede servir a los muchachos”.

Por el momento necesita cuatro profesores que recibirán su salario de las cuotas de los estudiantes; serán simbólicas, pero ayudarán a mantener el lugar. La dirección estará a cargo de Vicente Romero Ortiz, un profesor con 40 años de experiencia docente, que ayudó a la familia Sánchez Santana en los trámites. Héctor llegó a él por recomendación del abogado Cipriano Sotelo Salgado, quien lleva el caso de Jethro y recientemente inauguró una escuela de derecho en Cuernavaca.

“No saben cuánta admiración despierta esta familia que ha transformado su dolor en algo positivo, pensando en los

jóvenes para prolongar la memoria de su hijo. Donde quiera que esté, Jethro debe sentir un gran orgullo”, dice Vicente.

En él cabe todo el entusiasmo que aún no halla su lugar en la vida de los Sánchez Santana. Para él está claro lo que significa ese centro. “Se trata —dice— de no quedarnos nada más en el dolor, el pésame y la pérdida, sino transformar todo eso y redignificarlo. Tener la alternativa de vida para ofrecer algo a los demás en memoria de alguien”.

Héctor, por ahora, no sabe cómo traducir este esfuerzo. “Dicen que hay un motivo que nos hace crear y un hábito que nos hace seguir. El hábito por ahora me ayuda a seguir”. Qué más podía hacer que seguir adelante para limpiar el nombre de su hijo y su familia, porque “sólo llorar no nos ayudaba en nada”.

Su deseo es que la escuela crezca y en el futuro ocupe todo el predio que hoy comparte con su taller y la casa familiar. Todo lo hicimos “a valor mexicano, con el coraje, la ambición y el cariño por mi hijo”, dice.

Héctor Sánchez espera que el Centro de Educación y Capacitación “Jethro Ramssés Sánchez Santana” pueda arrancar con sus cursos de inmediato para ver allí multiplicado a su hijo.

UNA JUGADA CONTRA EL OLVIDO

Luis Guillermo Hernández

Dice que lo ve, que puede verlo nítidamente, fuerte, joven, posible aún. Tan diestro con el balón, tan perseverante tacle con su número 62 en la espalda, que cuando su equipo, los Jaguares del CBTis 128, logra igualar el marcador contra los Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez en el último cuarto del juego final para obtener el Tazón Juárez “Ingeniero Miguel Prone”, Adrián Cadena incluso llega a gritar, entre lágrimas, el nombre de su hijo:

—¡Bien, bien, bien, muchachos... bien Rodrigo!

Rodrigo no está en el campo, el popular *hoyodome* de la zona del Chamizal. No ha estado ahí desde aquella noche de enero de 2010 cuando fue asesinado, en la colonia Villas de Salvárcar, junto con otros 14 jóvenes que bailaban y reían en una fiesta de cumpleaños en la que también estaba Juan Carlos Medrano, mariscal de campo de Jaguares.

Pero sucede que en ese terregal hundido que fue acondicionado como cancha de juego hace más de seis años, muy

próximo al territorio estadounidense, su padre aún le grita. Dice que lo ha seguido haciendo desde aquella noche en que decidió mantener vivo el espíritu de Rodrigo a través del impulso a la que era su mayor pasión: el fútbol americano.

Y que en cada juego, en cada triunfo o derrota, para él hay mucho más que sólo un grupo de muchachos persiguiendo un balón: hay un momento insustituible, en el que su hijo vuelve a vivir.

—Éste es el equipo en el que debería estar mi muchacho. En cada uno de estos muchachos veo parte de mi hijo... es lo que me sirve a mí como terapia, porque yo sé que a él le gustaba esto. Por eso sigo trabajando por el equipo, por mantener vivo su recuerdo— dice el señor Cadena.

Hombre robusto, moreno, de rasgos gruesos, marcados, pero trato suave, como uno de esos caballeros cortesés del siglo anterior, observa detenidamente cada jugada desde la línea marcada con cal.

Secunda un griterío de muchachos en el campo y de mujeres, niños y hombres en las gradas de cemento.

Se frota las manos, un par de gruesas y rasposas manos de quien trabaja con máquinas, e intercambia miradas con el coach del equipo, Papá Tonka le llaman todos, aunque su nombre es Daniel Gallegos. Entonces, el señor Cadena dice:

—Él es el verdadero héroe. Cuando lastimaron a nuestros muchachos, a siete de los nuestros (dos muchachos muertos, cinco más heridos, quienes lograron salvar sus vidas) pensamos que era el fin de Jaguares, que nadie iba a querer jugar con nosotros.

Papá Tonka es un hombre de baja estatura, musculoso, de nariz aguileña y ojos muy pequeños, claros. Tiene un bigote

a la Pedro Infante y un ánimo inagotable, juvenil, recio, que lo hace correr, gritar, demandar esfuerzo, pero lo envuelve en un celofán de camaradería.

Cuando ocurrió la masacre, cuando su equipo se derrumbó por la muerte de sus integrantes y las heridas de otros cinco, Papá Tonka decidió afrontar el terror de la muerte con un espíritu de vida.

—La muerte es inminente, pero también la vida—les dijo a sus muchachos, devastados por la cercanía de la tragedia.

Su mayor proeza, dice Cadena, fue haber inyectado vida y disciplina de respeto en un lugar de muerte y caos. De oscuridad.

Justo después de la masacre, cuando las autoridades federales, encabezadas por el presidente Felipe Calderón, llegaron hasta Villas de Salvárcar a ofrecer disculpas públicas por haber afirmado, a lo tonto, que los chicos asesinados eran narcotraficantes, Papá Tonka se hizo con el micrófono, para hacer una petición al mandatario que más parecía exigencia:

—Deme armas, señor Presidente, pero no de esas que matan, deme armas de esas que dan vida, deme espacios públicos, deme esto—dijo señalando al campo de fútbol,—y de esto vamos a sacar muchos jóvenes.

Todavía insistió:

—Éstas son las armas que queremos, porque sabemos que es mucho trabajo, pero sabemos que con un joven que mantengamos aquí en cualquier disciplina, sabemos que ese joven no va a tener problemas.

Casi de la nada, el exjugador de americano, profesor del CBTIS, comenzó a impulsar su idea, que fue secundada por

los padres de un número mayor de chicos y chicas: pidió recursos para incrementar el número de sesiones de americano en el CBTIS e impulsó la creación de otras dos divisiones, infantil y femenil, para que los niños desde los 6 años y las mujeres se sumaran al deporte.

Al mismo tiempo y casi en paralelo, el señor Cadena y los padres de Medrano, los dos Jaguares muertos en Villas de Salvárcar, crearon una asociación civil, Jaguares jóvenes de bien AC, con el objetivo de tratar de recuperar el tejido social roto en Ciudad Juárez mediante actividades familiares y de solidaridad social.

—Les enseñamos valores, todos los valores, para salir de esta basura. Respeto al otro, dignidad, honestidad, que sepan que ganar por ganar no es un objetivo. Si vamos a salir de esto, que sea con nuestros mejores hombres —dice Papá Tonka.

Cuando los chavos se quedaron sin recursos, porque la ciudad se volvió un fantasma sin ingresos suficientes, el coach donó un terreno personal en una colonia de la periferia de la ciudad, como a 20 minutos en auto del CBTIS, para abrir un centro de lavado de autos, Carwash Jaguares, que los mismos jugadores hacen funcionar en sus ratos libres.

Turnándose en jornadas de media mañana o media tarde, según tienen necesidad de pagar algún viaje de prácticas, jugar algún campeonato, completar la colegiatura, comprar material de alguna materia escolar o incluso si quieren traer efectivo en la bolsa, los muchachos llegan al *carwash* y se ponen a chambear.

Las ganancias, después del pago de agua, luz y servicios, son íntegras para ellos y sus necesidades. Y mantienen el negocio vigente casi sin supervisión adulta.

Una proeza difícil de entender si se desconoce el contexto actual de Ciudad Juárez, una ciudad con un estimado de 450 bandas juveniles, integradas en su mayoría por jóvenes de entre 14 y 25 años, cuya principal actividad, en muchos de los casos, es la venta de mariguana o de toda la gama de drogas sintéticas, por la que reciben entre 500 y dos mil pesos semanales.

A contrapelo de las mismas autoridades, el coach y el señor Cadena, junto con los padres de los jóvenes Jaguares, promovieron la creación de un campo deportivo en el corazón de Villas de Salvárcar, el epicentro de su tragedia, con el objetivo de fomentar el deporte en la zona.

Hoy, a los 90 jugadores de distintas categorías que tenían en 2010, se han sumado otros 700, desde los 6 hasta los 24 años, incluyendo a las jugadoras del primer equipo femenil, quienes además de jugar, participan en las actividades sociales que lleva a cabo la asociación y se impregnan de la filosofía de respeto y legalidad que intentan imprimirle sus organizadores.

Algo de éxito pudo haber tenido el esfuerzo de todos ellos, dice el señor Cadena, significativo en una ciudad donde la lucha por derrotar al rival convirtió en carnicería lo que fue una ciudad boyante, pletórica de vida.

En los últimos minutos del juego final contra los Indios de la Autónoma, los Jaguares se apoderan del balón y son sujetos de un juego sucio que obliga a uno de los suyos a ser sacado en ambulancia. Esa jugada les cuesta el campeonato, pero les significa un reconocimiento inesperado: el trofeo al equipo con el juego limpio más ejemplar.

Quien recibe el premio, Raúl Parra, es un muchacho de 19 años, mariscal de campo del equipo, que hoy ostenta el liderazgo que una vez tuvieron Rodrigo Cadena y Juan Carlos

Medrano. Que impulsa las jugadas, que grita, que organiza ataques, que revienta jugadas del adversario, que se sacude el sudor y sigue corriendo.

Cuando el señor Cadena lo observa, me comenta:

—Cuando lo veo correr, a veces me recuerda a mi muchacho.

No es sólo su pasión por el juego. Su manera de pelear el balón y su forma de correr. El muchacho lleva consigo cicatrices. Una en la pierna derecha, que le cruza el muslo de un lado al otro. Otra en la pantorrilla derecha y una más en el pie. También estaba aquella noche en Villas de Salvárcar.

—Son mis cicatrices —dice el muchacho cuando le pregunto. Sonríe. Quién sabe por qué, pero sonrío.

El señor Cadena lo abraza. Seguramente ve en los ojos de Raúl alguna expresión, algún guiño, algún vestigio que le devuelve a Rodrigo. A su hijo.

ÍNDICE

NOTA DE LAS EDITORAS	7
TODOS NOSOTROS, FOGATAS / PRÓLOGO <i>Cristina Rivera Garza</i>	13
EL PUEBLO QUE ESPANTÓ AL MIEDO <i>Thelma Gómez Durán</i>	27
VIDA EN LA RUTA DE LA MUERTE <i>Alberto Nájjar</i>	51
LAS VOCES DE LA GUERRA <i>Daniela Pastrana</i>	75
TRAS LAS PISTAS DE LOS DESAPARECIDOS <i>Marcela Turati</i>	101
TINTA CONTRA EL SILENCIO <i>John Gibler</i>	127
LA RESISTENCIA CIBERNÉTICA <i>Vanessa Job</i>	147
EL BARRIO BAJO ACECHO <i>Lydiette Carrión</i>	171
LA CIUDAD DE LAS PERSONAS SANADORAS DE ALMAS <i>Luis Guillermo Hernández</i>	195
LA JUSTICIA DE TODOS <i>Daniela Rea</i>	217
UNA ESCUELA PARA LA MEMORIA <i>Elia Baltazar</i>	243
UNA JUGADA CONTRA EL OLVIDO <i>Luis Guillermo Hernández</i>	253

Entre las cenizas se terminó de imprimir en
la ciudad de Oaxaca de Juárez en noviembre de 2012,
poco antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón.
Él se va, pero se quedan miles de muertos y, entre esos
muertos, muchas historias que aquí están, como fogatas,
ofreciendo fuego, luz y cobijo.
El tiraje de este libro consta de mil ejemplares.

